

**ESTUDIO DE CASO SOBRE LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LOS
PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN LOS MONTES DE MARIA**

JEAN CARLOS RIVERA MUÑOZ

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMA DE DERECHO

BARRANQUILLA

2020

**ESTUDIO DE CASO SOBRE LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LOS
PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN LOS MONTES DE MARIA**

JEAN CARLOS RIVERA MUÑOZ

**TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO DE GRADO PARA OBTENER EL
TÍTULO DE ABOGADO**

LÍNEA: DERECHO, ESTADO, CULTURA Y SOCIEDAD

ASESOR: DR. ALEXANDER GONZALEZ GARCIA

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMA DE DERECHO

BARRANQUILLA

2020

Este trabajo está dedicado a toda mi familia, amigos y seres queridos que me han brindado su apoyo y que de una u otra manera contribuyeron a la creación de esta obra inspirada en la vida que diariamente les toca afrontar a las víctimas de la guerra armada.

A mis padres, María Margarita Muñoz Molinares y Juan Carlos Rivera Tapia, además de deberles la vida, son ese hermoso de justicia en el que me inspiré durante todas mis etapas, me han ayudado diariamente a afrontar los obstáculos que me depara la vida.

A mis hermanos, Juan Camilo y Laura Melissa Rivera Muñoz quienes han sido mis compañeros en incesantes momentos felices, difíciles y tristes de toda mi vida.

Pero, sobre todo, quiero hacer una dedicatoria a todas las víctimas del conflicto armado colombiano, quienes diariamente tienen que subsistir en condiciones indignas de la vida al perderlo todo por la guerra armada.

Jean Carlos Rivera Muñoz

Dedicatoria.

Agradezco a mi Maestro, Tutor, Profesor y Amigo incondicional Alexander González García, por ilustrarme, guiarme y ayudarme con el progreso de este trabajo. Le estaré eternamente agradecido por hacerme comprender el talento que acompaña a la filosofía innata de los seres humanos y la importancia de la moral en un conglomerado de personas. La enseñanza de aniquilar paradigmas y cambiar el presente para vivir en un mejor futuro.

Agradezco a la comunidad del Municipio Carmen de Bolívar y a los funcionarios que contribuyeron al desarrollo de la presente investigación, sin su cooperación hubiese sido imposible realizar las conclusiones de este trabajo.

Mis agradecimientos a las víctimas del Municipio del Carmen de Bolívar que sufrieron los agravios del conflicto armado en esta zona de la región, las cuales accedieron a ser entrevistadas a pesar de las amenazas que diariamente sufren por parte de grupos de despojadores.

A la Universidad Libre Seccional Barranquilla, por incentivar mi aprendizaje y formación intelectual. A esta institución le debo la mayoría de los conocimientos teóricos que adquirí y los momentos que compartí con mis colegas esta etapa de mi vida.

Jean Carlos Rivera Muñoz

Agradecimientos.

PÁGINA DE ACEPTACIÓN

Firma del presidente

Jurado

Jurado

Barranquilla, 2020.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	9
1. Importancia del presente estudio de caso	10
2. Motivación de la presente investigación	12
3. Pregunta de la investigación.....	13
4. Objetivos.....	13
5. Presentación de Capítulos.....	14
CAPITULO I: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	16
1.1. Focos de interés investigativos	17
1.1.1. Problemática de la materialización de la ley de victimas	17
1.1.2. Los opositores de buena fe en el proceso de restitución y el vacío normativo de la ley de víctimas.....	20
1.1.3. La eficacia de la jurisdicción especial para la paz frente al desplazamiento y la desaparición forzada ante el derecho internacional humanitario	22
1.2. Enfoques metodológicos y pistas para nuevas investigaciones	24
1.3. Originalidad de esta investigación	25
CAPITULO II: EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA	28
2.1. Conflicto Armado Interno.....	32
2.1.1. El conflicto armado Interno: Nivel Nacional.....	32
2.1.2. Conflicto Armado Interno: Nivel Territorial	36
2.2. Las víctimas del conflicto Armado	39
2.2.1. Las víctimas con ocasión del conflicto armado	40
2.2.2. Las víctimas según la ley 1448 del 2011	41
2.2.3. Las víctimas en la región de los Montes de María con ocasión del conflicto armado: Ley 1448 del 2011	46
CAPITULO III: LA LEY 1448 DEL 2011 EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO ...	48
3.1. Análisis de la ley 1448 del 2011	49
3.2. Objetivos de la ley 1448 del 2011 en el posconflicto.....	54
3.3. Contenido de la ley 1448 del 2011 y las instituciones creadas	57
3.4. Utilidad de la ley 1448 del 2011 respecto a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María.....	71
3.5. Sentencias proferidas en restitución de tierra: Los Montes de María.....	73
3.6. Restitución de Tierras como medida de reparación Integral	75
3.6.1. Importancia de la Reparación Integral	76
3.6.2. Importancia de la Restitución de Tierras.....	77

3.6.3. Importancia de la eficiencia.....	79
3.6.4. Importancia de la eficacia	79
3.7. La eficacia y la eficiencia de la etimología de la ley de víctimas y restitución de tierras en el Estado Social de Derecho	80
CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO	87
5.1. Paradigma de la investigación.....	89
5.2. Pregunta de investigación	91
5.3. Objetivos	91
5.4. Hipótesis.....	93
5.5. Tipo de investigación.....	93
5.6. Método de investigación.....	97
5.7. Población y Muestra	99
CAPITULO V: PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS.....	102
5.1. Eficiencia.....	108
5.1.1. Perspectiva de la Víctima.....	109
5.1.2. Perspectiva del funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras	112
5.1.3. Perspectiva de la Procuraduría Delegada.....	115
5.1.4. Perspectiva de la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar	119
5.1.5. Hallazgos.....	122
5.2. Eficacia.....	129
5.2.1. Perspectiva de la Víctima.....	130
5.2.2. Perspectiva del funcionario de la Unidad de Víctimas	133
5.2.3. Perspectiva de la Procuraduría Delegada.....	136
5.2.4. Perspectiva de la Alcaldía Municipal.....	139
5.2.5. Hallazgos.....	140
5.3. Medida de Restitución de Tierra “Individual” y “Colectiva”	141
5.3.1. Hallazgos.....	144
CAPITULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS	152
6.1. Relación con la justicia ordinaria: la usucapión y los procesos de restitución de tierras de la ley 1448 del 2011	152
6.2. Responsabilidad del Estado colombiano.....	156
6.3. Limitaciones a la ley 1448 del 2011	157
CONCLUSIONES.....	161
BIBLIOGRAFÍA.....	167
ANEXOS	171
Anexo I: Entrevista a las víctimas.....	172

Anexo No. II: Entrevista a funcionarios y garantes de la ley 1448 del 2011 en el proceso de restitución de tierras	185
Anexo No. III: Entrevista a la procuraduría del Carmen de bolívar	193
Anexo No. IV: Entrevista a funcionaria de la alcaldía respecto al tema de víctimas en los Montes de María, Carmen de bolívar.	199
Anexo V: Relación de investigaciones sobre la eficacia y la eficiencia en los procesos de restitución de tierras, segundos ocupantes y ley 1448 del 2011	205

ESTUDIO DE CASO SOBRE LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN LOS MONTES DE MARIA

INTRODUCCIÓN

Al calor del conflicto armado que duró más de 50 años, surge la ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 del 2011) para brindar una atención especializada y asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto armado, quienes estuvieron en medio de las luchas entre las guerrillas de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha y demás grupos al margen de la ley, frente al poderío del Estado.

Esta guerra multilateral pasó por numerosas etapas a lo largo de su historia, se intensificó al descubrir que los bandos estaban siendo financiados por el narcotráfico y otras actividades ilegales en las que el campesinado, los sitios rurales y algunos urbanos fueron víctimas de delitos de lesa humanidad (Desplazamiento forzado, Homicidios selectos, genocidio, violación, Desaparición forzada); muchos de ellos tenían como finalidad la hegemonía sobre dicho territorio para establecer sus frentes de resistencia. De ello quienes salieron perjudicados fueron la gran cantidad de familias campesinas y zonas marginadas de la soberanía Nacional, entre estos se encuentran los Montes de María el municipio del Carmen de Bolívar donde surge la investigación.

La ley de víctimas y restitución de tierras nace para situar a los perjudicados de dicha colisión en un plano de post conflicto, debido a que las otras normas públicas no tuvieron como característica fundamental un modelo reparación integral como lo es la restitución (*Justicia restaurativa*) junto con la asistencia, ayuda, abastecimiento y resocialización de las víctimas; son por ejemplo la ley 965 de 2005 o ley de justicia y paz (Desmovilización), Decreto 884 del 2017 (Electrificación de zonas rurales), Acto legislativo No. 01 del 2016 (Implementación del acuerdo final de la habana), etc.

No obstante, la ley 1448 del 2011 presenta una normatividad suficientemente detallada en los procedimientos para que se lleve a cabo los objetivos estrictos de la misma. Sin embargo, su aplicabilidad se cuestiona y materialmente no se cumplen a cabalidad las consecuencias jurídicas que ley prevé, a lo cual acontece que no está funcionando la ejecución de la atención, reparación integral y asistencia humanitaria a estas víctimas en el post conflicto en los Montes de María.

Por ende, se formula la siguiente pregunta problema; teniendo en cuenta los objetivos, detalles en el marco del post conflicto y las sentencias de restitución proferidas por el judicial: ¿De qué manera individual y colectiva se garantiza la eficiencia y eficacia en la restitución de las tierras a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María, atendiendo a la incidental actividad cultural, social y económico de la región?

1. Importancia del presente estudio de caso

En esta etapa se determinará la importancia del proyecto teniendo en cuenta la novedad del tema, el interés, pertinencia y viabilidad del estudio, además de explicar que tan conveniente es y el aporte práctico al que llegará en la toma de decisiones. Por ello, la ley 1448 del 2011 es un mecanismo que, formalmente buscó en un principio mitigar las nefastas consecuencias para las víctimas del conflicto en todo el territorio colombiano, sin embargo, en el sentido material de esta ley en mención se cuestiona actualmente su eficacia y eficiencia a la hora de colocar en práctica las medidas en los procesos de reparación, como lo es la restitución de tierras. A continuación, se justifica la elección de este tema y el cambio social que amerita este proceso en la realidad de la población.

El Estado colombiano presenta uno de los mayores aprietos a nivel internacional desde 1967 sobre los derechos humanos durante el conflicto armado.

Las crisis humanitarias de las víctimas son enormes en comparación con otros países de América Latina, lugar donde el narcotráfico, la extorsión y la lucha armada por el poder son el pan de cada día, además de la pobreza y desigualdad social como factores causales del fracaso de un Estado. El despojo injustificado, la violencia, corrupción y los asesinatos selectivos son utilizados con ocasión del conflicto armado contra la sociedad civil para controlar zonas de valor estratégicos. Ya sea para holgar una situación de los insurgentes contra el Estado o para utilizar la represión contra los insurgentes por parte del gobierno, como quiera que sea, las víctimas pagan el precio de esta disputa, la cual no se considera legítima en un orden jurídico establecido.

De tal manera que la situación del conflicto armado en la región de los Montes de María se intensificó a partir del siglo XXI, hasta la terminación sucesiva de lucha en el año 2016. Sin embargo, es menester resaltar que el tema de la tierra está ligado al problema del dominio militar, territorial, administrativo, político y cultural, motivo por que el Gobierno Nacional debe recuperar todo ese andamiaje perdido durante el conflicto armado en razón de su soberanía y así evitar futuros grupos insurgentes. Las leyes de justicia y paz están colaborando con esta recuperación, entre ellas la ley 1448 del 2011 que surge para brindarle atención especializada, ayuda humanitaria y reparación integral a las víctimas en esta etapa del post conflicto.

El proceso de reparación integral se sirve de varios mecanismos teniendo en cuenta el artículo 22 de la ley 1448 del 2011, las medidas de restitución son una de ellas que se originan en el criterio de justicia restaurativa. Concepto que busca meritar el perdón de las víctimas ante los actores del conflicto armado por sobre todas las cosas, incentivando a las partes a darle más importancia al perdón que al delito.

Dentro de este contexto, se abordará el tema de la restitución de tierras como una obligación del Estado que hace en materia de reparación integral a las víctimas del despojo y desplazamiento. Así mismo se hará una indagación sobre la regulación y jurisprudencia que se ha expedido en la materia, específicamente la restitución de tierras según la ley 1448 del 2011. Todo ello con el fin de identificar los componentes,

antecedentes y repercusiones que conlleva a su aplicación a la práctica, para que esta ley no sólo sea una facultad normativa como derecho fantasma, sino una realidad que materialice justicia.

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación radica en realizar un análisis de las sentencias proferidas en materia de restitución de tierras en el municipio del Carmen de Bolívar ubicado en la región de los Montes de María. Lo cual, parte de la información se obtendrá de la unidad de restitución de tierras (URT) realizando un estudio en las solicitudes de restitución que se han presentado en el juzgado civil del circuito especializado del Carmen de Bolívar y el tribunal superior de Cartagena en relación con los habitantes de este municipio, luego se hará una conclusión final en el proyecto investigativo donde se buscarán soluciones para hacer efectivo el mecanismo de la restitución de tierras en la relación espacial.

2. Motivación de la presente investigación

El presente estudio de caso fue motivado atendiendo a la situación actual de las víctimas del conflicto armado en las zonas marginadas del Estado colombiano, a cada habitante que padece diariamente la dura realidad del despojo que anteriormente fue vivido. Además de ello, el suscrito investigador y expositor de este escrito, vivió en carne propia las consecuencias del conflicto armado a partir del año 1997, lo cual suscitó mucha impotencia ante el padecimiento de la hermosa región de Los Montes de María, y sus habitantes que, a pesar de todas las adversidades del conflicto armado, se esfuerzan por vivir sin resentimiento y practicando la reconciliación en los parámetros de Justicia Transicional.

3. Pregunta de la investigación

Teniendo en cuenta los objetivos, detalles en el marco del post conflicto y las sentencias de restitución proferidas por el judicial especializado: ¿De qué manera individual y colectiva se garantiza la eficiencia y eficacia en la restitución de las tierras a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María?

4. Objetivos

El objetivo de esta investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen, apuntando siempre a responder inquietudes del proyecto.

Objetivo general:

- Analizar la eficiencia y la eficacia de la restitución de tierras de las víctimas del conflicto armado en los Montes de María de manera individual y colectiva según la ley 1448 del 2011.

Objetivos específicos:

- Analizar cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de manera material a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María.
- Analizar cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de las víctimas del conflicto armado en los Montes de María en el menor tiempo posible.
- Analizar cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de las víctimas del conflicto armado en los Montes de María de manera individual y colectiva.

5. Presentación de Capítulos

En el presente trabajo se expondrán los grandes pasos que Colombia ha dado en la búsqueda de una paz estable y duradera, lo que implica cuestionarse si en realidad el Estado está brindando los instrumentos necesarios para las garantías a las víctimas del conflicto armado en el marco del posconflicto. Por esta razón en los acontecimientos de esta obra, se hará alusión a teorías, posturas y el contexto histórico que asimilaron las víctimas como sujetos pasivos ante el conflicto armado interno entre el Estado con grupos beligerantes que pretendían tomarse el poder político.

El capítulo I de la investigación inicia con el marco teórico del estudio de caso, analizando los parámetros y antecedentes de la investigación, enfatizando en los focos de interés investigativo y las posturas de autores referenciados para el estudio de los objetivos. Se finiquita el tema resaltando la metodología a emplear, la originalidad de la investigación y los aportes para nuevos conocimientos en el área de las víctimas del conflicto Armado en relación con el proceso de Restitución de Tierras en la delimitación espacial y temporal establecida.

Posteriormente, en el capítulo II se ubicará el contexto histórico del conflicto armado a nivel nacional y territorial para analizar la importancia de la focalización técnica que realizan los funcionarios al estudiar el proceso de restitución de tierras tanto en la etapa administrativa como judicial. En este mismo orden de ideas se destaca en un apartado la definición histórica que se le ha concedido a la víctima con ocasión del conflicto armado colombiano, explorando el concepto de víctima que adoptó la ley 1448 del 2011 y abstrayéndolo a la situación particular de los habitantes de la Región de los Montes de María que sufrieron los agravios y delitos de lesa humanidad.

Luego, el capítulo III se expondrá la ley 1448 del 2011 en el marco del posconflicto, analizando su sentido teleológico, su objetivo, el contenido y las instituciones creadas con este proyecto de ley en pro de las víctimas. De la misma manera, se citarán datos estadísticos sobre las sentencias proferidas por los jueces y tribunales especializados en restitución de tierras, el resultado que han tenido y se resaltarán la importancia de la reparación integral, la restitución de tierras, la eficacia y la eficiencia, consignadas en la ley 1448 del 2011 dirigida a las víctimas del conflicto

armado, realizando la última pauta correspondiente al marco teórico, luego en el siguiente capítulo iniciará el marco empírico del presente estudio de caso.

El capítulo IV dará a conocer el diseño metodológico de la investigación, el cual busca establecer los parámetros entre los cuales debe ceñirse estrictamente el presente estudio de caso sin perder el orden cronológico de los efectos concomitantes que ilustraron y evaluaron los resultados previos a la realización del trabajo de campo. Se procedió a elaborar una guía con instrumentos para la obtención de resultados y examinando el marco teórico anterior.

El capítulo V presentará y analizará los resultados obtenidos en el trabajo de campo previamente elaborado, el cual afirma o niega la hipótesis del presente estudio de caso, es decir si todo el maquillaje jurídico que reviste la ley 1448 del 2011 se encuentra materializado o no en la realidad social que afrontan las víctimas del conflicto armado interno. Para ello resultó necesario dividir los análisis desde tres interrogantes conceptuales: ¿La restitución de tierras es eficiente? ¿La restitución de tierras es eficaz? ¿De qué manera opera la restitución de tierras individual y colectivamente?

Y, por último, el capítulo VI brinda la discusión de resultados que ofrece un acápite para relacionar las críticas en aciertos y desaciertos que tuvieron los autores relacionados en el marco teórico, pero comparándolos con la realidad social de las estadísticas y acciones calificativas de los sujetos a los que se experimentaron en el trabajo de campo del presente estudio de caso. Para ello se realizó una comparación entre los procesos transicionales de restitución de tierras adelantados ante los jueces y tribunales especializados en ello, y los procesos ordinarios de declaración de pertenencias del común en la realidad; se determinó la responsabilidad con la que el Estado colombiano obra en la ley 1448 del 2011 y por último se realizaron unas descripciones que puntualizan la delimitación de la ley de víctimas y restitución de tierras en este marco del posconflicto.

CAPITULO I: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En el año 2011 con la llegada de la ley 1448 se dio una atención especializada a las víctimas del conflicto armado. Esto debido a la importancia de la conciliación entre el gobierno y los grupos alzados en armas, llegando a un acuerdo posterior en el que ambas partes consideraron acceder a beneficios recíprocos a cambio de amnistías. En este período, las víctimas en los procesos de reparación, verdad y justicia toman el papel protagónico ante la jurisdicción especializada, sin descuidar su dignidad. De aquí que la restitución de sus bienes vendría acorde con este proyecto de ley radicado en 2011.

Sin embargo, quedaron inciertos normativos en esta ley en el proceso de reparación. Como es el caso de los segundos ocupantes “de buena fe”, los modelos de restitución y rehabilitación de las víctimas, que la jurisprudencia (Altas cortes) procedió a llenar con ayuda de la doctrina, facultándose por el artículo 230 de la constitución política de Colombia de 1991.

Por consiguiente, este capítulo presenta un estado del arte sobre el proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado teniendo en cuenta los vacíos respecto a la restitución y la manera de albergar la buena fe (segundos ocupantes, excepción de buena fe, opositores, restitución estricta) en este asunto, asumiendo los ideales formales de la ley 1448 del 2011 en el post conflicto en Colombia. Se procederá a analizar las investigaciones de tipo teórico y empírico desarrolladas entre el año 2011 hasta el 2018. El método empleado para ello fue el de la revisión bibliográfica de publicaciones referenciadas en las bases de datos de las universidades de Colombia, páginas web y el buscador de referencia *Google Docs*. Cabe resaltar que esta revisión incluyó en la base de datos materiales de primera mano tales como tesis doctorales, trabajos de grado para optar por un título especializado, monografías, artículos y revistas publicadas en semilleros de investigación donde se teorizaba la temática del conflicto armado, las víctimas y los segundos ocupantes en este proceso de restitución. Para la búsqueda se utilizaron palabras claves como; Jurisdicción Especial

para la paz, Ley 1448 de 2011, segundos ocupantes y reparación, opositores de buena fe frente al proceso de reparación, segundas víctimas del conflicto armado, principios Pinheiro aplicado a los opositores de buena fe, conflicto armado. La revisión detallada proporcionó 24 publicaciones que cumplieron con los estándares requeridos para tomarlas como referencias. Cada uno de estos documentos fue sometido a un análisis de contenido y se identificaron principalmente 3 focos de interés para nuestra investigación: Problemática de la materialización de la ley de víctimas, los opositores en el proceso de restitución y el vacío normativo de la ley de víctimas, la eficacia de la jurisdicción especial para la paz frente al desplazamiento y la desaparición forzada ante el derecho internacional humanitario (Ver anexo). A continuación, se presenta cada uno de los grupos temáticos, para luego analizar la metodología utilizada y por último exponer la originalidad de nuestro trabajo de investigación.

1.1. Focos de interés investigativos

1.1.1. Problemática de la materialización de la ley de víctimas

En Colombia, el problema por la tenencia de la tierra ha generado discrepancias entre actores del conflicto armado, consecuentemente hay víctimas en este cruce de fuego y por ello nace la ley 1448 del 2011. Esta ley como toda norma jurídica debe materializarse para que cumpla con la eficacia esperada al momento de entrar en vigor, pero es cuestionada al aplicarse a las situaciones particulares en los tribunales de paz; aun por los principios de verdad, justicia y reparación que esta posee. Frecuentemente tiene que ver con el problema de la teoría a la práctica y el fenómeno de la traspolación en las normas jurídicas. Los proyectos que tratan sobre este foco de interés investigativo que se citarán a continuación lo confirman de manera consistente, puesto que de los asuntos más tergiversados en la eficacia de una ley es su materialización.

En este escenario Gil Álvarez, Lucero Ocampo y Ramírez Tapasco (2011) analizan la ley de víctimas a partir de la aplicabilidad jurídica y económica en los

municipios rurales del bajo cauca Antioqueño. Aseguran que los factores de materialización de la susodicha ley deben ser estudiados dentro del desarrollo rural justificándose mediante las condiciones económicas, sociales y culturales del campesinado.

Mientras que Martínez Sanabria y Carolina Pérez (2012) asumen que los factores de materialización no influyen mucho, debido a que el Estado es el garante de la eficacia o no de un proyecto de ley estatutario y proponen analizar la aplicabilidad mediante prácticas concretas para que la reparación integral (*modelo de restitución*) no sea solo una consagración del sistema jurídico estatal y con ello *identificar sus principales componentes y las expectativas y retos*.

En razón de ello, la investigación empírica de Patiño Salgado (2011) analiza las políticas públicas del ordenamiento territorial como una solución al problema de la materialización de la ley de víctimas tomando en cuenta la participación del gobierno nacional en la formalización, planificación y ejecución de la reparación de la víctima en el conflicto armado. Sin embargo, Álvarez Tafur (2014) va más allá del plano monótono y toma como referencia el sistema de los derechos humanos bajo la categoría del contexto social y liberal de distintas épocas donde según él, el fraccionamiento rural es débil.

La exploración teórica realizada por Imbett (2016) afirma que *“los resultados en fallos judiciales de la Ley han generado controversias en los últimos años, porque en aquella materialización surgen otros sujetos procesales, y en especial, posibles víctimas atribuidas a la misma legislación, como son los poseedores de buena fe o segundos ocupantes, que, en algunos casos, es factible evidenciar que se restringen y desconocen sus derechos...”* es decir, mientras se da trámite procesal a la reparación o restitución, se bloquean ciertos derechos indiscutibles a otros sujetos procesales. De este tema de los segundos ocupantes se hablará después.

Además de ello, Manuel Leandro Rincones y Amalia Polo Henríquez (2017) tras realizar un minucioso estudio empírico de la ley de víctimas y conflicto armado, concluyen que evidentemente existe una deficiencia en el acuerdo político y por tal razón no se puede materializar del todo conforme la ley 1448 por carecer de sustento Estatal y faltarle capacidad al ente para buscar la verdad y brindar reparación bajo protección.

De manera similar ocurre que Yuliana Monterrosa Rico y Víctor Raúl Castilla Maussa (2015) mediante un estudio teórico de la implementación de la ley 1448 del 2011 en casos particulares, afirma que las estancias internacionales no deben ser olvidadas, por lo cual exponen la situación de los derechos humanos consagrados en la carta política como estrategia para reclamar los derechos de las víctimas en un conflicto armado.

En esta materialización, es importante analizar el proceso de reparación de las víctimas desde un punto de quiebre como lo realiza Urrego Pava (2016); quien afirma que las políticas de inclusión deben ir ligadas a las normas constitucionales y por supuesto, rechazar todo acto procesal de exclusión de actores del conflicto armado para garantizar las mismas capacidades en un contexto de igualdad, justicia y equidad. Por otro lado, María Alejandra Espinosa (2017) Cuestiona el concepto de reconciliación en el marco del conflicto armado ante las leyes de justicia y paz que antecedieron a la ley 1448 de 2011, llegando a concluir que dicho término debe ser estudiado en el plano histórico hacia qué y hacia quienes está dirigida la ley de víctimas del conflicto armado para su correspondiente materialización.

Finiquitando el tema de la materialización de la ley de víctimas, Martín Peré (2018) realiza una investigación empírica en la cual entrevista a magistrados y jueces. Comenta que, al aplicar la ley de víctimas a un conflicto particular, a través de un análisis descriptivo e interpretativo de los fallos judiciales y la etapa pos-fallo, concluye que existen vacíos normativos con respecto al proceso de reparación que corresponde

llenar a la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (Art. 230 de la constitución política).

Atendiendo a lo anterior, probablemente existe una deficiencia en la materialización de la ley de víctimas, donde dificultades toman el mando de la implementación errónea de políticas públicas limitando a los jueces y magistrados al dictar sentencias de justicia y paz confusas.

1.1.2. Los opositores de buena fe en el proceso de restitución y el vacío normativo de la ley de víctimas

Acuestas de la ley 1448 del 2011, en Colombia surge una problemática de incertidumbre con respecto a los opositores de buena fe (*segundos ocupantes*). A casusa de ese vacío normativo no resulta fortuito describir el tema de la ley de víctimas y conflicto armado sin pensar en los segundos ocupantes, el cual como evidenciamos en el anterior foco de investigación fue muy incongruente a la materialización de las leyes de justicia y paz.

En ese orden de ideas, no son sinónimos los conceptos de “opositor y segundo ocupante” ni es conveniente asimilarlos al momento de interpretar y aplicar la ley de víctimas y restitución de tierras. En muchos de los casos que preceden en los procesos especializados los opositores son segundos ocupantes, pero también posibilita que existan ocupantes que no tengan interés de presentarse al proceso, así como opositores que acuden al trámite sin ser ocupantes del predio (C-330/16).

La confianza legítima del Estado para con sus administrados es fundamental en un proceso de transición como el de Colombia. Según Adriana Molina y Diana Rivera (2012) lo que permite al particular el amparo de sus derechos es la seguridad jurídica y la buena fe como expectativas en la teoría de los derechos adquiridos por el

poseedor exento de culpa. Así demostrando que el mismo Estado puede incurrir en responsabilidad administrativa con base en el artículo 90 de la constitución de 1991.

Por otro lado, se encuentran los aportes teóricos presentados por Monclou Chaparro (2012) en los cuales realiza un análisis sobre las restricciones de acción en cabeza de las víctimas del conflicto armado. Concluye que en la etapa administrativa del proceso de reparación existe una limitación en la carga de la prueba, que violando el principio de igualdad no puede conceder el derecho al segundo ocupante mientras no se demuestre su carácter como poseedor de buena fe con justo título.

Similarmente, Edward Francisco Álvarez (2016) Presenta su investigación con un dilema de los segundos ocupantes donde resalta la disparidad entre la buena fe y la relación indirecta con el despojo de las víctimas de sus predios. Aunque Troncoso Olaya, Castañeda Rodríguez y Bravo Hernández (2017) adelantaron una investigación buscando proyectar la temática del contexto desde los acuerdos de la Unidad Administrativa de Gestión de víctimas despojadas a través de la categoría de compensación en dinero. Las conclusiones de estos proyectos dejaron claro que el tema de los segundos ocupantes necesita respaldo de organismos especializados en bienes y derechos adquiridos, además de no solo brindar asesoría sino medidas para la materialización de las sentencias.

Es menester saber que, los segundos ocupantes se encuentran regidos por principios de la comunidad de derecho internacional donde tal vez la carga de la prueba se hace necesaria pero las circunstancias fácticas en concreto deben ser un instrumento para que el juez tome la decisión acertada asumiendo su rol personificante de justicia. Así es como lo refiere Pérez Amaya, Barrera Estupiñán y Forero Gelvez (2018) mediante un estudio empírico con avances histórico-interpretativo basándose en los principios Pinheiro del derecho internacional sujetos a las normas nacionales.

Se observa que los documentos encontrados y analizados sobre los segundos ocupantes en la ley 1448 del 2011, exponen la carga desproporcionada o inequitativa

para una población específica protegida por la comunidad del derecho internacional y acerca de la cual el legislador guardó silencio. Este énfasis tiene mayor sustento en el marco de reconciliación y post conflicto que conlleva a un acercamiento entre los actores del conflicto armado.

1.1.3. La eficacia de la jurisdicción especial para la paz frente al desplazamiento y la desaparición forzada ante el derecho internacional humanitario

En el contenido de la ley 1448 de 2011 se consignaron instrumentos y herramientas dirigidos a la reparación individual y colectiva. Aseverando que la restitución de tierras fuera el mecanismo preferencial de reparación en los casos de desplazamiento, desaparición forzada y despojo con ocasión del conflicto armado.

De aquí que este conjunto de normas constituya la base de la restitución. Justificándose en que hasta nuestros días ha buscado propiciar la implementación de medidas de reparación integral para las víctimas de estos delitos que violan los acuerdos sobre el derecho internacional humanitario, provocando el desplazamiento forzado de más de seis millones de personas y el despojo mayoritario de una amplia parte de la geografía nacional, estudios demuestran que son alrededor de cuatro y seis millones de hectáreas como lo afirman los exponentes de este foco de investigación.

La situación del desplazamiento forzado ha llegado a niveles críticos según Ana carolina Vargas Chávez (2014) quien, al realizar un estudio empírico- cualitativo, considera que la causa principal de dichos delitos es la constante lucha entre los grupos guerrilleros, paramilitares y las fuerzas armadas del Estado. Esta autora logra evidenciar que el Estado es uno de los causantes indirectos de las víctimas del conflicto frente desplazamiento y del despojo. Además, Linares Parra, Ramos Zabala, Bajonero Contreras y Miranda Moya (2015) apoyan esta tendencia de responsabilidad del Estado bajo el amparo del derecho de propiedad, vivienda digna y otros subsecuentes que surgen de estas situaciones ante las tierras comunales y grupos étnicos que negativamente quedan en segundo plano.

En este sentido encontramos varios trabajos que resaltan la crisis de las víctimas del desplazamiento y desaparición forzada en el conflicto para lograr que el gobierno nacional implemente soluciones estables. Desde una perspectiva empírica Manosalva García y Villegas Flórez (2016) atribuyen un gran avance al post conflicto con la ley 1448 sin embargo, aún existen deficiencias en el acceso a la tierra por parte de personas desplazadas.

Una característica propia del post conflicto es conocer las causas y las repercusiones de la guerra, por tanto, las investigaciones buscaron estrategias y alternativas para que encontremos una paz que es lo que en realidad todos los seres humanos anhelamos y ayudar a propender por esos grandes valores y el respeto por la dignidad humana. Así lo sustentan Hernández Manzano y Yahir Vergel (2016) en su estudio estadístico en la región del Catatumbo. En un primer momento la reparación hacia las víctimas del desplazamiento y desaparición conllevan a la restitución de sus predios, pero la ley 1448 exige una indemnización por los perjuicios morales, físicos y demás, que tuvo que soportar la víctima a causa del conflicto interno. Esto lo asegura la teoría planteada por los investigadores Rodríguez Rozo (2016) con su micro focalización hacia la ley de restitución de tierras y Erika Carrillo junto a Useche Triana (2017) que forjan la teoría de la crisis rural frente al abandono del estado como cuna del narcotráfico, secuestro y extorsión ante el campesinado. De aquí que existan teorías de investigadores que expresen el origen del conflicto a causa del abandono estatal, inconformidad por el gobierno en turno, ideologías socio- políticas, etc.

Mientras tanto, varios estudios estadísticos pretenden resaltar la importancia de conocer la magnitud colosal de víctimas del desplazamiento forzado. El principal análisis es una recopilación de casos presentado por el observatorio de restitución de tierras, que, bajo la exposición de Tulia Moreno, Javier Lautaro, Adriana Fuentes y Andrea Lombana (2016) logran realizar un seguimiento detallado a la implementación de la política de restitución de tierras a partir de la promulgación de la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas.

De la misma manera, Claudia Martínez (2018) contribuye a este foco de interés investigativo trazando una línea de tiempo en cómo era antes de las leyes de justicia especializada y después del 2005, debido a que se requirió la necesidad de inclusión en la agenda política del desplazamiento forzado en el conflicto y después del mismo. Lo cual evidencia un avance en el tema de estudio al reconocer su lugar en la agenda gubernamental, sin embargo, la escasez de normas sujeta la jurisdicción de paz a los jueces y su sana crítica para valorar las condiciones de los actores del conflicto.

Para concluir con este foco de investigación podemos hacer referencia Niño Cáceres y Angulo García (2018), quienes asumen su postura de investigadores ante la adversidad de casos presentados en Cali con seis años de estudio de la ley 1448, evidencian que formalmente se cumple la reparación e inclusión pero, el acatamiento de los fallos no siempre es ejecutoriado, poco menos en el desplazamiento forzado, situación que en los próximos años venideros podrá estudiarse a instancias internacionales.

1.2. Enfoques metodológicos y pistas para nuevas investigaciones

De los 24 estudios presentados y posteriormente analizados, se observa que los investigadores hacen énfasis en el trasfondo de cada proceso de reparación integral en materia de restitución. Los campos psicológicos, psiquiátricos y jurídicos para la posterior formación de la víctima en el post conflicto deben atender los efectos negativos del conflicto en las víctimas. Por ejemplo, en el tema de las condiciones de materialización de la ley de víctimas encontramos como protagonistas a Gil Álvarez, Lucero Ocampo y Ramírez Tapasco (2011), quienes estudian el proceso de transformación, existencia y modificación de los agravios adquiridos por las víctimas del conflicto en un contorno de reconciliación, mientras que Useche Triana (2017) coloca en tela de juicio este proceso mientras no se ameriten remedios sustanciales y medidas extremas a los grandes problemas sociales del país como lo son el narcotráfico, los asesinatos selectos y los crímenes de lesa humanidad.

De los 15 estudios teóricos resulta congruente destacar la ausencia del papel protagonista que ha tenido la víctima en el marco del post conflicto como lo resalta Tulia Moreno, Javier Lautaro, Adriana Fuentes y Andrea Lombana (2016), ello debido a la inseguridad y amenazas a las que se encuentran sometidas las víctimas cuando declaran el agravio injustificado, consecuentemente, son perseguidos a espaldas de la justicia frente al crimen organizado.

Los 9 estudios empíricos analizados cuestionan la efectividad de la ley 1448 del 2011 cuando se materializa, a pesar de que esta prevé todas las posibles manifestaciones de restitución y el proceso que se debe seguir por los magistrados de la jurisdicción especial para la paz. Esto podría indicar que los mecanismos de justicia restaurativa -en su sentido material- no son suficientes para proyectar eficazmente el proceso de reparación, reincorporando a las víctimas y a los victimarios a la sociedad civil.

Sin embargo, sería interesante que se apreciara en estos trabajos de investigación aquellas materias que serían de apoyo en la ley 1448 del 2011 para reincorporar a las víctimas. En el proceso del protagonismo para debilitar ese sector de mafioso de “cuello blanco” que busca colocar en silencio a todas aquellas personas que representen obstáculos para sus intereses personales. Siendo así, debido a que todos los delitos que tuvieron relación con el conflicto armado al igual que el surgimiento de estas mafias, forman un punto de quiebre para el ordenamiento jurídico y por supuesto, la reputación del Estado frente a la comunidad internacional.

1.3. Originalidad de esta investigación

El presente estudio quiere desarrollar los temas anteriormente esbozados además de la propuesta original de esta investigación. Por eso, este trabajo no sólo se conforma en comprender la dinámica de la restitución de tierras, sino que quiere demostrar si en realidad la víctima tiene ese papel protagonista en el tema de la justicia restaurativa o, por el contrario, será siempre una persona con afectación que simplemente debe ser reparada mediante la restitución de sus bienes. Además, se debe zanjar aquel

vacío respecto a los opositores de buena fe (segundos ocupantes) a los que podría considerarse víctimas indirectas del conflicto armado interno. En este orden, se presentan los aportes originales de la actual investigación:

- A nivel metodológico, la actual investigación utiliza el método de exploración cualitativa como medio para analizar las medidas de restitución de la ley 1448 del 2011 y sobre cómo pueden ser efectivas al momento de aplicarse, además de estudiar las sentencias que permiten comprender la materialización de esta. No sólo perpetúa estadísticas y fichas de radicados, sino que pretende proyectarse hacia futuro con las entrevistas y ejes focales en las víctimas del conflicto armado.
- A nivel de la muestra, el trabajo se realiza en la región de los Montes de María en el municipio del Carmen de Bolívar con aquellas víctimas, que se encuentran registradas en los procesos de restitución de tierras, y otras que aún desconocen los parámetros de la jurisdicción especial para la paz.
- A nivel del enfoque investigativo, este estudio investigativo no sólo analiza la temática de restitución de tierras de manera teórica, sino que pretende a manera empírica profundizar en todos los efectos favorables o desfavorables que pueda tener la ley de víctimas 1448 del 2011 en el material de restitución de los derechos reales y la restauración de la vida de la persona a cómo era antes. Por eso, la investigación como estudio de caso es un enfoque nuevo que por primera vez se realiza un estudio de esta naturaleza en Colombia.
- A nivel teórico, esta investigación aporta nuevas teorías sobre los procesos de restitución colocando como sujeto de principal atención a las víctimas (directas e indirectas) del conflicto armado en relación con el ambiente psicológico, psiquiátrico, rehabilitador, jurídico y sociológico. Esta nueva teoría busca brindar un estudio minucioso a los posteriores procesos de restitución de víctimas por parte de los funcionarios judiciales hacia un mejor acercamiento de las partes en un ambiente de reconciliación y no repetición.

Para concluir, en este capítulo se analizaron los trabajos comprendidos entre los años 2012- 2018 y las sentencias *hito* proferidas por los jueces de esta competencia, respecto del proceso de restitución de tierras basándose en la ley 1448 del 2011 describiendo el marco del post conflicto bajo parámetros de la jurisdicción especial para la paz. A lo largo de los estudios se observa que se logró en este período un avance teórico del derecho constitucional, legal, jurisprudencial e internacional, profundización en las teorías de la justicia restaurativa, así como el análisis de las principales causas, factores y generalidades del fenómeno del conflicto armado interno en el Estado colombiano.

Mediante los autores, fue posible exponer de manera descriptiva las estadísticas generales de las víctimas en el conflicto armado, la grave crisis humanitaria que viven y las circunstancias sociales que atraviesan las distintas zonas afectadas por el conflicto. Ahora corresponderá al presente trabajo complementar aquellos avances y profundizar acerca de las teorías de la reparación integral mediante la restitución de tierras -como mecanismo eficaz-, cuando involucran varios personajes en el proceso de restitución de tierras y de qué manera se ha abordado en las relaciones espaciales de la muestra. En esta perspectiva, se busca hacer una contribución positiva al sugerir soluciones a la efectividad del proceso de restitución de tierras en aras del conflicto armado.

CAPITULO II: EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

La historia en pleno ha demostrado todas las causas y orígenes de este conflicto armado. Sin embargo, los antecedentes que atribuyen los antropólogos son aquellas circunstancias sociales que busca el ser humano en toda la vida: El poder. Siendo este elemento lo único que nos corroe a las aspiraciones genéricas de toda lucha que existe en la evolución de una Nación. A su vez, se resalta que los grupos beligerantes fueron indelebles en armas a lo largo de los períodos de guerra civil, instruyendo por la violencia su ideal de Estado- Nación por los afluentes filosóficos que estos procesaban. De esta manera, someterse a las armas era el único camino de los inconformistas para dar a entender su concepción de una comunidad, lo que desencadena todo el conflicto armado en una sociedad.

A partir de 1960, comienza el conflicto armado en todo el país. Al principio, esta guerra asimétrica tuvo una baja intensidad, situando el motivo ideológico *prima facie* sobre todas las otras actuaciones, en un escenario donde la seguridad jurídica estaba en tela de juicio desarrollándose en todo el territorio colombiano. Durante todo este conflicto, la lucha tenía fines políticos de dominio tanto de la extrema izquierda como la derecha, sumándole los carteles de droga presentes en el territorio y las bandas criminales, los cuales se valían de la situación para impulsar sus intereses ilegales en base al terrorismo del período.

Según fuentes, la época donde mayormente se ubica el recrudecimiento de este conflicto armado fue bajo los mandatos presidenciales de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez (1988-2002), al enfrentar las fuerzas militares armadas a todos estos victimarios armados. Los cuales violentaban a cada momento a la población. Pese a esto, desde 1958 hasta el 2016, las cifras de muertos causadas por el conflicto armado fueron alrededor de 220 000, sin tener en cuenta las discriminaciones y otros actos de guerra, los cuales superarían los 8 millones de personas en toda la historia.

Observando desde este punto, la historia del conflicto armado en Colombia es un naufrago manchado de sangre por cualquier lugar donde se aprecie. Debido a la gran duración de este conflicto armado, y a la gran información ideológica que manejan los movimientos políticos, esto resulta inminente en las generaciones venideras hasta tanto, no se tome una solución adecuada al caso.

Por consiguiente, siempre se hablará del conflicto armado en dos de sus facetas proporcionadas según sus espacios en objeto de estudios: a nivel nacional y a nivel local, donde se realiza la presente ponencia.

Teorías sobre el origen del conflicto armado y los tipos de justicia formal

El conflicto armado resultó inminente a partir de los años 90', cuando los vicios e inseguridades se hacían evidentes en el Estado Social de Derecho. A pesar de transcurrir más de 50 años de violencia desde el surgimiento, los autores actualmente siguen atribuyendo las causas que originaron el conflicto armado en ideologías políticas, sociales, económicas, culturales, entre otras, que se dividen en grandes grupos de la siguiente manera:

- **A nivel Sociológico:**

Existen dos teorías características de esta disciplina que gira sobre el conflicto donde se asegura que es de gran importancia, las cuales menciona Urrego Pava: la marxista y la liberal (2016, pág. 12). La primera concibe un conflicto de cualquier índole basándose en la lucha de clases en el aspecto económico tendientes a desarrollar el modelo tradicional del capitalismo salvaje bajo intereses muy opuestos entre las clases sociales burgueses y proletariados. En esta teoría marxista el conflicto es esencial para el progreso de una sociedad, sin embargo, no examina con detenimiento las consecuencias a las víctimas de un conflicto por la lucha de clases. Las segundas, sostienen que los conflictos surgen en el intercambio ideológico de los grupos sociales

por múltiples causas que ya no sólo serían económicas sino además políticas, culturales, religiosas, etc., y que generan tensiones entre los niveles sociales, en el caso de la reparación que deviene como consecuencia del post, sólo se atienden los intereses de la clase popular para una convivencia pacífica. Lo casual de estas teorías sociológicas es que comprenden al conflicto como algo necesario para entenderse y dar un paso a la reconciliación atendiendo a lo fundamental que es el perdón, reparar los daños cometidos basados en el honor social, olvidar el pasado y enfocarse en el futuro venidero. Esta finalidad va de la mano con la justicia restaurativa que consagran las normas legales y por supuesto, fortalece el bloque de constitucionalidad creado a partir de 1991 en el Estado Social de Derecho.

- **El nivel psicológico**

El nivel psicológico se encuentra ligado al aspecto subjetivo de la finalidad de la restitución en el marco del post conflicto. La tesis ostentada es que la reparación integral responda a unas temáticas de justicia transicional y restaurativa, más no retributiva. En el cual, uno de sus principios es la integración o la reconciliación como aspecto moral en las víctimas del conflicto armado. “Por tanto, la reparación (*Restitución*) no debe limitarse a la recuperación de la relación jurídica y material de la víctima con el predio, sino que debe promover la vigencia de los derechos sociales y con ello la vivienda digna del campesinado” (Álvarez, 2016, pág. 4).

Afirma IMBETT que el espíritu de los preceptos de la ley 1448 se infiere -en el tema de la reparación integral- que la restitución de tierras es un programa destinado a reparar efectivamente el daño causado a las víctimas y garantizar que la víctima vuelva al estado natural en que se encontraba antes de realizarse el concurso de delitos con ocasión del conflicto armado (Imbett, 2015). Es decir, que las víctimas no sólo recibirán los predios de los que habían sido despojados, sino que además se acompañará a esta en la rehabilitación social para evitar que vuelvan a la marginalidad, por lo cual la reparación de las víctimas no deja de lado la atención especializada de que habla la ley 1448.

- **A nivel filosófico**

El tema de la reparación integral en el nivel filosófico se pretende renovar aquel antiguo paradigma del retribucionismo *ojo por ojo y diente por diente*, de lo contrario no se estaría llegando a una reconciliación eficaz si sólo se retribuye una vida a cambio de otra; sino ir más allá al punto de la suficiencia de los papeles tergiversados que la sociedad toma, consistente en no vengarse sino abrirle paso al perdón y aceptar la realidad en una atención especializada que el Estado le brinda las víctimas del conflicto Armado.

Así afirma MARÍA FERNANDA NIÑO al referirse al reconocimiento del conflicto armado por parte del Estado, ha logrado con la ley 1448 la creación e implementación de una serie de medidas de protección y reivindicación para aquellos que vivieron los efectos de la violencia (2018, págs. 1-2). Es decir, el tema de la teoría de la reparación integral viene de la mano con la concepción grecorromana de la justicia, pero no asimilándose a la cuestión de la venganza privada medieval sino más bien, garantizando el perdón y el olvido a cambio de la verdad sobre los hechos.

Además de ello, la restitución deviene con la retribución material de las tierras en forma de reparación cuando mediante sentencias judiciales y vías administrativas se les concede “el reconocimiento de la propiedad de sus predios” para que una vez ahí, se de origen a una nueva vida o a la anterior antes del conflicto. De aquí que el concepto socrático de la justicia es darle a cada quien lo que se merece, en la reparación integral se traduce en “darle a cada quien lo que le conviene” para así lograr una paz integral en el Estado Social de Derecho.

Planteadas estas concepciones, se analizan en su estudio tres tipos de justicia formal que contiene la reparación integral en la ley 1448 del 2011: La justicia restaurativa, la justicia procesal y la justicia transicional como extensión de las dos anteriores. La importancia de conceptualizar la restitución como medida de reparación integral en el marco teórico viene dándose al estudiar la realización de la misma norma jurídica,

pues con su carácter imperativo-atributivo se debe cumplir en estricta medida, y aún más sabiendo que es una norma pública destinada a regular procedimientos que atienden a modificar, extinguir o declarar derechos subjetivos en determinado sector de la población colombiana. Teniendo este conjunto de teorías expuestas, corresponde analizar en los registros de resultados de si efectiva y eficazmente el derecho decantado en las sentencias cumplen con los requisitos de forma y fondo predispuestos en la ley 1448 del 2011.

2.1. Conflicto Armado Interno

En el ámbito histórico, el conflicto armado tanto a nivel nacional, como en la localidad de los Montes de María tiene sus raíces en el ámbito socio-económico, debido a que la tierra fértil siempre ha sido una disputa que desemboca en violencia; de tal forma que las víctimas del conflicto armado interno en su evolución histórica a lo largo de estos 50 años fueron en su mayoría aquellas personas que día a día se dedicaban al cuidado del campo y sus frutos. Además de esto, las bases tangenciales para resolver la problemática de la efectividad y eficacia de la ley 1448 del 2011, se encuentran en averiguar su origen, a qué se dedica esta emanación de legislatura y su finalidad según el *tenor de la ley* (CABRA, 2010).

En este término, el conflicto armado es interno cuando es referido a una situación extrema en la que se somete a un Estado, específicamente en su territorio, donde las fuerzas gubernamentales se enfrentan a un grupo rebelde armado, a raíz de unas declaraciones contenidas, sucediendo todo esto, al interior de un mismo Estado. A partir de 1980, el conflicto armado pasó de ser algo inhóspito a ser algo terrorífico como el régimen monárquico al estar perseguido un sector de la población.

2.1.1. El conflicto armado Interno: Nivel Nacional

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en cualquier país de América, el poder dentro de un territorio se obtenía a partir del campo, como máxima fuente de sostén y

financiamiento para los grupos alzados en armas. El bando más poderoso en este conflicto armado sería aquel que logre la disposición de la mayor cantidad de tierra en sus dominios. Como fue viable, el terrorismo fue abriendo paso a la población campesina, aduciendo que el Estado debía brindar seguridad, que no fue eficaz y eficiente en su momento oportuno, consecuentemente, quedaron las víctimas directas sin seguridad ante el fuego cruzado de los bandos.

En consecuencia, el desarrollo del fenómeno histórico coloca a disposición las bases tendenciales de la teoría de la reparación integral que se habló anteriormente. Colombia era hasta hace poco tiempo el único país del hemisferio de occidente con un serio conflicto armado que involucra varios frentes: El ejército de liberación Nacional (ELN), y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocidas desde 1965 como la agrupación guerrillera más fuerte con el que ha sostenido una lucha armada los diversos gobiernos de finales del siglo anterior y comienzos de este, por esto, siempre que se hable de conflicto armado interno, debería ser sinónimo de una guerra civil adiestrándose a los terrenos de compatriotas y ultranacionalistas en una disputa intercomunal.

Además, existió otro frente denominado “Paramilitarismo” que abarcó la lucha contra los dos anteriores y de los cuales se menciona porque se considera victimario en el post conflicto con la ley 1448 del 2011, demostrando en pleno, que el gobierno nacional tuvo que hacerles frente a dos grupos alzados en armas que mantenían promesas de poder político al saciar las manos de sangre. De esta manera, se daba continuidad a una lucha sangrienta entre los bandos, en los cuales se encontraban las víctimas en ese fuego cruzado. Durante la década de los 90, el Estado colombiano se encontraba sumergido en una guerra por el poder absoluto en un gobierno prosperado formalmente a un adjetivo “Social de derecho”, los cuales se pronunciaron entre pólvora y sangre al nacimiento de la constitución de 1991.

Según lo anterior, el fenómeno de la violencia en Colombia se ha caracterizado por componerse de diversas causas: sociales, culturales, económicas, pero más que todo

de ideologías políticas. A ello se le puede sumar el abandono Estatal, la corrupción de las entidades, el narcotráfico, desempleo y agentes incompetentes del Estado, los cuales azotaron a los sitios rurales y urbanos con una cantidad indeterminada de delitos usurpadores de derechos fundamentales. Prácticas que según la defensoría del pueblo “son vulneradoras de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que son estrategias sistémicas y prolongadas que buscan el desplazamiento forzado interno” (Vergel, 2016). Además de ser ilícitas frente a la comunidad internacional y ante los países hermanos.

La historia general del conflicto armado en Colombia se encuentra fragmentada en diversos apartados, según el informe realizado por el centro Nacional de Memoria Histórica en el año de 2017, la historia es identificable plenamente en la evolución de la guerra, según este informe, en cuatro catervas de la siguiente manera:

- (1952- 1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado.

Durante este período, las clases de guerrillas existentes en el país dieron el surgimiento a la luz pública y se apartaron de las operaciones clandestinas. Llevándose a cabo en zonas marginadas de la población.

-(1982- 1996) marca los orígenes, dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, distinguiéndose de la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y el declive de la guerra fría junto al posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva constitución política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos.

En este acápite se debilita el poderío estatal, las guerrillas le ganan la expansión territorial al Estado y persiguen la tierra como principal fuente de ingresos.

-(1996- 2005) designa el umbral de recrudescimiento del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el conflicto armado.

En esta etapa, la opinión pública exige llegar a una reconciliación con los grupos alzados en armas. Se resalta por centrarse en la búsqueda de soluciones al terrorismo y estudiar el punto central del conflicto armado: su núcleo.

-(2005-2012) Marca el reacomodo del conflicto armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando, pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva de un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado.”

***Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica
2017***

Los bandos, pese a que se encuentran negociando, ninguno de los extremos pretende ceder las características de su ideología, sin embargo, se logra mermar estas características y llegar a un acuerdo en medio del post conflicto armado.

2.1.2. Conflicto Armado Interno: Nivel Territorial

En el siglo XXI, mientras el resto del mundo se encontraba esperando las negociaciones y los procesos de reconciliación en medio del fuego cruzado, en el país seguían las grandes hordas de secuestro, desplazamiento, desaparición forzada, y el desalojo de viviendas a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, con todas estas razones, el gobierno nacional en turno pretendía erradicar esta problemática de conflicto armado de una forma u otra. A su vez, la práctica prolongada de negociaciones dentro del régimen republicano ha madurado políticamente durante cada etapa, y ciertamente no es fácil que el pueblo sea presa de las aventuras que obtienen los violentos, debido a que, para que funcione una economía estatal, el gobierno Nacional debe atender cada región, cada sector y cada rincón del territorio como si fuese la figura omnipresente de la que hablaban los antiguos griegos. De esta manera se concreta la importancia que posee la vigilancia de un país, en cada rincón de su territorio, caracterizando en cada generación, aquellos procesos efectivos en su organización económica y social, es efectiva y eficaz para materializar una ley como lo es la 1448 del 2011, consistente en analizar el progreso y recuento histórico y atender al sentido mismo de estas fuentes para buscar ese consenso social que le hace falta al país en el basto espacio del conflicto armado.

Ahora, delimitando este conflicto armado en los Montes de María; la presencia de los grupos insurgentes y la situación de pobreza en esta región generan el surgimiento del conflicto a mayor escala basándose en el dominio de sitios estratégicos del territorio para operar sus atentados, los cuales se incrementaron a partir de los años setenta. Según Duica Amaya “la región de los Montes de María era una zona de baldíos y predios de propiedad privada donde hubo colonizaciones de campesinos que antes se desempeñaban como aparceros de latifundios donde su población desde la década de los setenta hizo presencia con acción de los sindicatos como fue la creación de la ANUC- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- líderes campesinos que apoyaban las invasiones de tierra bajo el lema de *la tierra pa´ quien la trabaja* y no apoyaban la adjudicada, logrando con estas políticas recuperar 122.400 hectáreas de tierras” (Salgado, 2011, pág. 26).

A lo largo de la historia del conflicto armado, los Montes de María se caracterizaron por ser una de las regiones donde la movilización rural luchó por sus derechos sobre la tierra; sin embargo, estas ideologías fueron decayendo con la evolución del conflicto armado hasta el punto de aceptar las titulaciones restringidas por parte del Estado, además, por ser principales víctimas del desplazamiento forzado a causa de la guerra. Según Alejandro Reyes quien es citado por Patiño Salgado afirma que “el destino de las tierras abandonadas, sin embargo, parece obedecer a pautas diferentes según sea el grupo armado dominante paramilitar o guerrillero. Para los paramilitares la apropiación de territorios desplazados se enmarca en los objetivos de seguridad militar y en la creación de santuarios para el negocio de las drogas, y en algunos casos para el desarrollo de plantaciones agrícolas a largo plazo o ganadería extensiva, cuando se busca invertir ganancias. Los paramilitares estuvieron interesados en la propiedad de la tierra como forma de enriquecimiento, seguridad, garantía y lealtad o sometimiento de la población. Por eso buscaron expulsar la población que sospechaban un poco leal y redistribuyeron la posesión de tierras entre quienes mostraron lealtad con el grupo armado y contribuyeron en sus negocios. Por otro lado, las guerrillas privilegiaron el control de la población rural para crear corredores de movilidad territorial, y estuvieron más dispuestos a abandonar territorios por razones de táctica militar. Tendieron a acumular un capital de manera más líquida y más vinculada con la actividad militar, como ganado, medio de transporte y abastecimiento logístico, y apropiación de los predios con violencia. Por eso ha sido mayor la apropiación de tierras por paramilitares, que han articulado el uso de la fuerza a un proyecto de dominación económica y política territorial, mientras las guerrillas han acumulado más su capital en el aparato militar”. (Salgado, 2011, págs. 27-28).

Por esta razón, fue tan alto el abandono en la región de los Montes de María que en la mayoría de los municipios, como es por ejemplo el Carmen De Bolívar y sus corregimientos allegados; la cantidad de víctimas superaba las expectativas de conflicto armado de naturaleza civil, convirtiéndose así en una guerra de guerrillas, puesto que ya los grupos beligerantes no tenían un norte ideológico asegurado, se encontraban dominados por la pasión del poder, el cual los había cegado de los principios originales. Aquí en este espacio geográfico se tiene que entre 1997- 2004, el abandono se debió a que grupos paramilitares expulsaran por terror y despojo de

las tierras a grandes propietarios y campesinos sin que el Estado se movilizara para impedírselos. Surgiendo así las masacres que pasaron a la historia y que solo buscaban una finalidad: La tenencia de la tierra para dominar el poder.

Con esta constante disputa, aconteció el abandono del campesinado y en consecuencia un desplazamiento de lo rural hacia lo urbano, aumentando la tasa de desempleo durante años en el país, conllevando a situaciones críticas de pobreza, de vivienda indigna y de una calidad pésima de vida. Pese a ello, el gobierno en el año 2002 quiso intervenir en la región de Los Montes de María en un fallido intento de negociación, luego se declaró zona de rehabilitación con un decreto del ejecutivo D.-No.2002 de 2002 donde se presentarían ideas de desmovilización dirigidas a los grupos paramilitares. Que sólo sirvió para solventar la estrategia del terrorismo y hundir la zona de los montes de maría en un poderío militar repleto de infantes dispuestos a luchar por ideologías patrióticas, en vez de tomar las riendas y buscar un mejor camino sin carácter bélico.

Para describir las características del medio monte Mariano en estas épocas, el decreto anterior no sólo buscaba la desmovilización del paramilitarismo sino también el aumento de la fuerza pública en esta región. Lo cual volvió inherente para la juventud de la región prestar el servicio militar determinado tiempo, sirviéndose del trayecto para reducir el número de insurgentes en este espacio geográfico. Así entonces, se continuó la idea de la desmovilización hasta la actualidad con variadas leyes que surgieron en proceso, una principal que es por ejemplo la ley 795 del 2005 que sentó las bases de una jurisdicción especializada para el conflicto armado.

En esta última etapa, el gobierno nacional ha fluctuado entre un acuerdo y una línea rigurosa de empuje. Tras ocho años de una incesante guerra bajo el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), el último gobierno que antecede al de Iván Duque fue quien se encargó en mayor medida de optar por el dialogo en vez de tomar un enfoque militar, el Expresidente Juan Manuel Santos (2011-2018) quien dedicó su gobierno a

una salida negociada con el grupo FARC con una agenda en concreta que más tarde rindió sus frutos.

Con respecto a esta histórica agenda, contuvo seis puntos, entre ellos el desarrollo rural en mayo- 2013, participación política noviembre 2013, la solución al problema del narcotráfico mayo- 2014, los derechos de las víctimas septiembre- 2015, y la terminación del conflicto en junio 2016. (Conciliation Resources, 2016). Más tarde, sería conmemorado el gran acuerdo de la reconciliación bajo la supervisión cubana, lo cual influiría en el desarrollo de la ley 1448 o ley de víctimas y restitución de tierras -que empezó a operar desde el 2012- para convertirse en un instrumento de gestión del post conflicto brindándole atención a las víctimas que surgieron con “ocasión del conflicto armado”. Sin embargo, con la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas en la teoría de reparación integral no se ha concretado realmente su materialización en el post conflicto, aunque guarde relación sistemática con el acuerdo de paz.

Es así como pudo verse en este capítulo, que la historia de la sociedad siempre ha sido la lucha de clases sociales por la tenencia de los recursos, este es un claro ejemplo de la disputa por la tierra como medio para conservar una autonomía de unos grupos rebeldes que planearon sentar las bases de un Estado “ilegalmente constituido” frente a un Estado legalmente constituido.

2.2. Las víctimas del conflicto Armado

En un primer momento, las víctimas del conflicto armado han tenido características relevantes en el marco de este contexto histórico. Las cuales fueron aquellas personas a quienes se les causó un agravio u otro delito ordinario con connotación o con ocasión de este conflicto, es decir, aquellos delitos que surgen siempre en las guerras entre comunidades; la desaparición forzada, violaciones, accesos carnales abusivos y violentos, expropiación, homicidios selectos, entre otros delitos. Aquello fue lo que históricamente constituyó el concepto de víctima del conflicto armado, desde aquel instante en que el sujeto ejecutor de la conducta le somete con la finalidad de seguir el curso del conflicto armado interno. Sin embargo, se debe tener en cuenta todos los

conceptos de víctima que históricamente le han sido asignado a estas personas atendiendo a diversas cualidades y apreciando desde distintos puntos.

2.2.1. Las víctimas con ocasión del conflicto armado

La definición de víctimas original tiene sus fundamentos en el campo de los derechos humanos (Guglielmucci, 2017). Sin embargo, adquiere connotaciones según la particularidad de cada país, a su vez se aplica la regla general en el marco de la declaración universal de los derechos humanos y del ciudadano de 1948, y teniéndose en cuenta cualquier vulneración de estos fundamentos del diario vivir, se concede el término de “víctimas” en el menoscabo de derechos humanos.

A partir de los derechos humanos y la legalidad de cada fuerza estatal, es que se define a las víctimas dentro de un conflicto armado “de naturaleza no internacional” o, lo que es lo mismo, interno. Imponiendo a su vez el mandato de la dimensión de cuanto implica el reconocimiento como víctima. Si bien es cierto, las víctimas poco después de convertirse en tales, también obtienen ciertas contribuciones a merced del Estado o quien ejerza la posición de garante sobre determinados actos, en el presente caso como se habla de conflicto armado, es el Estado colombiano quien debe garantizar la seguridad pública a todos los ciudadanos y, además, es el principal responsable de estos abusos a la integridad de sus habitantes, lo cual constituye una obligación de atender. Teniendo, así como resultado de tal relación jurídica, por una parte, a la víctima que debe ser reparada integralmente en todos sus bienes y restablecer las cosas a su relación anterior, por el otro lado, la persecución del ente a todos aquellos grupos rebeldes que coloquen en peligro la apreciada seguridad jurídica.

De esta manera, la categoría de víctima del conflicto armado es asumida como una condición o *status* de manera particular o colectiva, ya sea por fenómenos culturales, económicos, sociales o políticos, disputados en diversas circunstancias. Esta

condición debe ser genérica a la violencia, demandando -como se dijo anteriormente- la intervención del Estado y sus instituciones en los asuntos de vulneración o menoscabo de un interés jurídicamente tutelable por el país.

La categoría de víctima no posee una característica unívoca, pues es un concepto que debe tomarse a partir de fenómenos culturales, variables, sociales, la crítica y sobre todo político-económico. Es decir, el concepto de víctima no posee un contenido esencial unívoco, siendo este variable al pasar de los tiempos, ubicándose en el contexto histórico que se allega. Siendo así, que todo el recuento de estos 50 años de conflicto armado fueron la constitución de un concepto propio de lo que significa “víctima” con ocasión de esta guerra interna, concepto que se enunciará a continuación.

Pese a todo ello, el conflicto armado en Colombia no ha terminado. Actualmente en Colombia existen “unos leños prendidos” que aun contienen las bases tangenciales para seguir dando el curso de una guerra interna compuesta por las disidencias de las FARC, tanto en la política como en la armada. Estos grupos fueron aquellos que no se acogieron al proceso de paz, siendo liderados por Jesús Santrich e Iván Márquez, emergen de las cenizas y oportunamente declararon su inconformidad con las políticas gubernamentales referentes al post conflicto. Además de ello, no se puede dejar de lado a la guerrilla del ELN, el cual, según fuentes, se encuentra más fuerte que nunca y denota algunas características de violencia para los futuros venideros (PORTAFOLIO, 2019).

2.2.2. Las víctimas según la ley 1448 del 2011

Históricamente, las víctimas del conflicto armado no tenían un papel protagonista en los procesos de restitución y reinserción. Ahora con la llegada de la ley 1448 del 2011, la víctima participa activamente en la búsqueda de soluciones, con este tipo de justicia denominada Justicia restaurativa, la cual busca principalmente la reparación del daño ocasionado a esa víctima.

Sin embargo, para estudiar la efectividad de esa restauración en el proceso de reparación integral, se hace necesario determinar la condición de víctima en su relación tanto temporal como espacial. Con base en esto, el artículo 3° de la ley 1448 del 2011 enuncia la condición de víctima analizando la línea de tiempo y la duración del conflicto armado, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. *Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de Enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno...*”

Lo que implica que durante esa relación temporal del año 1985 hasta el 2019, son considerados víctimas del conflicto armado en Colombia todas las personas que sufrieron agravios, además de esto la ley en este mismo artículo establece:

“... También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primer civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.”

Pese a esto, la jurisprudencia de la corte constitucional se ha pronunciado en cuanto le compete la connotación de víctimas, ya que el sentido literal que traduce la norma es una delimitación tácita del concepto de víctima ante el conflicto armado colombiano. En la sentencia C- 250/12 el ilustre Magistrado Ponente Humberto Sierra Porto¹ se refirió a esta delimitación en la temática de la temporalidad de las medidas previstas a favor de las víctimas, comentando:

¹ Humberto Sierra Porto (15 de Marzo de 1996, Cartagena- Colombia). Ex Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, jurista y Abogado colombiano. Actualmente es Juez de la Corte interamericana de derechos Humanos.

“...Existen evidentes dificultades para establecer hitos relevantes en un conflicto de larga data como el que ha sufrido Colombia. En esa medida todas las fechas adoptadas pueden ser objeto de discusión y objeciones pues implican adoptar posturas sobre su naturaleza y evolución histórica. Ante esta dificultad se podría sostener que toda delimitación temporal es inconstitucional, pues en principio las medidas de reparación de índole patrimonial deberían ser garantizadas a todas las víctimas, sin embargo, tal postura limitaría de manera desproporcionada la libertad de configuración del Legislador, además que sería abiertamente irresponsable desde la perspectiva de los recursos estatales disponibles para la reparación de los daños causados, pues generaría expectativas de imposible satisfacción que acarrarían responsabilidades ulteriores al Estado Colombiano. Es decir, implicaría el sacrificio de bienes constitucionalmente relevantes cual es en primer lugar la efectividad de los derechos de las víctimas que se pretende reparar, pues no se puede desconocer las limitaciones de los recursos estatales que pueden ser invertidos para tal propósito”. (Sentencia C-250-2012, 2012).

Con esto, se puede corroborar que la jurisprudencia constitucional no exige una delimitación temporal para adquirir la condición de víctima. Dado el caso, el derecho decantado bajo los parámetros del Artículo 230 de la constitución de 1991, debe ser acatado de manera impositiva ante todas las actuaciones procesales para garantizar un debido proceso basándose en la dignidad que enaltece a la víctima, a la que sus derechos han sido violentados con ocasión del conflicto armado.

No es menos cierto, que la ley 1448 del 2011 afirma que las personas que hayan sido victimizadas antes de la aprobación de la ley, deben declararse como tales en el término de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la ley de víctimas, es decir, que tuvieron hasta junio del 2015 para registrarse ante el RUV (Registro Único de Víctimas). Sin embargo, también establece que las víctimas posteriores a los hechos de sanción de la ley, contarán con dos años para declarar, a partir de la ocurrencia del hecho. Ubicando el marco legal en esta relación temporal, pero dejando unos grandes interrogantes que fueron materia de investigación en la presente monografía, tales como los mecanismos para recurrir a la restitución de las

tierras, los segundos ocupantes u opositores de buena fe, terceros intervinientes, las impugnaciones de las decisiones sobre los procesos de restitución, etc.

Anteriormente se habló de un carácter temporal aguardado en la relación que determina la condición de víctima, concretando que no es necesario el límite riguroso impuesto en el artículo 3° de la ley 1448 del 2011. Quedando pendiente la conceptualización de víctima bajo la relación espacial, la cual se encuentra inmiscuida en el artículo 2° de la ley 1448 del 2011 que designa el ámbito de aplicación de la ley de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2°. AMBITO DE LA LEY. *La presente ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia, y reparación de las víctimas de que trata el artículo 3° de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía.*

(..)

Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la presente ley...”

Este artículo debe ser estudiado en coordinación con los artículos 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28, para determinar la relación espacial que se obtiene en la connotación de víctima del conflicto armado. A su vez, se afirma que todo el territorio colombiano es susceptible de entrar en el espacio geográfico de la consecuencia “en razón del conflicto armado”, así lo asegura el Honorable Nilson Pinilla Pinilla² como magistrado Ponente en la sentencia C- 280 del 2013 donde comenta de esta relación espacial aplicada:

² Nilson Pinilla Pinilla (15 de Agosto de 1946, Barrancabermeja- Santander). Ex Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia.

“...La Sala destacó que la Ley 1448 de 2011 de la cual hacen parte todas las disposiciones acusadas es una ley de carácter especial, pues regula respecto de los sujetos y personas determinados en su artículo 3° un conjunto de temas que en la mayoría de los casos se encuentran también previstos, aunque de distinta forma, en leyes preexistentes, las cuales no son derogadas ni afectadas de ninguna otra manera por la expedición de esta norma. En consecuencia, sus disposiciones se aplicarán durante su vigencia respecto de los sujetos antes señalados. En esta perspectiva, la Corte puntualizó que los contenidos específicos de su preceptiva no pueden ser cuestionados por la presunta infracción del principio de progresividad, pues el grado de protección antes alcanzado conforme a las leyes que regulan cada materia permanece vigente y no resulta menoscabado por efecto de esta norma...” (Corte, 2013)

De acuerdo a esta sentencia, todas las disposiciones de la ley 1448 del 2011 junto a las medidas de atención, reparación y asistencia a las víctimas del conflicto armado que se encuentren en la justicia restaurativa susceptible de ser abarcado dentro de la esfera de la Justicia Transicional; son aplicables en todo el ordenamiento colombiano a todas las personas que revistan la calidad objetiva y subjetiva de “víctima” en el conflicto armado.

Siendo así, ya se encuentran establecidas aquellas relaciones espaciales y temporales que establece el marco transicional bajo la legalidad de la ley 1448 del 2011 y los preceptos constitucionales enmarcados en la jurisprudencia Nacional, refiriéndose siempre en los componentes subjetivos del conflicto armado. De tal manera que, así como en el tipo penal se enmarca el sujeto pasivo de una calidad de afectado y lesionado, en el campo de la ley de víctimas también se asumen estos efectos a los que Velásquez Velásquez les denominó los ingredientes subjetivistas y los *elementos subjetivos distintos del dolo* (V., 2014). Corresponde en el siguiente capítulo describir objetivamente la condición de víctima que adquieren los habitantes del Carmen de Bolívar en la Región de los Montes de María por ser esta zona, una

expansión donde se libraron numerosos enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos beligerantes al margen de la ley.

2.2.3. Las víctimas en la región de los Montes de María con ocasión del conflicto armado: Ley 1448 del 2011

A pesar de que se está cumpliendo la década de la ley 1448 del 2011, la población de los Montes de María aun padece de masacres y asesinatos selectivos. Varias comunidades afirman que aún padecen de pobreza y la desigualdad, cuestionan la efectividad y eficacia de la ley 1448 del 2011, aun su materialización en esta zona de conflicto armado.

Desde 1990, la guerrilla se estableció en sectores de la zona Montemariana, a partir de ello, su maquinaria terrorista se fue desplegando hasta el corazón de los Montes de María. Entonces, el salado como ya ocurría con muchos otros lugares del país y como pasaría luego en toda la región. Sin embargo, los grupos Paramilitares también realizaban sus operativos estratégicos, como aconteció en las Masacres de los años 1999 hacia el 2000, donde alrededor de 300 familias tuvieron que abandonar sus hogares y establecerse en pueblos cercanos como lo es el Municipio del Carmen de Bolívar, allí empezaron una nueva vida y actualmente se encuentran cursando su proceso de restitución bajo los parámetros de la ley 1448 del 2011 (Franco, 2015).

Esto implica que la región de los Montes de María, históricamente ha sido despojada, forzada a desaparecer, expropiada, extorsionada, asesinada, etc. Y hasta la actualidad es que estas víctimas se concientizan de su derecho a acceder a los mecanismos de atención, asistencia y reparación, sin tener en cuenta, que aún son perseguidos y amenazados para que sus derechos y bienes no se les restituyan como fueron.

Además de esto, la comunidad Montemariana en conformidad con la clasificación de Víctima en conflicto armado del artículo 3° de la ley 1448 del 2011, es considerada

“objetivamente como víctima” aguardando la relación espacial y temporal estudiada previamente, por cuanto el criterio subjetivo les compete a los jueces al otorgar la reparación y restitución en los procesos adecuados en la justicia transicional.

CAPITULO III: LA LEY 1448 DEL 2011 EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO

Colombia ha vivido los últimos años un conflicto armado prolongado e intensivo, el cual ha traído infinidad de problemas y que ha afectado especialmente a la población civil, ocasionando entre muchas vulneraciones, el desplazamiento forzado, el despojo o abandono de tierras en distintas comunidades del campo, asentadas lejos del poder central del Estado. Pese a este largo recorrido, existieron precedentes que justifican el nacimiento de la ley 1448 del 2011, como guardiana de la integridad de las víctimas del conflicto armado que existe en el entorno clarividente.

En respuesta a la situación de despojo, desplazamiento forzado y lucha por la tierra, se creó esta ley por parte del Estado ante la necesidad de reparar a las víctimas del conflicto armado en procuración de los derechos integrales de los cuales fueron afectados, teniendo como principal fundamento el sanear las heridas que cedieron ante la guerra y así poder avanzar en la lucha por una paz estable y duradera. De manera que la ley de restitución de tierras es aquel instrumento que le permite al Estado colombiano saldar una deuda con aquellos civiles afectados por la violencia de dicha guerra militar interna.

Siendo así se debe representar un compromiso de todos los conciudadanos, dado su carácter obligatorio para todas las partes que estén llamados, sean funcionarios civiles o de distintas etnias, independientemente de ello, pretende cumplirse por igual el carácter de la norma.

La ley de restitución de tierras es nacida de una fuente material del derecho, mediante la cual se percibió la necesidad urgente de reparar a estas víctimas para que estas bajas no repercutan seriamente en la economía, producción y desarrollo del Estado. Este capítulo del post conflicto denominado “restitución de tierras” se convierte en una oportunidad para revertir la tendencia a que grupos armados tiendan a apropiarse de la tierra (Salazar J. C., 2012). La ley 1448 del 2011 pretende ser reconocida por toda

la comunidad de víctimas, asumiendo que la información debe de ser pública y que todos tienen derechos a acceder a estos mecanismos cuando concurra en los requisitos para ser considerado víctimas del conflicto armado.

3.1. Análisis de la ley 1448 del 2011

La ley 1448 del 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras es aquella herramienta legal que reconoce la responsabilidad del ente estatal causante y que pretende resarcir los daños ocasionados con el conflicto armado, además de dar a conocer la verdad sobre lo sucedido, ello tiene una sola finalidad; el perdón y la no repetición. Respecto a las víctimas, son las protagonistas de todo el margen de normas que componen la ley 1448 y demás que complementan estos dogmas.

Cabe resaltar que esta ley fue aprobada por el honorable congreso de la república y sancionada por el Ex mandatario Juan Manuel Santos, presidente en la legislatura donde fue aprobada la ley en mención, afirmando que esta ley “no es un puerto de destino sino la grilla de partida, donde se prueba la capacidad y voluntad, no sólo del Estado sino de la sociedad misma, para cumplirle a las víctimas” (Diario verdad abierta, 2019).

Sin embargo, hoy tras casi ocho años de aplicación de esta ley, existen sectores que critican fuertemente los procedimientos, como lo es por ejemplo la Comisión Nacional de Juristas, la Fundación Forjando Futuros, la Corporación Yira Castro, las cuales concluyen que la ley no ha cumplido año con la garantía del derecho de restitución a las comunidades étnicas y rurales -afectadas directamente por el conflicto armado. En un informe que rinden la Comisión Nacional de juristas y otras entidades, se logra evidenciar el incumplimiento de reparación a las víctimas despojadas de sus tierras, a poco más de dos años de que finalice su vigencia, tan sólo se han logrado sentencias de restitución de poco menos de 350 mil hectáreas, cuando el problema del despojo se calculaba en un principio de 6 millones, implica que se deben realizar cambios a estos mecanismos de reparación integral para que sea eficiente y eficaz a la hora de aplicar la ley 1448 del 2011 en un nuevo contexto (2019).

En este acápite, corresponde realizar un análisis de la ley 1448 del 2011 respecto a las medidas de eficacia, eficiencia y productividad que se le han dotado a esta norma, asumiendo que los efectos concomitantes de la legislación son un pormenor de lo que solía ser antes. Consecuencialmente, la restitución y reparación integral a las víctimas del conflicto armado tiene unas normas que le preceden en la parte histórica en todo el recorrido jurisprudencial, pese a ello, las víctimas nunca les fue reconocido un papel protagonista ante la responsabilidad del Estado como galante de la situación holgada que devenga actualmente el 15,87 % del territorio colombiano (DANE, 2019).

A continuación, se relacionan las normas constitucionales, legales y reglamentarias, debidamente identificadas por su número, expedición, título y breve reseña del contenido respecto a la finalidad que cumplió en su momento:

Ley 387 de 1987, medidas para la prevención del desplazamiento forzado. Se buscó adoptar medidas para la prevención del desplazamiento forzado y la atención y protección de los desplazados, consagrando como principales derechos de las personas en dicha situación: el regreso a su lugar de origen, posibilidad de recibir ayuda de organismos internacionales, el derecho a no discriminación por condiciones sociales, entre otras cosas.

Ley 975 del 2005, desmovilización de los grupos armados. Por el cual se dictan disposiciones de reincorporación de miembros de grupos alzados en armas organizados al margen de la ley, que contribuyan efectivamente a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1151 del 2007, Consiste en el plan de desarrollo social, económico y social del gobierno, donde incluye atención a población desplazada por el conflicto armado.

Ley 1152 del 2007, Dispone de un estatuto real que prevé la entrega de tierras de extinción al fondo de reparación de víctimas de la ley 975, se fomentan programas de permutas, subsidios, retorno y ubicación.

Ley 1190 del 2008, En esta ley el congreso de la república de Colombia declara el año 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y también se dictan otras disposiciones.

Ley 1424 del 2010, Versa sobre la situación jurídica de algunos desmovilizados y que surge a partir de la declaratoria de constitucionalidad mediante la sentencia C-936 de 2010 sobre la ley 1312 de 2009.

Ley 1448 del 2011, por medio del cual se dictan disposiciones relativas a la restitución de tierras y a las víctimas del conflicto armado. Esta norma es la referencia de estudio justificando su énfasis por las medidas de reparación, atención y asistencia que se dictan para las víctimas del conflicto armado y creando entidades estatales que supervisen esta función.

Ley 1752 de 2012, Se adopta el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado.

Los pronunciamientos jurisdiccionales que se relacionan con el proyecto de investigación son los siguientes:

Sentencia C-228 de 2002, mediante la cual se establece la limitación y naturaleza de los derechos de las víctimas.

Sentencia C-228 de 2003, trata de la justicia penal militar con respecto al derecho de las víctimas para acudir a esta vía para la administración de justicia.

Sentencia C-454 de 2006, el derecho a que se haga justicia en cada caso en particular, rechazando la impunidad de los actores del conflicto armado.

Sentencia C-370 de 2006, Trata de los derechos de las víctimas en la justicia transicional para la paz en el marco del post conflicto.

Sentencia C-209 de 2007, Profundiza el tema de la justicia, reparación integral y la verdad en el tema del post conflicto.

Sentencia C- 516 de 2007, Reiteración de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación conforme a los principios de dignidad y participación.

Sentencia C-1199 de 2008, Mediante la cual, la corte constitucional se pronuncia frente a una demanda de inconstitucionalidad que se presenta en la ley 975 del 2005, referente a los miembros de grupos armados desmovilizados que se reincorporen a la vida civil.

Sentencia T- 458 de 2010, determina el alcance exclusivo del derecho a la reparación integral abarcando los perjuicios de las víctimas tanto individuales como colectivos.

Sentencia T-159 de 2011, el tema central es el restablecimiento de los bienes patrimoniales a las víctimas del desplazamiento interno bajo los parámetros constitucionales y de los tratados internacionales aceptados por el Estado colombiano.

Sentencia T-076 de 2011, refiere a la protección del derecho de acceso a la tierra bajo la ley 1448 del 2011.

Sentencia C-715 de 2012, refiere sobre la conexión intrínseca de los principios de verdad, justicia y reparación además de pronunciarse de fondo sobre los derechos de los desplazados y refugiados en el conflicto armado.

Sentencia C- 250 de 2012, conceptualiza la definición de víctima bajo ciertos parámetros de la ley 1448 del 2011.

Sentencia C- 099 de 2013, dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno.

Sentencia C- 330 de 2016, refiere el tema de la reparación integral mediante la restitución de los predios y se pronuncia de fondo sobre la situación jurídica de los opositores de buena o mala fe exenta de culpa.

Para referirse a los actos administrativos del poder ejecutivo, se hará mención a uno muy importante que se analiza en la delimitación espacial del conflicto armado:

Decreto 2002 de 2002, en este se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación, además de adoptar estancias para el control y protección de la población civil con base en el conflicto armado.

Las anteriores referencias constitucionales, legales y jurisprudenciales representan el marco jurídico del que se sustenta la actual ley 1448 del 2011 en reflejo de las necesidades de esta manifestación. Asumiendo que el marco del conflicto constituyó una guerra civil interna que arrojó una cantidad de violaciones a los

derechos humanos procedentes del *ius in bello* anterior a ser regulado. Lo que implica, que la ley 1448 de 2011 con toda esta problemática de eficacia y eficiencia en la restitución, ha sido de suma importancia para el restablecimiento de los derechos de propiedad de las víctimas encontradas en el fuego cruzado del Estado y las fuerzas rebeldes que lo asedian.

3.2. Objetivos de la ley 1448 del 2011 en el posconflicto

Asumiendo que el objetivo es el fin al que se desea llegar o la meta a la que se propende, en la ley de restitución de tierras, es aquello que impulsa al territorio colombiano con todos sus habitantes, a tomar las decisiones para perseguir las aspiraciones en concordancia con el fin, la meta o destino.

Tangencialmente a lo anterior, el objetivo de la ley 1448 del 2011 se encuentra establecido en el artículo 1° descrito de la siguiente manera:

“Artículo 1. OBJETO. La presente ley tiene como objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibilite hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

La restitución de tierras debe entenderse como fin último a los procedimientos esbozados en la ley 1448 del 2011, asumiendo que regula lo concerniente a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de aquellas poblaciones “especiales” que fueron sometidas a violaciones de derechos humanos en razón del conflicto armado que perduró en el Estado colombiano más de cinco décadas. Las bases finales de la restitución de tierras en esta ley se pueden caracterizar en los siguientes ejes focales:

- La eficacia y eficiencia de las medidas judiciales ante el proceso de restitución de tierras en virtud de esta ley.

Un propósito principal en cualquier ley que devengue procedimientos de restitución de bienes y derechos es la capacidad para satisfacer las necesidades de resarcimiento ante la inconformidad de violencia empleada en un conflicto armado. Es menester resaltar que la ley 1448 del 2011 es considerada por un sector del ultranacionalismo como una ley de amnistía para contribuir al logro de la impunidad, sin embargo, hay otro sector de juristas nacionales que considera que esta ley no es perfecta, debe seguirse complementando cada vez que exista un vacío normativo. Se recuerda que en virtud del artículo 230 de la constitución del 1991, *“La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”* lo que implica que también la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina pueden llegar a ser fuentes del derecho a falta de normatividad requerida para el cumplimiento de la justicia.

- La eficacia y eficiencia de las medidas administrativas, sociales y económicas ante el proceso de restitución de tierras en virtud de esta ley.

En el interior de la ley 1448 del 2011, las medidas administrativas son todas aquellas actuaciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del debido proceso ante el trámite de restitución de los derechos adquiridos legalmente y previos al conflicto armado. Es decir, todo lo encaminado al proceso de restitución con sede en las entidades administrativas adyacentes al gobierno nacional que guarden relación con la sede administrativa del Estado, diferente a las medidas judiciales, ya que, estas últimas son implementadas por los jueces de la república de Colombia en un proceso de restitución de tierras llevado a cabo en conformidad con las garantías de la ley 1448 del 2011.

Los objetivos trazados en materia de restitución y reparaciones administrativas está lejos de cumplirse, la ejecución de la ley ha tardado tanto que el término estipulado de 10 años de vigencia resulta muy poco según la intervención de la empresa DEJUSTICIA en un concepto que rindió ante la corte constitucional, como lo explica Christian Escobar (2019); en un momento donde el órgano protector de la constitución estudia una demanda presentada en contra del artículo 208 de la ley 1448 del 2011, - el cual establece su vigencia por el término de 10 años, calculados hasta el 11 de Junio del 2021- resulta un término insuficiente y por eso es alegado en la demanda que se declare su inconstitucionalidad atendiendo a los siguientes parámetros:

- El impacto que recaería en los derechos de las víctimas de la pérdida de vigencia de la ley 1448 del 2011.

- La relación existente entre la ley y las modificaciones constitucionales realizadas a implementar el Acuerdo de Paz.

- El alcance de la Corte constitucional respecto a los términos para declarar la vigencia de una ley importante para el futuro del ordenamiento colombiano.

- La importancia de la ley de restitución de tierras para la implementación del acuerdo final de paz suscrito entre las FARC EP y el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.

Atendiendo a que su violación del acuerdo de paz, fungiría al Estado como incumplidor de un contrato que amerita medidas ante las organizaciones mundiales sobre derechos humanos. Actualmente, la ley de restitución de tierras es el soporte principal de la premisa menor para soportar el término de “paz” allegado a los grandes autores del siglo XIX como lo fue Enmanuel Kant.

De común acuerdo, las medidas sociales y económicas guardan relación directa con las repercusiones del entorno al que pueda corresponder la persona afectada por el conflicto armado. Inmiscuyendo dentro de estas medidas toda la relación directa con

la comunidad, la oportunidad de empleo, la subsistencia de la persona tanto individual como colectivamente.

- La efectividad de los derechos de la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición.

Se reconoce que las políticas establecidas en la ley 1448 del 2011 requieren ajustes, es necesario resaltar que esta ley sirvió como punto de partida para determinar la etapa del post conflicto y es necesario que esta continúe para garantizar los derechos que fueron menoscabados en la ocasión del conflicto armado.

Por ello a las víctimas se les dota del derecho a la verdad, justificando en que merecen informarse de todas aquellas actuaciones que menoscabaron sus derechos y con qué finalidad fue realizarla. A su vez, la justicia es el punto de equilibrio para ejercer la carga procesal contra el Estado y el grupo beligerante al tentar los bienes jurídicos con actuaciones encaminadas a borrar la existencia del otro bando.

3.3. Contenido de la ley 1448 del 2011 y las instituciones creadas

En el contenido de la ley 1448 del 2011 se enmarcan todos los principios que le sirven de base a los textos, entre ellos se encaminados a validar todas las actuaciones con las que obran las instituciones administrativas creadas con esta ley, algunos conceptos:

- Efectividad:

Según la Real Academia Española, la efectividad es la capacidad de conseguir el resultado que se investiga o busca. Es decir, aquello que es efectivo, por lo tanto,

obtiene el efecto esperado o deseado. En nuestro caso, se estudiará la efectividad de la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas, atendiendo a los presupuestos del proyecto de monografía.

Efectividad es un concepto tendido a relacionarse con eficacia y eficiencia. Respecto a la eficacia, el diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define ambos términos como sinónimos, vinculándolos a la capacidad de acceder al objetivo deseado. Mientras la eficiencia se definirá a continuación.

- Eficiencia:

Según el DRAE, está definida como la capacidad de contar con algo o con alguien para lograr el resultado pretendido. En el presente proyecto de investigación se utilizará la eficiencia como sistema cuantificador que permite realizar un estudio con fórmulas similar a la que se utiliza para determinar quiénes son las mejores universidades del mundo, o la que maneja la FIFA para saber cuáles son las mejores selecciones del mundo adscritas a esta federación, con el objetivo de establecer en dónde están los juzgados y tribunales de restitución de tierras que garanticen la finalidad dogmática de la ley 1448. Además de perfeccionar estrategias que permitan avanzar rápidamente en estos procesos complejos (El espectador, 2016).

- La Buena Fe:

Desde los romanos, la buena fe fue considerada la representación de un comportamiento virtuoso resaltado ante las divinidades de la época, sugiriendo más que sumisión, dominación. Esta siempre fue contraria al dolo (En materia civil) y sobre todo en lo que versaba sobre negocios jurídicos y actos solemnes. El derecho colombiano la consagra como norma constitucional en su artículo 83 y como norma legal en sus artículos 1609 del código Civil, 863 y 871 del código de Comercio. De esta manera que la buena fe se toma como un principio universal, contemplada desde

tres perspectivas distintas: de un lado aquella que mira la esfera íntima de la persona, de otro lado, la exigencia de “comportarse ante la vida jurídica obrando con rectitud y lealtad”, esto en la rama contractual del derecho e interpretación de los negocios jurídicos (Mozos, 2003).

En esta materia se abordará en el registro de resultados, análisis y conclusiones lo relacionado con la carga de buena fe que debe cumplir la víctima que va a ser restituida en sus bienes y los opositores que deben ameritar las cargas procesales pertinentes. En el marco de este proceso de restitución de tierras, la misma ley 1448 del 2011 consagra la carga que hace el opositor de acreditar la buena fe en los siguientes méritos:

“ARTÍCULO 88. Las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los 15 días siguientes a la solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuada por particulares se presentarán bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes. Las oposiciones que presente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberán ser valorada y tomada en cuenta por el juez o magistrado (...)

*Al escrito de oposición se acompañarán los documentos que se quieran hacer valer como prueba de la calidad de despojado del respectivo predio, **de la buena fe exenta de culpa**, del justo título del derecho y de las demás pruebas que pretenda hacer valer el opositor en el proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de la calidad del despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la solicitud de restitución o formalización.” (Subrayado fuera del texto).*

Quiere decir con esto que, el derecho protege la legítima acreencia de haber obrado ajustándose a derecho, pero en los casos especiales el legislador ha señalado -como es el caso de la justicia Transicional- cuando la acreencia debe ser legítima ignorancia, lo cual una normal diligencia no ha podido superarla, ubicándose así en la buena fe emergida en la ley 1448 del 2011 (TEDC, 2014). Observando de esta manera, que la

bona fides toma un concepto mucho más complejo en virtud del proceso de restitución de tierras.

- Reparación integral:

El término reparación hace referencia a la compensación o desagravio por un daño o una ofensa. Este daño puede ser moral o físico (material, psiquiátrico). La reparación integral según la ley 1448 es aquel desagravio que de manera adecuada, efectiva, diferenciada y transformadora canaliza un daño que ha sufrido la víctima como consecuencia de las violaciones de derechos con ocasión del conflicto armado.

Según el artículo 25 de la ley de víctimas y restitución de tierras: “La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica...”

El concepto de reparación que trae la ley es un concepto integral, porque no sólo se habla de reparación económica, sino de una satisfacción para las víctimas. Habla de una restitución moral y de indemnización económica, es decir, una visión integral de reparación (Periódico el Espectador, 2009). La ley colombiana en todo proceso jurídico les concede a las víctimas este derecho fundamental a la reparación de sus perjuicios, en este campo lo estudiaremos con estas definiciones y otras más, las cuales están caracterizadas por propender a los procedimientos de reparación integral de las víctimas del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según los componentes básicos de la reparación, la corte constitucional sostiene lo siguiente:

“La reparación involucra distintos componentes: tales ... 1) La restitución plena, que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida esta como una garantía de derechos fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la restitución de tierras usurpadas o despojadas a las víctimas. De no ser posible tal restablecimiento pleno, es procedente 2) la compensación a través de medidas de

indemnización pecuniaria por el daño causado. Pero, además de estas, la reparación integral incluye medidas como 3) la rehabilitación por el daño causado, mediante atención médica y psicológica, así como la prestación de otros servicios sociales para esos fines; 4) la satisfacción, a través de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; al igual que 5) garantías de no repetición, para asegurar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión sean removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan”.

Corte Constitucional, sentencia C-344/17. MP, Alejandro Linares

- Restitución:

En su sentido amplio, es el restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa, considérese esta última como situación jurídica, acontecimiento u objeto material. En el marco de la justicia transicional, la restitución es aquella que contempla las medidas para el restablecimiento de la víctima a la situación anterior a las violaciones, siempre que sea posible, hipótesis que conlleva ciertos derechos como restauración de la libertad, goce de los demás derechos humanos, atributos personales plenos como lo es la ciudadanía- nacionalidad, domicilio, reintegración a su vida laboral y devolución de sus bienes perdidos con ocasión del conflicto armado (Organización de Naciones Unidas, 2005).

Consecuentemente, la situación de la víctima en ciertos casos no se restaura completamente de manera efectiva, en otros casos es poco recomendable luego de realizarse el estudio, todo depende si le causará beneficio o no a la víctima del conflicto armado (Sanabria, 2018).

La restitución busca el restablecimiento de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurrieran los hechos o agravios violentos. La restitución

de tierras en virtud de la ley, incluye las medidas de restitución de vivienda, elaboración de proyectos productivos para la misma y capacitación para un empleo en su cuidado.

En este marco conceptual se hablará de la restitución como una medida de reparación integral en el marco del post conflicto y atendiendo al concepto anteriormente esbozado.

- Indemnización:

En primera medida es aquella compensación que se exige por el perjuicio causado, busca la anulación del daño causado en la víctima que sufrió el injusto. Esto quiere decir, que indemnización es sinónimo de compensación, pago, recompensa o retribución. Sin embargo, estudiaremos el concepto de la indemnización como una medida de reparación integral que entrega el Estado colombiano a las víctimas como compensación económica por los hechos delictivos los cuales les convirtieron en víctimas, buscando el fortalecimiento en sus proyectos de vida, Según Manuel Rincones y Amalia Polo, esta indemnización deriva del fondo de reparación de víctimas creado con esa finalidad de los bienes adquiridos de manera ilícita por la guerrilla de las FARC, tales como drogas, secuestros, cobro de vacunas, blanqueo de bienes líquidos, entre otras actuaciones fuera del orden constitucional establecido en Colombia (2017).

Lo que implica que esta disposición es eminentemente administrativa, creada para compensar el agravio sufrido en ocasión del conflicto armado.

- Garantía de no repetición:

Son una forma de reparación que tiene un componente preventivo y otro estrictamente reparador; pretende eliminar y superar las causas estructurales que originaron un crimen, al tiempo que evita que los crímenes del pasado ocurran otra vez (ONU, 2005). Las garantías de no repetición consisten en reformas institucionales y en medidas de otra naturaleza que buscan evitar que las atrocidades vuelvan a cometerse, con las cuales también se explora el respeto por los derechos humanos y los procesos democráticos (Polo, 2017).

Según el Alto comisionado para la paz (ACP), las garantías de no repetición de las violaciones y del conflicto son el resultado de la implementación de: I) los diferentes mecanismos y medidas del sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición; II) Las medidas que se acordaron el punto 3 del acuerdo de la Habana deben garantizar la terminación del conflicto armado y III) todos los puntos del acuerdo contribuirán a revertir los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado las condiciones de persistencia de la violencia en las zonas rurales del territorio (2016).

En la ley de víctimas se encuentran 17 medidas que tienen por finalidad evitar que las violaciones a los derechos humanos vuelvan a suceder. En estas se encuentra la implementación de programas éticos en educación de los derechos humanos, programas de reconciliación individual y grupal entre las víctimas y victimarios del conflicto armado, participación de las víctimas en los proyectos que los acojan, entre otras cosas.

A pesar de que se habla de una garantía de no repetición, no existe tal acervo de manera material, debido a que la propuesta sólo ha demostrado una mutación de estas estructuras alzadas en armas, impidiendo hablar de la no repetición como garantía en los procesos de la ley 1448 del 2011. Resulta fallida la garantía de no

repetición mientras las dependencias gubernamentales no renueven los mecanismos de solución de este tipo de conflictos.

- Víctimas:

Son aquellos que individual o colectivamente, sufrieron daños como consecuencia de las acciones u omisiones presentadas en el marco del conflicto armado. Según el artículo 3 de la ley 1448; se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado.

La corte constitucional declara exequible el artículo que define la condición de víctimas en el conflicto armado, disponiendo de un límite temporal que para un pequeño conglomerado afirma que vulnera el derecho a la igualdad de las víctimas en el conflicto armado, comenta la corte:

“...Ante esta dificultad se podría sostener que toda delimitación temporal es inconstitucional, pues en principio las medidas de reparación de índole patrimonial deberían ser garantizadas a todas las víctimas, sin embargo, tal postura limitaría de manera desproporcionada la libertad de configuración del legislador, además, que sería abiertamente irresponsable desde la perspectiva de los recursos estatales disponibles para la reparación de los daños causados, pues generaría expectativas de imposible satisfacción que acarrearían responsabilidades ulteriores al Estado colombiano. Es decir, implicaría el sacrificio de bienes constitucionalmente relevantes cual es en primer lugar la efectividad de los derechos de las víctimas que se pretende reparar, pues no se puede desconocer las limitaciones de los recursos estatales que pueden ser invertidos para tal propósito.”

Corte Constitucional, Sentencia C- 250/12. MP, Humberto Sierra Porto

- Justicia Transicional:

Propia en los procesos en los que, por diversas causas, antecedentes y motivos públicos, la justicia hace cambios para generar transformaciones relevantes para el futuro. Esta sanciona a los responsables con el objetivo a plazo de buscar la reconciliación de la sociedad.

Las Naciones Unidas definen este tipo de justicia como toda variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de antecedentes delictivos, a fin de que los responsables rindan cuenta de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación de la sociedad perfecta (2004).

La corte Constitucional ha definido el concepto de justicia Transicional como “ Una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemas en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes” (C-577, 2014).

La ley 1448 del 2011 instituyó el proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas, que en su contenido se refiere a la Justicia Transicional de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 8°. Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos de justicia, verdad y reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y desarticulación de las

estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible.”.

- Justicia Restaurativa

En concordancia con el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal, se entenderá por justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participa conjuntamente y de manera activa en la búsqueda de soluciones en los asuntos relacionados con el delito y perjuicio causado, todo esto con la finalidad de encontrar un resultado restaurativo para la víctima, con o sin ayuda de un facilitador.

La justicia restaurativa tiene entre sus finalidades el invitar a las partes en conflicto a buscar una solución accesible sin necesidad de implementos coercitivos, con esto pretende una mejor sociedad y abrirle paso al perdón, darle importancia a la reconciliación y olvido del rencor. Sin embargo, la metodología de este tipo de justicia no se encuentra ajustada a los parámetros del Estado, puesto que en medio del conflicto armado fue combustible para la propagación del fuego, el orgullo y resentimiento social.

- Conflicto Armado interno o no internacional:

Este concepto hace referencia a todos aquellos enfrentamientos en los que están involucrados las armas y la utilización de estas. Se han dado a lo largo de la historia de distintas maneras, podría ser entre dos poblaciones (Estados) o dentro de un mismo pueblo (interno), este último es el denominado conflicto armado interno.

Según el Comité internacional de la Cruz Roja (CICIR) el conflicto armado interno debe estar determinado por dos criterios objetivos del derecho internacional humanitario: La organización de las partes y la intensidad de las hostilidades (Salazar

S. , 2019). De allí que entonces la organización devenga por una línea de jerarquía donde se impartan ordenes, disposición para el entrenamiento y reclusión, distribución y administración de un territorio. Mientras la intensidad tenga que ver con la duración, frecuencia y gravedad de los combates en enfrentamientos, equipo militar y uso de equipo, y la cantidad de muertos, víctimas, etc.

Con base en esto comenta Gasser que *“los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado entre el gobierno, por una parte, y los grupos armados insurrectos por la otra [...] otro caso es el derrumbe de toda autoridad gubernamental en un país, que tenga como consecuencia el hecho de que varios grupos se enfrenten entre ellos por el poder”*³ (CICR, 2008).

El conflicto armado podría considerarse como la manera más antigua en la que se pueden relacionar los individuos en las civilizaciones, debido a que la guerra es algo que ha estado presente en la vida humana y que, gracias a él, es que se logra desarrollar una sociedad.

En esta misma medida, se puede considerar que la ley 1448 del 2011 contiene una serie de medidas tendientes a la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado, abarcando instituciones y procedimientos para confluir en el fortalecimiento del derecho a la reparación integral mediante el sistema de restitución de tierras. Este sistema de restitución es el mecanismo para encaminar la materialización de la ley 1448 del 2011 dirigida a aquellas personas afectadas por el conflicto y en razón del despojo de las tierras que pertenecían.

El procedimiento contenido en esta ley se estructura en dos etapas:

³ H.P. Gasser, International Humanitarian Law: an Introduction, in: Humanity for All: the International Red Cross and Red Crescent movement, H. Haug (ed.), Paul Haupt Publishers, Berna, 1993, p. 555.

Un primer momento corresponde al escenario administrativo el cual consiste en la iniciación por parte de aquella persona que se considere víctima, para reclamar el derecho de propiedad, uso o tenencia sobre el predio determinado y debidamente identificado. Esta solicitud debe ser realizada en una oficina de la Unidad de Restitución de Tierras, URT- Entidad adscrita al Ministerio de Agricultura- para que se corroboren los datos y se inicie el trámite del estudio de la verdad de ese predio. De forma que se incluya en dicho trámite administrativo a todas aquellas personas que sean poseedoras, tenedoras o que crean tener derecho sobre el predio en litigio y consecuentemente, exponer su caso ante la entidad, surgiendo así “los Segundos ocupantes”, los cuales pertenece una posesión sobre el inmueble ya sea de buena o mala fe, con justo título, que debe ser demostrado en el proceso. Precisamente la página de la URT relaciona el trámite una vez se acaba la etapa administrativa, se sigue la judicial respecto a la siguiente manera:

“...Al adelantar la reclamación y culmina todas las actividades de tipo catastral; procede a inscribir a los solicitantes y al predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante ‘el Registro’ o ‘el RTDAF’), con lo cual se sustrae al inmueble del comercio y se habilita a los solicitantes para que acudan a los jueces civiles especializados en restitución de tierras. Cumplido el trámite administrativo, los interesados pueden acudir a la etapa judicial, en donde un abogado de confianza o designado por la Unidad o la Defensoría del Pueblo debe presentar una solicitud de restitución de tierras, acompañada con todo el material probatorio que demuestre que efectivamente existió un despojo o un abandono forzado y que dicho fenómeno ocurrió con ocasión del conflicto armado. Al darse en el marco de un proceso judicial, esta acción es susceptible de ser objetada por terceros que consideren tener un derecho igual o superior sobre el predio reclamado...”

La ley de víctimas facultó a los jueces y magistrados de restitución de tierras a impartir todas las órdenes que fueran necesarias para lograr la adecuada

reparación integral y asegurar el retorno de los solicitantes una vez reconocidos sus derechos sobre el predio. Para tal fin, los jueces pueden ordenar la entrega y el acompañamiento en la ejecución de proyectos productivos, la priorización en programas de construcción de vivienda, medidas de rehabilitación física y psicológica, el saneamiento de pasivos fiscales o prediales, medidas de satisfacción de cualquier índole y la remisión a la Fiscalía General de la Nación de los casos en donde se identifiquen presuntos responsables de conductas ilícitas. Sin embargo, el escenario actual de la restitución de tierras en Colombia dista mucho de alcanzar los estándares internacionales de reparación integral...”

Fuente: www.URT.com.gov/

Dando, así como resultado, que la ley 1448 del 2011 tenga dos trámites periódicos indispensables para acceder a la restitución del predio o inmueble: el trámite administrativo y el trámite judicial.

En esta misma medida, las instituciones que se crearon en virtud de la ley 1448 del 2011, fueron las siguientes:

El sistema Nacional de atención y reparación integral a las víctimas

El cual está compuesto por los siguientes organismos:

A nivel nacional

- Ministros del interior y de justicia, Relaciones exteriores, Hacienda, crédito público, Defensa Nacional, Agricultura y desarrollo rural, Protección Social, comercio, industria y Turismo, Educación Nacional, Ambiente, Vivienda y desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones, y Cultura.
- Departamento Nacional de Planeación
- Agencia Presidencial para la acción social y la cooperación Internacional

- Unidades administrativas especiales de Atención y reparación de Víctimas y de Gestión de restitución de tierras despojadas
 - Fiscalía General de la Nación
 - Defensoría del pueblo
 - Registraduría Nacional del Estado Civil
 - Consejo Superior de la Judicatura- Sala civil
 - Policía Nacional
 - Servicio Nacional de Aprendizaje
 - Instituto Colombiano de Crédito y Estudios técnicos en el Exterior
 - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
 - Instituto Colombiano de Desarrollo rural
 - Archivo general de la Nación
 - Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses
 - Instituto Agustín Codazzi
 - Superintendencia de Notariado y Registro
 - Banco de Comercio Exterior
 - Fondo para el financiamiento del sector agropecuario
 - Mesa de participación de víctimas a nivel nacional
 - Programas presidenciales de Atención Integral contra minas antipersonales y de Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario
 - Demás organizaciones que participen en las acciones establecidas en la ley
- Las instancias que lo coordinan en este nivel nacional son:

- El comité Ejecutivo para la Atención y reparación a las víctimas: Este órgano es el encargado de diseñar y adoptar la política pública de restitución y reparación
- La unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad de Víctimas): Coordina la ejecución de las políticas públicas de asistencia, reparación y restitución.

A nivel Territorial

- Departamentos, Distritos y Municipios
- Entidades Descentralizadas Con funciones de Competencias para la atención y reparación a las víctimas en el marco de la ley.

Las instancias que lo coordinan en este nivel territorial son:

- Comités Territoriales de Justicia Transicional: Departamentales, Distritales y Municipales
- Centros Regionales de Atención, Reparación y restitución a víctimas

Todos los organismos anteriores hacen parte del andamiaje de la ley 1448 del 2011, y tienen integrados entre sus funciones el garantizar todos los principios que brinda el proceso de restitución de tierras. Es menester resaltar que las medidas de atención, reparación Integral y restitución confluyen de manera armónica junto al orden constitucional para resarcir todos los perjuicios físicos, psicológicos y demás, ocasionados a la población, entre ellos, la mayoría de los habitantes de los Montes de María como es el caso de esta investigación, en el siguiente capítulo se analizará la importancia de esta ley en la determinada localidad.

3.4. Utilidad de la ley 1448 del 2011 respecto a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María

La utilidad de la ley 1448 del 2011 en el aspecto Nacional representa una circunstancia prometedora para el Estado como manera de resarcir las heridas causadas por el conflicto armado, sin embargo, en el ámbito territorial se coloca en cuestión este marco

legal de sostenibilidad ante la ley en materia de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado. En este punto, se puede afirmar que con la Sentencia C-795 del 2014, la corte constitucional marca el punto de partida el derecho a la restitución de tierras como componente de reparación integral de las víctimas, siendo este independiente y autónomo ante los derechos reconocidos a los poseedores de buena fe exenta de culpa, lo cual indica que la restitución ante todo es de carácter absoluto, para la ley 1448 del 2011 y para el proceso de restitución de tierras (2014, pág. 2).

Los Montes de María es una región afectada directamente por este conflicto armado que perduró más de 50 años en el Estado colombiano, en este lapso han tenido que soportar la carga de abandono del Estado e igualmente sufriendo diariamente el despojo de sus bienes. Las leyes de categoría Marco que abren paso a un proceso de derechos fundamentales no puede arrojar desaciertos ante esta situación, implicando que la ley de restitución de tierras, en su sentido formal arroja hermosas promesas en el actuar de todas estas víctimas, pero el sentido material escasea en ello. Siendo necesario realizar un minucioso estudio respecto de la ley 1448 del 2011 en esta zona, la cual, en los últimos años de vigencia, arroja valores negativos por parte de los observatorios y estudios de caso que se han realizado en finalidad del mismo.

En concordancia a las víctimas del conflicto armado en los montes de María; la ley 1448 del 2011 establece unos mecanismos administrativos y judiciales para realizar estudios sobre las declaraciones rendidas por parte de las víctimas del conflicto armado tendientes a considerar la restitución jurídica y material de dicho bien inmueble despojado por la situación de la violencia del conflicto armado de más de 50 años.

Realizando un estudio de los análisis del observatorio de víctimas del conflicto armado, se puede concluir que la eficacia y la efectividad de la ley 1448 del 2011 es motivo de debate en las distintas instancias de las que realizan el seguimiento del proceso de restitución de tierras. De acuerdo con el último informe de gestión a 31 de

marzo de 2015 de la Unidad de Restitución de Víctimas, se han presentado 9.980 solicitudes inscritas en el Registro Único de Víctimas del Conflicto Armado de manera individual; de las cuales 7.716 se encuentran en proceso de demanda con solicitud de restitución. De aquellas, sólo 2.232 ya cuentan con sentencia de Jueces de Restitución de tierras que corresponden a 1.866 predios, a 3.127 núcleos familiares beneficiados y 94.299 hectáreas. Del total de las solicitudes resueltas, 251, falladas en 85 Sentencias, corresponde a la macrozona en la región ubicada en los Montes de María (2015).

3.5. Sentencias proferidas en restitución de tierra: Los Montes de María

En los exámenes jurisprudenciales de los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras de víctimas despojadas, se parte en un primer momento de establecer cuáles fueron los hechos violentos genéricos que dieron lugar a dicho acontecimiento narrado por la víctima, en el contexto del conflicto armado a partir del 1 de enero de 1985, como lo establece el artículo 3° de la ley 1448 del 2011. Consecuencialmente se demuestra la existencia de los hechos violentos que dieron lugar al despojo y abandono injustificado, una vez verificado; la figura judicial procede a declarar la nulidad de todos los títulos de dominio de usurpadores, y se da comienzo al trámite de restitución. Este es básicamente las pautas que siguen los jueces en esta materia para arrojar luz sobre datos inconclusos y poder así, llevar a cabo un proceso de restitución de tierras con eficacia y eficiencia.

Realizado un análisis de las sentencias proferidas que recaen sobre predios, hectáreas e inmuebles restituidos en los montes de María desde el período 2011-2015 mes de Julio, se resalta la siguiente información:

Departamento	Municipio	Corregimiento	Total	Hectáreas
Bolívar	El Carmen de Bolívar	El salado	17	3988364
		Jesús del Monte	4	727274
		Otro	58	10659766

	Total Carmen de Bolívar		79	15375404
	María la Baja	Mampuján	64	4338656
	Total María la Baja		64	4338656
	San Juan Nepomuceno	San Cayetano	12	257704
	Total San Juan Nepomuceno		12	257704
	Total Bolívar		155	221911
Sucre	Colosó	Vijagual	10	221911
		otro	19	1203797
	Total Colosó		29	2448557
	Morroa	cambimba	32	4742266
		Pichillín	39	30303
		Otro	5	9375
	Total Morroa		76	8709966
	Ovejas	Flor del Monte	14	5106649
		Canutal	25	3147914
		San Rafael	3	32886
	Total Ovejas		42	8671203
	Total Sucre		147	19829726
	Total Montes de María		302	42120826

Fuente: Información recolectada de la Página UVRT. Com. Corroborada por el Observatorio de vigilancia sobre derechos de restitución de víctimas y predios, Min. Agricultura.

En valor total de 302 solicitudes realizadas de en la región de los Montes de María, las cuales se estuvieron atendiendo; la revisión de los fallos arroja el siguiente valor: el 12.58% de estas sentencias, contienen en su parte resolutive el NO reconocimiento del derecho a la restitución sobre el predio solicitado, el 87,43 % confirmaron y reconocieron el SÍ sobre el derecho de restitución al predio solicitado. Todo ello teniendo en cuenta los Departamentos de Bolívar y Sucre. A partir de este estudio se puede corroborar que el promedio de víctimas en el Carmen de bolívar a las cuales se les han restituido sus derechos es de 17,2429 (Promedio de Hectáreas Restituidas), lo cual amerita que muchas otras víctimas no obtuvieron la satisfacción

de su derecho, por requisitos en el justo título o simplemente porque no se pudo probar su situación de víctima en el presente proceso.

Si bien es cierto que la productividad de la ley es resulta productiva, más no puede ser demostrada en estos momentos la eficacia de la misma, es necesario corroborar la información si los objetivos de la ley 1448 del 2011 se están cumpliendo materialmente.

3.6. Restitución de Tierras como medida de reparación Integral

En este acápite se presentará todo lo relacionado con aquella medida comprendida como “restitución de tierras” consignada en la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas, entendida como parte de la reparación integral junto a otras, como son la garantía de no repetición, asistencia, atención, rehabilitación, entre otras. De la misma forma, se planteará si la restitución de tierras contiene las características de eficacia y eficiencia, que posee de manera general la reparación integral como garantía formal del Estado hacia las víctimas.

Se asegura que la restitución de tierras es una parte fundamental de la reparación integral. Estas medidas de restitución buscan resarcir o devolver el estado en que se encontraban las cosas a aquella determinada persona considerada víctima, es decir, anterior al daño victimizante. Por consiguiente, las medidas de restitución de tierras contienen aquella dimensión material de la reparación integral, la cual, además de tierras pueden convertirse en cotejos financieros de crédito y patrimonios a favor de la víctima, o esto es lo que se requiere demostrar en la actualidad del país.

Según Gloria Urrego, la corte constitucional “atiende que la ley 1448 amparara de manera integral a las víctimas otorgado mecanismos de asistencia, prevención, protección y reparación integral, en síntesis, el propósito de la ley es proveer una inclusión socio-integral a las víctimas del conflicto armado colombiano” (2016, pág. 55). Esta autora sostiene que, a partir de la negociación anterior con un grupo armado,

mediante una justicia transicional abre nuevas oportunidades de reconciliación, hay que analizar si el Estado está brindando los instrumentos adecuados con la ley 1448 del 2011 a partir de los obstáculos que impiden la inclusión social. Uno de ellos es el perdón, implicando el olvido de los hechos violentos y someterse a una construcción de paz establemente duradera.

Sin embargo, es necesario recalcar que las víctimas son quienes contienen la última palabra comprendidas en el proceso de oportunidades que obtienen de regresar las cosas a como estuvieran anterior del conflicto armado. Para realizar la prueba de valoración es necesario describir la eficacia y eficiencia de la restitución de tierras como medida de la reparación integral, explorando los efectos concomitantes que esta contenga.

3.6.1. Importancia de la Reparación Integral

La reparación integral es importante simplemente en el sentido del reconocimiento de una Obligación que tiene el Estado frente a las víctimas de un conflicto armado interno. Estas últimas al sentirse abandonadas por el Estado y al momento de violarse los derechos protegidos por el derecho internacional Humanitario, son susceptibles de protección tanto internacional como nacionalmente. Quedando de por medio, el factor de reparar el daño sufrido en ocasión de la guerra civil interna que se generó en los factores político, sociales, culturales, ideológicos, religiosos, etc. Algunas funciones de la reparación integral en la ley 1448 del 2011 se enuncian así:

- Mitigar el dolor de las víctimas tanto física como psicológicamente
- Reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado
- Comunicar un memorial a la historia del conflicto armado
- Dignificar a la víctima en sí misma, en caso de rechazo por parte de la sociedad
- Participación de la víctima en el proceso de reparación, restitución y asistencia
- Restablecer las condiciones psicológicas, físicas y morales de la víctima (s)
- Compensación en patrimonio líquido respecto al despojo y pérdida de dinero (indemnización Administrativa).

En este punto comenta Sandoval Garrido que los daños morales causados a la víctima no tienen un precio material definido, por lo que esta responsabilidad podría ser ilimitada para el Estado de Colombia (2013), lo que implica que los perjuicios de esta magnitud no pueden ser restringidos a los daños físicos, son otros compromisos de los cuales el gobierno debe indemnizar obligatoriamente por lo expuesto en la ley 1448 del 2011 en el artículo 25:

“Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que ha sufrido como consecuencia de violaciones de que trata el artículo 3°...”

Sin embargo, el mismo artículo destaca la importancia entre las medidas de reparación integral que contempla la ley 1448 del 2011 y las medidas de ayuda humanitarias, como consecuencia NO será descontada de la indemnización administrativa que reciba la víctima como reparo ante el conflicto armado. Atendiendo así al fenómeno de la reparación integral como medida en pro de la víctima para que contribuya en su proceso de reinserción social y recupere todos los bienes materiales de los que fue privada. No es de duda que existe un gran avance en el proceso de restitución y reparación, pero existen grandes fallas en la ley que bloquean su cruce y hacen que el trámite sea congestionado influyendo en la restitución o no del bien inmueble, las cuales se atenderán en los próximos capítulos.

3.6.2. Importancia de la Restitución de Tierras

La restitución de tierras no es un experimento fallido o una nueva teoría de reparación. Simplemente es algo exitoso en otros Estados donde también se generó un conflicto armado de esta magnitud, el índice de éxito fue favorable al implementar este mecanismo.

La restitución de tierras como programa inmiscuido de la ley 1448 del 2011 tiene las siguientes características al resaltar su importancia:

-Devolver los terrenos, predios e inmuebles a las personas que en medio del conflicto armado fueron despojados de estas obligando a abandonarlas y desplazarse hacia otros lugares.

- Evitar el arbitraje de empresas privadas que incitaron de alguna u otra forma al conflicto armado para obtener los terrenos, inmuebles o predios de aquellas personas que se desplazaron y los abandonaron. Siendo provechoso para estas empresas el apoyar el conflicto armado para ocupar dichos territorios.

- La noción básica de Justicia: consistente en que las víctimas recuperen sus tierras, gocen efectivamente de sus derechos y se restablezca todo a su estado anterior, como si nunca hubiese sucedido el conflicto armado.

Todo esto implica que el desconocimiento de este mecanismo de restitución de tierras, puede acarrear sanciones desastrosas para el ordenamiento colombiano. Asumiendo que los organismos internacionales como la OEA y la ONU se encuentran como observadores activos de dicho conflicto suscitado; aunque existen mejoras pendientes en este mecanismo, por el lado positivo se tiene en cuenta que es la primera vez que en Colombia se lleva a cabo un mecanismo como este para revertir la situación política y dejar todo a su estado anterior, es decir, que las víctimas del conflicto interno histórico en los Montes de María y en el país, a partir del 2011 fue que se empezaron a preocupar por este tipo de víctimas al tratar de revertir el fenómeno del despojo injustificado y el abandono del Estado colombiano ante esta difícil situación.

Según Aura Bolívar, es necesario que el gobierno brinde mayores garantías de seguridad a aquellas personas que intervienen en el proceso, lo cual implica adicionalmente procesos de investigación, juicio y sanción para los responsables del despojo injustificado y el desplazamiento forzado (2016), consecuentemente, precisa que se debe castigar las amenazas, la instigación y todas las referidas maneras en las que se pueda afectar el proceso de restitución de tierras ante la dignidad de la víctima.

3.6.3. Importancia de la eficiencia

La eficiencia es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Lo cual implica que en la presente investigación se estudia esa capacidad tanto formal como material para cumplir el papel de la reparación, asistencia, restitución y rehabilitación de la ley 1448 del 2011 por parte del gobierno Nacional. Es de gran importancia este valor que tiende a evaluar la magnitud colosal de la situación precaria que viven algunas víctimas del conflicto armado.

3.6.4. Importancia de la eficacia

La eficacia viene relacionada con la eficiencia, en cuanto a la capacidad. Siendo que la eficacia es la capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa, en este campo, se espera que la ley 1448 del 2011 produzca el efecto deseado tanto material como formalmente, por ello en el trabajo de campo se tendrá amplia cobertura en estos dos términos, los cuales tiene el objetivo de medir las cargas procesales en la restitución de tierras y en el método para llegar a la sentencia favorable o no.

La restitución de tierras debe ser un propósito nacional, como medida de asistencia humanitaria para aquellas víctimas del conflicto armado, como componente del derecho a la reparación y como disculpa del gobierno nacional ante las víctimas del conflicto armado. Es la ideología más importante de la ley 1448 del 2011; y según el Plan Nacional de desarrollo del 2010- 2014, se estableció que se han abandonado forzosamente en Colombia 6.5 millones de hectáreas de tierra, cantidad que deja desprotegida a la economía nacional al no producir con esos terrenos (Silva, 2016), se esperaría que en la implementación intensiva de esta medida de restitución de tierras, el gobierno recupere en mayor medida aquel desarrollo industrial, económico, social y cultural que dejó de percibirse en los últimos 50 años.

3.7. La eficacia y la eficiencia de la etimología de la ley de víctimas y restitución de tierras en el Estado Social de Derecho

Desvezados anteriormente los conceptos de eficacia y eficiencia se puede evidenciar que una ley al pretender llenar vacíos y reparar intrínsecamente a una víctima, puede incurrirse en fallas y desvíos no previstos en una normatividad legal. Como se pudo apreciar, los miles de años que el homo sapiens conlleva al fulgor de la norma jurídica no es excusa para que esta prevea todas las situaciones jurídicas. Por esto, el pensamiento de mediáticos como Bruno o Descartes fue eminentemente condenado a la herejía debido al bagazo ignorante del momento; al no corresponder que el derecho y la creación de las leyes son un tipo de magia destinada a regular la armonía entre los habitantes de una comunidad.

En los tiempos contemporáneos es igual, Colombia quién aun siendo un Estado Social de Derecho, tuvo entre sus antecedentes a 9 guerras civiles Nacionales y 14 Guerras civiles locales, todo con fines políticos entre los partidos tradicionales aunados con el pensamiento particular de nuestros dirigentes predecesores-que se traduce a la ignorancia moderna-. Ahora en pleno siglo XXI, se encuentra en una transición hacia la paz por 50 años de luchas civiles internas que se vivieron, mientras que las víctimas fueron aquella carne de cañón que sirvió para aliviar las penas entre los actores de este conflicto armado.

Numerosas afirmaciones se han realizado en esta obra, referentes al origen del conflicto armado en las zonas vulnerables del país, sin embargo, no se puede dejar de lado la finalidad primordial que debe tener esta ley 1448 del 2011; **reparar y restituir a las víctimas del conflicto armado**. De manera que para reparar y restituir se deben tener en análisis los principios sobre los cuales descansa este aforismo risueño:

La verdad como un derecho para la víctima. Es necesario como fuente principal ante la confianza de las víctimas del conflicto armado. La verdad constituye toda

aquella conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. En materia de la ley 1448 del 2011, la verdad implicaría un verdadero reto al proceso de reparación y restitución de los bienes; en los términos morales y espirituales del *descanso eterno del afectado*.

El artículo 23 consagra que: "...Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable de conocer la verdad acerca de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trataba el artículo 3° de la presente ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La fiscalía general de la Nación y los organismos de policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas vivas o muertas" lo que implica que la víctima y sus allegados deben conocer acerca de los sucesos que ocurrieron durante el conflicto armado y consecuentemente asumir los hechos como ciertos, los cuales son contados por aquellos actores que se desmovilizarían con garantías de impunidad.

Sin embargo, se debe realizar una aclaración que la misma normatividad establece; el derecho a la verdad también incluye la variedad de parámetros de los sucesos que desencadenaron el conflicto armado, como tal, todos los secretos políticos, culturales, sociales, psicológicos, económicos y filosóficos que ocasionaron, el alza de armas de ese grupo- victimario, y arremeter violentamente a la población damnificada. A su vez, el derecho a la verdad deja a la jurisprudencia con una duda que implica una coincidencia entre los hechos y su afirmación que debe ser asumida de manera particular o general. Es decir, que el artículo 23 de la ley 1448 del 2011 no consagra el límite de la verdad que puede emitir y recibir las partes en la justicia transicional con base en estos procedimientos. Por esta razón, el legislador le deja al libre albedrío del juez, los límites con los cuales se puede saciar a las víctimas en esta temática de "Derecho a la verdad". A partir de aquí, se resalta el siguiente interrogante: En un proceso de reparación y restitución, ¿Qué límites particulares y generales asume el juez frente al derecho a la verdad consagrado en el art. 23 de la ley 1448 del 2011?

Pese a ello, Juan Arce Acepta que “el derecho a la verdad de las víctimas indica el conocer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que acaecieron los crímenes atroces, así como el derecho colectivo de la sociedad a acceder a un relativo recuento histórico sobre las razones por las cuales sucedieron los crímenes” (ARCE, 2013). Se recuerda que la ley 1448 del 2011 posee especial relevancia a la víctima para acercarla a la reconciliación con el Estado, debido a que la ley que la precedió (Ley 795 del 2005) buscó como finalidad última al victimario y dejó en ultimo alcance a la persona que sufrió los agravios. Observando así, la injusta condición en la que subsumieron los sobrevivientes del conflicto armado.

El derecho a la justicia en su estructura multidisciplinaria. La razón de ser de la justicia como derecho viene dada por la virtud comprendida en el principio moral del obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde al convenirse en términos del precio por la verdad, lo que afirmaba el filósofo ateniense *Sócrates*.

El artículo 24 de la ley 1448 del 2011 consagra: “... Es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que conduzca el esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, identificación de los responsables y su respectiva sanción. Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta ley o en instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia”. Lo que implica que el correcto sentido de esta facultad dirigida a las víctimas consiste en el derecho neto de acceder a la justicia teniendo como fin último el esclarecimiento de la verdad respecto de los hechos.

La justicia en la ley 1448 del 2011 comprende distintos campos, ya sea político, social, económico, cultural, étnico, etc. De acuerdo a sus circunstancias, así será su aplicación práctica (ARCE, 2013) . De aquí que el concepto etimológico de la Justicia nunca ha sido practicado desde PLATÓN hasta KELSEN. Claramente, la justicia fue

perforada en los poemas de los apasionados romanos, los trágicos griegos y los realistas Medas, sin embargo, en el campo práctico la justicia se vuelve certeza ante el esclarecimiento de los hechos y el paradero de la víctima.

Ante ello, los ordenamientos latinoamericanos no han tenido muy buenos antecedentes, por ejemplo, el caso de BÁMACA VELÁSQUEZ (Guatemala) o la Masacre de MAPIRIPÁN (Colombia), igualmente como los sucesos del Caso GELMAN en Uruguay, todos ellos denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por delitos de lesa humanidad prohibidos por el Estatuto de Roma de 1998. Por tanto, en la ley 1448 del 2011, la justicia no se entiende como tal un derecho a la justicia, sino que es un derecho el acceder a esta mediante los mecanismos que hacen efectiva sus consecuencias, tal como la reparación es indemne a la restitución de los bienes. Quiere decir, que el artículo 24 estipula el precepto normativo de que toda víctima sea capaz de acceder a la justicia recibiendo las mismas garantías con efectividades y eficacias “formalmente” establecidas.

El derecho a la reparación integral. Anteriormente se hizo referencia a la reparación integral en su aspecto etimológico, indicando que incluye la restitución efectiva de los derechos de aquella persona que sufrió un daño a causa del conflicto armado. Siendo este el pilar fundamental de todo el andamiaje de la justicia transicional que se encuentra a favor de la víctima y la base sobre la cual se asienta todo el proceso de restitución de los bienes, tierras y perjuicios, en este caso, la restitución de las tierras de las que fueron despojadas las víctimas.

El artículo 25 Consagra: “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° (*el cual habla de la condición de víctima según la ley 1448 del 2011*).

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva y

material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del derecho victimizante”.

Es decir, que la reparación integral da lugar en cada momento que se presenta una violación a los derechos humanos, manifestando la condición de víctima que se adquiere al momento de que se reconoce una reparación por parte del ente estatal. La reparación integral, según la CIDH⁴ involucra el uso de medidas “... tendientes a desaparecer los efectos de las violaciones cometidas...” (ARCE, 2013). De esto se puede inferir, no siendo menos cierto, que la reparación integral como derecho debe abarcar todo daño y perjuicio que haya sufrido la víctima, comprendida en una medida de satisfacción de alcance general y particular; conllevando unas medidas eficaces y eficientes para garantizar a la víctima su derecho a ser reparada por los perjuicios que se ocasionaron con el conflicto armado. Estas medidas particulares de la ley 1448 del 2011 se encuentran consagradas en el inciso 2° del artículo 25 de la ley; son la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Los principios Pinheiro y la restitución de tierras

Los principios pinheiro son aquel conjunto normativo internacional que desfalca las falencias de las normas internas sobre las migraciones, víctimas del desplazamiento forzado, post conflicto entre otras cosas. Estos constituyen los principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas sin importar el hecho genérico.

Las guerras civiles tuvieron su mérito poco después de la Guerra Fría⁵. Con esto se provocaron millones de desplazados internos a causa del conflicto armado que atravesaba su propia nación, comunidades y grupos sociales entre las luchas por la ideología y el poder. A falta de regulación de normas, estas víctimas fruto de los enfrentamientos anteriores, quedaban sin protección ante su derecho de reparación por la condición de víctima desplazada, debido a que el Estatuto de los refugiados no

⁴ Corte Interamericana de Derechos humanos. 2003. Principio 36 para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.

⁵ Guerra Fría (1947-1991).

era aplicable a este tipo de conflictos. Por esto desde los 90' la ONU empezó a estudiar los vacíos legales en la normatividad internacional sobre estas víctimas en este orden y en el interno, arrojando así nuevas características para regular este material de derechos agraviados en un conflicto interno.

En un primer momento, se observa en el derecho comparado que los principios rectores tuvieron éxito basándose en tres fundamentos:

- Se basaban en leyes actuales, existentes y coherentes con el orden jurídico de cada uno de los países. Lo cual facilitaba su interpretar a los problemas de la actual sociedad.
- Los principios se desarrollaron bajo la dirección del representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre derechos humanos de los desplazados internos, el célebre Francis M. Deng. Este lideró la comisión de juristas encargada de redactar el texto y enviar el informe a las Comisiones de la ONU.
- Los principios correspondían a una necesidad crucial de todos los Estados parte, sobre todo los que atravesaban por la etapa del post conflicto, ante lo cual era inminente la regulación para las víctimas de desplazamiento forzado, restitución de viviendas y tierras en ocasión del conflicto armado.

Por esta razón comenta R. COHEN que estos principios rectores sobre el desplazamiento interno llenaron un gran vacío en el sistema de protección internacional para las personas desarraigadas. Si bien su desarrollo aportó una serie de lecciones para los estados que pretendan desarrollar el campo de las migraciones base en la etapa de un post conflicto, tal como es el caso de Colombia en el período de transición de una guerra interna violenta hacia un estado de paz y reconciliación (Cohen, 2012).

La corte Constitucional acogió estos principios que regulan lo concerniente al post conflicto bajo los siguientes parámetros:

“Esta regla constitucional se encuentra anclada en la idea según la cuál en algunos casos las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado se ven

obligados a no revelar de manera exacta y detallada todas sus circunstancias, pues pueden considerar que ello acarrea un mayor riesgo para su vida o su integridad con dificultades adicionales y exorbitantes para acceder a la ayuda que necesitan de manera urgente. Son casos de extrema necesidad en los cuales el propio derecho o las autoridades encargadas de aplicarlo no dejan a las personas en situación de desplazamiento salida distinta para satisfacer sus más elementales necesidades...” (T-281-2007).

La autoridad que expidió y reguló la base de estos derechos la encontramos en la autoridad de la Subcomisión de Promoción y Protección De los Derechos Humanos de Las Naciones Unidas (ONU), en coordinación con los principios Deng regulados en la sentencia de la corte constitucional T-281/07 como magistrada ponente CATALINA BOTERO MARINO de la honorable corte.

Con esta normatividad internacional se pretende resaltar en la investigación aquel respaldo que tienen las personas desplazadas por el conflicto armado para que consideren su calidad de víctima ante las dificultades formales y sustanciales de la ley 1448 del 2011, pese a que su carácter transicional aún posee vacíos legales poco afluentes con las garantías fundamentales ante las víctimas del conflicto armado. Estas normas internacionales nacen a la vida jurídica para definir las condiciones de los desplazados internos con suficiente elasticidad como para superar el paso del tiempo, en una mayor aceptación, lo que busca crear un mayor equilibrio entre el nivel del hecho victimizante y el nivel operativo de la ley.

CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico se encuentra descrito como el plan general que dicta lo que se realizará para responder a la pregunta de investigación. En este estudio se debe encontrar la solución posible a la respuesta ante la investigación base. Al plantear a este diseño se puede fundamentar cómo se generó esta información respecto al estudio de caso y de qué manera fue analizada dicha información.

La información se recolectó a partir de entrevistas en fuentes de primera mano, estudiando las principales características de la ley 1448 del 2011 y realizando interrogantes a las víctimas y funcionarios de la Unidad de víctimas, cuestionando la existencia, naturaleza y eficacia de la ley, la cual formalmente dicta los presupuestos necesarios para regularse en el post conflicto, pero, abstraída a la realidad no resultó eficiente ante sus diez (10) años de vigencia. Implicando de esta manera, la necesidad de crear nuevos mecanismos y medidas para implementar la restitución eficiente y eficaz de las tierras a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María, específicamente en el municipio del Carmen de Bolívar.

Consecuentemente, esta información fue manejada con discreción y se mantuvo la identidad de las víctimas en secreto para cubrir sus garantías ante el riesgo que genera hacer parte de estos resultados. Sin embargo, la conclusión de estos resultados manifestó la necesidad de normas auxiliares y principios rectores ante los recursos con los que cuenta la víctima para hacerse parte en un proceso de restitución de tierras y las cargas procesales que debe suministrar de manera “sumaria” si quiere hacerse parte en el proceso de restitución de tierras ya sea como víctima solicitante o como opositor -de buena o mala fe-.

En general, en el diseño metodológico se llevó conjuntamente todos los métodos utilizados para recolectar y analizar las variables medibles que se especifican en un problema de investigación. Este diseño es el marco que fue creado para encontrar las respuestas a algunas preguntas que nacieron en el nexo de la investigación. El éxito del diseño metodológico dependió en gran medida de las preguntas realizadas a lo

largo de esta investigación referente a la eficacia y eficiencia de la ley 1448 del 2011 ante las víctimas del conflicto armado en la zona poblacional estudiada.

El presente estudio de investigación pretendió analizar la importancia de la implementación de la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas y restitución, respecto a su eficiencia y eficacia, procurando indicar los estándares tanto nacionales como internacionales con los que cuentan las víctimas del conflicto armado para hacer valer su derecho de restitución frente a la reparación integral y los rigurosos formalismos que se desencadena en el ámbito jurídico bajo los parámetros de la Justicia Transicional. Con estilo documental, la información expuesta consta de tres categorías de análisis: La eficacia y eficiencia de la ley 1448 del 2011; Los argumentos de la restitución de tierras y su proceso ante los jueces especializados, y por último, La restitución colectiva e individual que realiza el ente gubernamental a las comunidades que fueron despojadas y desplazadas por el conflicto armado.

Con base en un estudio de caso referente a la eficiencia y eficacia de los procesos judiciales especializados en restitución de tierras, se buscó demostrar el desmérito y los vacíos legales que se encuentran traídos a colación en la región de los Montes de María, Municipio del Carmen de Bolívar, como fundamento de la población y muestra de esta investigación. Además, el paradigma de la presente es de carácter interpretativo debido a que busca interpretar el contenido de los derechos humanos, el devenir y la ejecución de la ley de víctimas ante el derecho comparado e implementación de los Principios Pinheiro creados por Deng para la regulación del desplazamiento interno con ocasión del conflicto armado.

Comoquiera que el objeto propuesto corresponde a la comprensión de un fenómeno: La eficacia y la eficiencia de los procesos de restitución de tierras consignados en la ley 1448 del 2011, en cuanto concierne al post conflicto y la identificación de los estándares en el marco jurídico para la paz en el Estado colombiano para que en *grosso modo* se aborde el vacío legal que no alcanzó a regular el legislador con la ley de víctimas y restitución de tierras. Sin embargo, el artículo 230 de la constitución

política del 91´ permitió que la Jurisprudencia -como fuente auxiliar- se encargara de proporcionar conceptos jurídicos con ayuda de la analogía que sirvieron para salir de estas disputas, como lo son los opositores de buena fe exenta de culpa en un proceso de restitución de tierras, segundos ocupantes, concepto temporal- espacial de la víctima en el ámbito Nacional e internacional de conformidad con los derechos humanos y el DIH.

5.1. Paradigma de la investigación

El paradigma de investigación es aquel conjunto de acreencias y actitudes, estudiado por Thomas Kuhn, como una visión del mundo “compartida por un grupo” de experimentados hombres que implica una metodología definida por la determinación. En el presente estudio de caso, el paradigma se encuentra en aquella visión compartida entre las víctimas del conflicto armado y los funcionarios encargados de ejecutar los supuestos de la ley 1448 del 2011.

De conformidad con lo anterior, el paradigma objeto de estudio en el presente diseño metodológico de la investigación es el **paradigma interpretativo**. Debido a que comprende una realidad dinámica y diversa encaminada al significado de las acciones humanas, la voluntad común y la comprensión de los pensamientos de la práctica social. Es decir, que existe una relación de participación democrática y comunicativa entre el investigador y el objeto investigado. De esta manera, buscando la forma de entender el conocimiento abstracto y la realidad se pretende interpretar el espíritu y la intención del legislador de la ley 1448 del 2011 con estos mecanismos de reparación integral y restitución, los cuales actualmente se encuentran en desuso.

La interpretación formal que se le ha otorgado a la ley de víctimas resultó complaciente en los umbrales procesales que enuncia MAYNEZ y MONROY CABRA, sin embargo, en la realidad, las figuras judiciales no han comprendido a cabalidad la intención del legislador con esta ley: La restitución de los derechos de las víctimas del conflicto armado, con esto no solo sus bienes sino, además, su vivienda, un empleo formal, las condiciones dignas para la subsistencia, entre otras cosas. Por ello, en este estudio

de caso se indagó sobre la aplicabilidad de la ley 1448 del 2011 relacionada formalmente con la ley 975 del 2005, teniendo en cuenta que esta última fue encaminada a brindar garantías a los victimarios sin ubicar en este marco jurídico a la víctima como tal en el territorio colombiano, ajustando los mecanismos e incompatibilidades que la misma ley tenga y describiendo sus características especiales.

Además de ello, el concepto de víctima en ocasión del conflicto armado interno no fue comprendido sino a partir de la vigencia de la ley 1448 del 2011. Este resultó imputable al desplazamiento forzado, producto de la violencia en la que el país ha estado sumergido durante una década. Si bien la ley de víctimas, coloca ante este individuo un derecho el cual debe ser restablecido, reparado e indemnizado en sus bienes y honra, a su vez que ejerce una carga de “obligación- deber” a favor del Estado para con esta víctima, asumiendo así en la tangente que la seguridad jurídica fue degenerada en el conflicto armado.

Las víctimas para el año 2018 se estimaron entre el 30.9% ya se encontraban en aras de la restitución de sus bienes. Pero el estudio de caso demostró la ineficacia y la poca eficiencia de la restitución de sus derechos, los cuales se encuentran en niveles críticos atendiendo al principio de la economía procesal. Lo que implica que la lucha interna fue una causa más de la pobreza del país y en gran parte de los tiempos bélicos a los que atendieron. Quiere decir que el desempleo, la marginalidad, hambruna y pobreza son factores del conflicto armado suscitado que hieren la penuria del ordenamiento colombiano.

De esta manera, no es ajustado a derecho que una víctima del conflicto armado perezca en la espera de una sentencia de pronunciamiento a favor de la restitución de sus bienes, en estos parámetros de temporalidad debe cubrir un mínimo de garantías para su subsistencia y recursos judiciales para acceder y asesorarse de este proceso de justicia transicional. Por tanto, la interpretación que debe estudiarse ante la ley 1448 del 2011 es la realización plena de las garantías sustanciales y procesales

que contiene a favor de la víctima, y que deben ser otorgadas en la menor brevedad posible.

El paradigma interpretativo está llamado a prosperar una vez que la figura judicial comprenda en su sana crítica la importancia de la restitución y reparación integral, y como medidas preventivas que sigan custodiando la calidad y dignidad de la víctima.

5.2. Pregunta de investigación

La pregunta principal que conllevó al estudio del caso, el cual pretende responder y fue derivado del planteamiento del problema que se formuló previamente, asumiendo el concepto que históricamente tomó la condición de víctima en el Estado colombiano; la efectividad con la que se restituyen las tierras a estas víctimas; la eficiencia con la que se restituyen las tierras a las víctimas; la eficacia con la que se restituye a las víctimas de manera individual y colectiva, y con la ayuda del paradigma interpretativo, se planteó la siguiente pregunta de investigación:

Teniendo en cuenta los objetivos, detalles en el marco del post conflicto y las sentencias de restitución proferidas por el judicial especializado: ¿De qué manera individual y colectiva se garantiza la eficiencia y eficacia en la restitución de las tierras a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María?

5.3. Objetivos

Siendo el fin o la meta que se pretendió alcanzar en este estudio de caso, la ley 1448 del 2011 indicó el propósito por el que se realizó la presente investigación, en resumidas cuentas, un vacío normativo y un vicio fáctico del que adolece el proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado en la población mencionada.

Los objetivos en el marco de la investigación fueron el sustento para analizar la efectividad y la eficacia de los procesos de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado teniendo en cuenta que los focos de interés investigativo cubrieron mayormente las conceptualizaciones de las que fueron sacando los términos omniscientes.

Objetivo General:

El objetivo de esta investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen, apuntando siempre a responder inquietudes del proyecto.

- Analizar la eficiencia y la eficacia de la restitución de tierras de las víctimas del conflicto armado en los Montes de María de manera individual y colectiva según la ley 1448 del 2011.

Objetivos específicos

- Analizar cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de manera material a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María.
- Analizar cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de las víctimas del conflicto armado en los Montes de María en el menor tiempo posible.
- Analizar cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de las víctimas del conflicto armado en los Montes de María de manera individual y colectiva.

5.4. Hipótesis

En esta fase se planteó una proposición con conceptos, juicios y raciocinios tomados de la realidad jurídica de la ley 1448 del 2011 con la finalidad de establecer las bases en el proyecto de investigación para luego poder saber qué es lo que se trata de probar.

Atendiendo a lo anterior, se parte de la siguiente hipótesis:

El Estado colombiano por medio de la ley 1448 de 2011 repara integralmente a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María a través de la restitución, como medida principal, de manera individual, colectiva, material, moral y simbólica.

5.5. Tipo de investigación

El diseño metodológico puede ser dividido en varias categorías, pero dos grupos son importantes resaltados: el tipo de investigación cualitativo y el tipo de investigación cuantitativo.

En este proyecto, el diseño seleccionado abarca la investigación cualitativa. Colocando en la importancia en cómo se construye la realidad y la relación del investigador con el objeto de estudio. Usualmente estas investigaciones se basan en la observación y el estudio de caso, sin embargo, la observación no resultó necesaria para ejecutar el análisis de la ley e interactuar con los objetos de investigación (Las víctimas y funcionarios de la URT).

Dado lo anterior, la presente investigación jurídica es de tipo cualitativo, con enfoque empírico, basada en cierta medida en el análisis de la implementación de la ley 1448

del 2011 desde una interpretación teleológica con el fin de generar un impacto académico, gubernamental y social.

Centra el estudio en una realidad social existente en nuestro país, y en la historia de 50 años de conflicto armado; en un acuerdo de paz firmado al calor de un cese bilateral y un trato ofrecido a las partes en conflicto, además de resaltar la existencia de las víctimas en el conflicto armado. Analizando si existen garantías suficientes a estas víctimas en conformidad con las normas internas que históricamente regularon este conflicto armado y que garantías permanecen formalmente ciertas, pero materialmente inciertas.

Se realizó un análisis detenido de las leyes 975 del 2005 y mayormente la actual ley 1448 del 2011 o ley de víctimas, presentando una postura crítica en el registro de los resultados y las conclusiones. Estudiando la efectividad, la eficiencia y la manera en que se restituye a las víctimas del conflicto armado colectiva e individualmente, identificando las falencias del proceso de restitución de tierras, los casos en los que la víctima no ha sido reparada material y formalmente por falta en pruebas “sumariales”, así como también se dio mérito por el avance gubernamental del Estado en el tema de restitución y reparación de los bienes a las víctimas del conflicto armado, en pro de estas víctimas y sugiriendo mecanismos para hacer un mejor restablecimiento de tierras ante las comunidades afectadas.

A fin de brindar las respectivas conclusiones finales de la investigación, se realizó un registro de los resultados de las entrevistas en compilación con este estudio de caso suscitado, y se realizó un análisis procesal frente a la eficiencia, eficacia, la restitución colectiva e individual, y consecuentemente se realizó una crítica con base en los resultados obtenidos en el trabajo de campo anteriormente suscitado.

Sin dejar de lado el estudio de los intentos del Estado colombiano por combatir el actuar de los grupos rebeldes ilegales, se identificaron leyes que fundaron los antecedentes de la ley 1448 del 2011, los cuales fueron material de estudio en el

marco jurídico del presente estudio de caso, información que fue suministrada por los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras del Municipio del Carmen de Bolívar.

También se analizaron Sentencias del tribunal de Cartagena y de los jueces especializados en restitución de tierras de la región de los Montes de María, específicamente en el Carmen de Bolívar, respecto a los resultados que fueron comprometidos con las normas legales existentes. En este mismo inciso, la ley 1448 del 2011 planteó un desacierto en la eficacia y la eficiencia de los procesos de restitución, también se logró comprobar por qué algunas víctimas no fueron restituidas en la totalidad de sus bienes, bajo los parámetros de las “pruebas sumariales” que habitan en la ley 1448 del 2011.

De la misma manera, se evidenció que la jurisprudencia constitucional facultada por el artículo 230 de la norma superior, ha logrado cubrir el vacío normativo que posee la ley de víctimas frente a los segundos ocupantes exentos de buena fe. Y por supuesto, las garantías que posee este último que actuó como propietario con justo título en conformidad con las normas civiles ordinarias que regula la ley colombiana, encontrándose así en el mismo equilibrio para que sus derechos se restituyan de igual manera que a la víctima, puesto que la teoría de los derechos adquiridos lo regula de esta forma sin importar el trámite procesal y sustancial que se le otorgue.

La investigación de tipo cualitativa demostró las variables esenciales que cedieron en la propuesta de la originalidad de este proyecto en el estado del Arte, este trabajo no sólo se conforma en comprender la dinámica de la restitución de tierras, sino que quiere demostrar si en realidad la víctima tiene ese papel protagonista en el tema de la justicia restaurativa o, por el contrario, será siempre una persona con afectación que simplemente debe ser reparada mediante la restitución de sus bienes. Además, se debe zanjar aquel vacío respecto a los opositores de buena fe (segundos ocupantes) a los que podría considerarse víctimas indirectas del conflicto armado interno. En este orden, se presentaron los aportes originales del estudio de caso:

- A nivel metodológico, la actual investigación utiliza el método cualitativo como medio para analizar las medidas de restitución de la ley 1448 del 2011 y sobre cómo pueden ser efectivas al momento de aplicarse, además de estudiar las sentencias que permiten comprender la materialización de esta. No sólo perpetúa estadísticas y fichas de radicados, sino que pretende proyectarse hacia futuro con las entrevistas y ejes focales en las víctimas del conflicto armado.
- A nivel de la muestra, el trabajo se realizó en la región de los Montes de María en el municipio del Carmen de Bolívar con aquellas víctimas, que se encuentran registradas en los procesos de restitución de tierras, y otras que aún desconocen los parámetros de la jurisdicción especial para la paz.
- A nivel del enfoque investigativo, este estudio investigativo no sólo analiza la temática de restitución de tierras de manera teórica, sino que pretende a manera empírica profundizar en todos los efectos favorables o desfavorables que pueda tener la ley de víctimas 1448 del 2011 en el material de restitución de los derechos reales y la restauración de la vida de la persona a cómo era antes. Por eso, la investigación como estudio de caso es un enfoque nuevo que por primera vez se realiza un estudio de esta naturaleza en Colombia.

A nivel teórico, esta investigación aporta nuevas teorías sobre los procesos de restitución colocando como sujeto de principal atención a las víctimas (directas e indirectas) del conflicto armado en relación con el ambiente psicológico, psiquiátrico, rehabilitador, jurídico y sociológico. Esta nueva teoría busca brindar un estudio minucioso a los posteriores procesos de restitución de víctimas por parte de los funcionarios judiciales hacia un mejor acercamiento de las partes en un ambiente de reconciliación y no repetición.

5.6. Método de investigación

El método de investigación que se utilizó en la presente investigación fue el estudio de caso. El cual es una técnica investigativa que se caracteriza por precisar el análisis de uno o varios casos. Entendido de esta manera, se estudiaron todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información para el análisis de la ley 1448 del 2011 referente a los procesos de restitución de tierras en la relación espacial y temporal mediante la eficacia y eficiencia de la ley 1448 del 2011.

El presente estudio de caso partió de la siguiente hipótesis:

“El Estado colombiano por medio de la ley 1448 de 2011 repara integralmente a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María a través de la restitución, como medida principal, de manera individual, colectiva, material, moral y simbólica”.

Consecuencialmente, se estudió la eficiencia y efectividad de la medida de restitución de tierras como parte de la reparación integral en virtud del artículo 25 de la ley 1448 del 2011. Los resultados fueron contemplados una vez se practicaron las entrevistas a los sujetos objetos de esta investigación, al interactuar con estos, se demostró las falencias, sin embargo, al analizar el contexto histórico del marco de la Justicia Transicional en Colombia se evidenció un avance en la materia de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado interno. A ello se le suma en mayor medida, el respaldo internacional que ofrecen las organizaciones regionales y mundiales, para recurrir a la reparación de su agravio mediante indemnizaciones administrativas.

La línea de tiempo del estudio de caso constató del período 2011-2018, sin embargo, se tuvieron en cuenta para efectos del contexto histórico, aquellos antecedentes que fundamentan cada uno de los acontecimientos que dignifican la restitución de las tierras y las leyes que los precedieron. Por este motivo, las delimitaciones que se tomaron fueron las siguientes:

Delimitaciones

No se trata de generalizar más bien de comprender el espacio geográfico donde se va a realizar la investigación de campo:

- Delimitación Teórica: La eficacia y eficiencia de la restitución como modelo de reparación integral en la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas.
- Delimitación Espacial: Los Montes de María con una proporción de 6.466 Km²; Ubicada en la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre, en la región Caribe de Colombia; integrada por 15 municipios; 7 en el departamento de Bolívar (Carmen de bolívar, María la baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El guamo y Zambrano) y 8 en el departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolviejo).
- Delimitación Temporal: Período 2011-2018 como marco del post conflicto. Sin embargo, en el contexto histórico cuenta unos antecedentes más remotos para sustentar el estudio de caso, teniendo en cuenta el surgimiento del conflicto armado y los pasos metódicos para que nazca a la vida jurídica la ley de víctimas.

Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de información

Indicaron el lugar, objeto o persona de los que se obtuvo la información requerida. Se relacionaron con los indicadores para que exista una información suficiente que refuerce el estudio de caso.

Se analizará la manera en que se va a obtener los datos de información para nutrir el proyecto de investigación, consta de los siguientes:

- Las técnicas son entrevistas y grupos focales
- Instrumento de recolección consta de un cuestionario con preguntas semidirectas.
- Las fuentes son primarias debido a que se le va a realizar entrevistas a las víctimas del conflicto armado en condición de la ley 1448 del 2011.

5.7. Población y Muestra

Dado que la población es el conjunto total de individuos que poseen algunas características comunes observables en un determinado lugar y en momento propicio; la población en la presente investigación serían la región de los Montes de María y el municipio del Carmen de Bolívar.

Mientras que la muestra como es aquel subconjunto fielmente representativo de la población, en la presente investigación vendrían siendo las víctimas del conflicto armado según la ley 1448 del 2011.

Víctimas

Son aquellos que individual o colectivamente, sufrieron daños como consecuencia de las acciones u omisiones presentadas en el marco del conflicto armado. Según el artículo 3 de la ley 1448; se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado.

En el presente estudio de caso, la víctima susceptible de la investigación se encuentra en la Región de los Montes de María, en el Municipio del Carmen de Bolívar, para efectos de la relación espacial de la que se esbozó anteriormente y con la que se realizó una interacción sujeta en una entrevista sujeta a la efectividad, eficiencia y garantías con las que se surtieron o no la restitución de sus tierras, esto para que se dieran los resultados que se expondrán en el análisis de resultados.

Sin embargo, a pesar de la condición de vulnerabilidad “especial” a la cual han sido colocadas las víctimas del conflicto, su aparición como eje central de las políticas públicas por parte del Estado colombiano es una cuestión reciente del siglo actual, fueron tomando presión debido a los grandes movimientos de víctimas del siglo XX y el actual, que han dado paso a esta ley de reparación y resarcimiento de perjuicios injustos. Es decir, las víctimas de manera paciente han sido tomadas en cuenta para las razones públicas de perjuicios, asumiendo que estas son parte de la población y les pertenecen ciertos derechos fundamentales, encontrándose en acuerdos ratificados por el Estado Colombiano frente a organizaciones internacionales y gubernamentales.

Funcionarios de la Unidad de restitución de tierras

Para lograr la restitución jurídica y material de las tierras despojadas, la ley crea la unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la cual es una entidad adscrita al ministerio de agricultura de Colombia. De aquí, que para el éxito del presente estudio de caso se requirió de la interacción mermada de los funcionarios encargados del trámite administrativo de la restitución de tierras en las dependencias ubicadas en la región de los Montes de María.

La unidad de Restitución de Tierras se encarga de aquellos procesos de focalización de las tierras abandonadas y despojadas, para entregarlas a las víctimas del conflicto armado que fueron desplazadas con ocasión del

conflicto armado. Esto se lleva a cabo mediante un estudio exhaustivo de las parcelas con estas descripciones y que se acople a los intereses de la víctima.

Concluyendo de esta manera que todas las entidades adscritas a la ley 1448 del 2011 y las no inscritas, conforman esa coherencia armónica para que los derechos de las víctimas sean restituidos de manera eficiente y efectiva. Por estos motivos, se recurrió a los funcionarios en mención para arrojar resultados a la justificación de la pregunta problema planteada anteriormente y así proceder a realizar los análisis y las conclusiones al mismo.

CAPITULO V: PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS

En el siguiente acápite se presentarán las unidades de análisis, categorías, temas y patrones, con las descripciones detalladas y significados que arrojaron los datos en el trabajo de campo previamente realizado. Resultó necesario hacer énfasis en la ley 1448 del 2011 como un intento por parte del Gobierno Nacional para dar atención a la crítica situación de ineficacia de las medidas de asistencia a las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado, analizando los procesos de Restitución de Tierras en realizados en el Municipio del Carmen de Bolívar en la Región de los Montes de María, zona que fue afectada por las disputas del dominio del territorio entre el Estado y los Grupos al margen de la ley (Guerrillas y Paramilitares).

La atención y seguimiento a las víctimas del conflicto armado se ha llevado en distintos períodos en toda la historia de esta lucha interna, prosperando con el acuerdo suscrito en el año 2012 entre el gobierno y el Grupo Guerrillero FARC, el cual operaba en toda la zona territorial del Estado. En este orden de ideas, las víctimas del conflicto armado antes de la ley 1448 del 2011, no tenían un medio de garantías en el post conflicto, hasta que llegó esta ley en mención. Sin embargo, este proceso de Restitución en relación con las víctimas tiene sus antecedentes en la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004.

La sentencia en mención, en palabras textuales resalta a la víctima en el marco del conflicto y post conflicto, bajo una condición de vulnerabilidad, requiriendo así mayor atención a este colectivo de personas. A partir de esta connotación, la corte se refiere a las víctimas del conflicto de la siguiente manera:

“...extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad -, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas.

Es por ello que las asociaciones de desplazados, que se han conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus derechos, pueden actuar como agentes oficiosos de los desplazados. Tales organizaciones estarán legitimadas para presentar acciones de tutela a favor de sus miembros bajo las siguientes condiciones: 1) que se haga a través de su representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela; 2) que se individualice, mediante una lista o un escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela; y 3) que no se deduzca de los elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre...” (AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA, 2004)-CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA.

Esta honorable corporación mediante la sentencia, declaró que las víctimas deben ser tenidas en cuenta en todas las guerras libradas en las comunidades, sobre todo en el período de la post guerra por el mero hecho de sufrir el agravio y consecuencias que acarrea una guerra civil, ya sea internamente -como en el presente caso- o externamente contra otros Estados. Es conveniente de esta manera alegar que el Estado Social de Derecho debe practicar políticas públicas encaminadas a satisfacer los delirios y afectaciones a los bienes jurídicos que históricamente se vieron vulnerados por ocasión del conflicto armado interno durante 50 años. En ello llega a surgir la ley 1448 del 2011, para restaurar y atender a las víctimas de este conflicto armado, en la etapa del post conflicto. Sin embargo, en el presente análisis de resultados se estudiará por qué los procesos de restitución de tierras despojadas y demás medidas de reparación integral se realizaron en esta etapa y no previamente.

No es menos cierto que, en este apartado se realizará un mayor énfasis en la eficacia y eficiencia en los procesos de restitución de tierras en el conflicto Armado. Para ello, en el estudio de Caso se realizó un total de 8 entrevistas a personajes de la población determinada en la presente investigación. De estas personas 5 afirmaron ser víctimas calificadas para evaluarse sus respuestas en este campo de estudio, mientras las otras 3 personas se encontraban en calidad de funcionarios del Estado. Entre ellos, un asesor jurídico de la Unidad de Tierras en el Municipio del Carmen de Bolívar, una

directora de la mesa de diálogos entre las víctimas y la entidad territorial y otra, encargada del asesoramiento en Asuntos de Justicia y paz en la Procuraduría General de la Nación del Municipio del Carmen de Bolívar. Las entrevistas a estas personas fueron realizadas voluntariamente, sin ningún tipo de promesa remuneratoria o compensación alguna.

Los diálogos concertados a las víctimas fueron realizados en sus domicilios actuales, ubicados en el municipio Carmen de Bolívar, de igual manera, los funcionarios sujetos a entrevistar se les practicó la actividad en su oficina de trabajo habitual en las jornadas de trabajo, sin necesidad de exceder o intervenir con su labor diaria como servidores públicos, entre el 25 de noviembre del 2019 al 17 de enero del 2020. La entrevista utilizada fue de tipo metódica- estructurada, espontánea, de carácter abierto, sumarial y discrecional, como se logra asegurar en los acápites de Anexos, no consta de máximo 10 preguntas y mínimamente 3, dependiendo de la disposición temporal y subjetiva del entrevistado.

En el formato de la entrevista se dieron a conocer los ejes focales de los cuales se habló previamente en el marco de referencia, apuntando las características propias de los individuos o sujetos calificados a entrevistar. Por ello, en ningún asidero de los puntos se perdió el sentido de las temáticas de eficacia y eficiencia, además de la manera de cómo el Estado colombiano repara a las víctimas del conflicto armado en la población específica.

De los objetivos de la actividad cognitiva, se pretendieron resaltar los previos objetivos del estudio de caso:

- Análisis de cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de manera material a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María.
- Análisis de cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de las víctimas del conflicto armado en los Montes de María en el menor tiempo posible.
- Análisis de cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de las víctimas del conflicto armado en los Montes de María de manera individual y colectiva.

Del propósito de estas entrevistas realizadas, se logró evidenciar síntomas de los cuales padece la ley 1448 del 2011 durante su período de vigencia que se suscitó la presente investigación. En primera medida se pudo percibir la colaboración por parte de los funcionarios de las distintas entidades públicas de los cuales se manejó la información respecto al proceso de restitución de tierras, y son garantes encargados de tutelar los derechos fundamentales. Por su lado se aseguró que se avalaban los formalismos que prevé la ley 1448 del 2011 para las víctimas del conflicto armado, actividad que más adelante será detallada en el contexto.

Las preguntas realizadas partieron de la hipótesis de la presente investigación: “El Estado colombiano por medio de la ley 1448 de 2011 repara integralmente a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María a través de la restitución, como medida principal, de manera individual, colectiva, material, moral y simbólica”. De conformidad con el artículo 25 de la ley 1448 del 2011 que dicta las medidas de reparación integral, una de ellas es la restitución de las tierras despojadas con ocasión del conflicto armado.

Por ende, el primer carácter en énfasis es que el proceso estudiado se encuentra adscrito en la Justicia Transicional, revestido de atribuciones transitorias y destinado a regularse ante un sujeto cualificado: La víctima con ocasión del conflicto armado (Art. 3 de la ley 1448 del 2011). Consecuentemente, la segunda proyección que arrojan los datos es que las tierras en litigio de restitución deben ser otorgadas a estas víctimas en justo título y paz y salvo en obligaciones, las cuales fueron despojadas con ocasión del conflicto armado.

En esta medida, para la presentación de estos resultados se tuvo en cuenta el nivel de analfabetismo de las víctimas del conflicto armado que estuvieron aptas para esta entrevista, lo que implica que la entrevista para las víctimas se fue desarrollando al comienzo de una manera simple e imprevista. Donde las posibilidades deben estudiarse desde la “víctima” y sin dejar de lado, que el propósito fundamental del

proceso de restitución de tierras es “restaurar” la situación menoscabo que sufrió el bien denominado “derecho de propiedad” ante la tergiversación del conflicto armado interno. Las respuestas de las víctimas se ofrecieron de manera estable, sin embargo, estas viven inmiscuidas en el paradigma común de que “El Estado no solucionará nada”, “El Estado no protege”, “El Estado no tutela”, ETC.

Ante este paradigma negativo, se requiere que el Estado mediante sus entidades gubernamentales, tome medidas claras y certeras. Debido a que en la mayoría de casos, las víctimas se abstienen de participar en estos procesos de restitución y demás asistencias, prefiriendo estar al margen de las acciones que toma el Estado frente a la realidad social de su población.

Por otro lado, el investigador percibió indisposición por parte de los sujetos al abrir un espacio de dialogo previo sobre el conflicto armado y los procesos de restitución de tierras que se adelantaron a lo largo de estos años. Algunas entrevistas resultaron frustradas por la abstención para desahogarse ante las preguntas que se realizaban, lo que condujo a deducir que las víctimas específicas tuvieron un conflicto de interés de carácter emocional e impedimento moral para continuar. Es decir, que cada víctima del conflicto armado que se encontraba adelantando un proceso de restitución de tierras, fue desplazada en algún momento de este y al dialogar sobre ello, reviviría en su mente estos problemas psicológicos.

Las víctimas tienden a ser sensibles al momento de recorrer acontecimientos que fueron base para el cambio social en su vida, además de los factores sociales, culturales y económicos que drásticamente incluyeron entre las repercusiones. Se observa entonces dos problemas principales ante esta realidad: I) La precariedad de la capacidad institucional para implementar la política pública de respaldo a las víctimas y II) La asignación suficiente de recursos presupuestales destinados a implementar las medidas de asistencia y reparación a las víctimas del conflicto Armado.

En este punto, se recuerda el nivel de responsabilidad de un Estado para con sus habitantes en el campo de la seguridad jurídica, la cual es principal característica del Estado Social de Derecho cobijado en el constituyente de 1991. Por ende, el Estado no puede librarse de la responsabilidad de las omisiones de protección a sus habitantes, ya que las políticas públicas de “seguridad” tienen por finalidad prevenir, controlar y gestionar. Mientras tanto, la vida de las víctimas sigue desmejorando conforme pasan los años teniendo presente su dignidad, empleo y condiciones de subsistencia.

La seguridad jurídica de las futuras generaciones de la población se encuentra garantizada formalmente bajo el fenómeno de “La No Repetición” de un conflicto armado en los victimarios; compromiso que se encuentra cuestionado debido a la insurgencia de los bandos. Por esto no es justificado que, en cada conflicto armado afrontado en un Estado, se debe premiar con Amnistías e indultos, debido a que se vería frustrado el aparato gubernamental y se perdería el respeto por la convivencia en un Estado. Implicando que el presente estudio de caso no valiera la realidad social por cuanto, seguirían existiendo más conflictos armados.

Las entrevistas realizadas estudiaron el punto crítico- constructivo de la ley 1448 del 2011, y dieron resultados concluyentes para la presente investigación como lo es el acompañamiento de los funcionarios de la oficina de restitución de tierras en el marco del proceso de restitución de predios, parcelas, viviendas y demás susceptibles del despojo con ocasión del conflicto armado.

Sin embargo, se encontraron hallazgos fundamentales en las temáticas tratadas como lo es por ejemplo, la coherencia armónica entre las entidades públicas para el cumplimiento de los fines de la ley 1448 del 2011 y el proceso de restitución de tierras en el goce efectivo de sus derechos, honra y guarda de sus bienes; además de la actividad mediata y el poco control riguroso de los procesos de restitución de tierras, el acompañamiento a los mismos y sobre todo, los vacíos legales que dejó esta normatividad transicional. De tal manera que la ley 1448 del 2011 se encuentra

cuestionada al punto de necesitar complementariedades con ayuda de otras fuentes del derecho.

Los resultados de estos análisis serán colocados bajo los parámetros conceptuales, exponiendo los interrogantes planteados a los sujetos entrevistados y sobre todo las críticas que pueden darse hasta la vigencia de la ley de víctimas y restitución de tierras en esta etapa del post conflicto. La manera con la que se cuestionaron los interrogantes se expone evaluando en primer lugar el carácter temporal de normatividad relacionadas a la eficiencia y eficacia; en segundo lugar, el carácter espacial respecto a la Micro- focalización y Macro-focalización concentradas en las medidas individuales y colectivas de los procesos de restitución de tierras al fulgor de la ley 1448 del 2011.

5.1. Eficiencia

La eficiencia es aquella capacidad de hacer las cosas bien, dicho de igual manera que “completar”, “acción”, “Fuerza”, “Producción”. Es decir que se garantiza el producto final de cualquier tarea o propósito.

En un primer momento, se cuestionó el período de tiempo que tardó la víctima en ser restituida su parcela de tierra, vivienda o predio, y si en el mismo se obtuvo el resultado esperado en el proceso de restitución. Asumiendo que el Estado colombiano tiene la capacidad suficiente para garantizar la restauración de los bienes tal como lo asegura la normatividad de la ley 1448 del 2011, los resultados hipotéticos podrían salir positivos y favorables para las víctimas del conflicto armado bajo la responsabilidad formal del Estado.

La eficiencia es característica de lograr el efecto deseado en el menor tiempo posible, y con el mínimo de recursos para ello. Quiere decir que la eficiencia va de la mano con la economía procesal por cuanto las restituciones de las tierras en el marco de la

justicia transicional son prioritarias para restituir la condición de existencia digna de las víctimas del conflicto armado desplazadas con ocasión del mismo.

Luego entonces, con estos interrogantes se buscaba que la víctima que exponga la vivencia del proceso de restitución de tierras en carne propia, en el carácter temporal y compruebe la veracidad de las medidas de acompañamiento y asesoramiento de la ley 1448 de 2011. En cambio, por parte de los funcionarios, los interrogantes tenían como finalidad comprobar la capacidad y disposición con que cuentan para llevar a cabo el trámite del proceso de restitución de tierras tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial. Eventualmente, en el análisis de estos resultados existieron incongruencias de las cuales se fundamentarán el siguiente acápite.

5.1.1. Perspectiva de la Víctima

Al preguntársele a las víctimas en la entrevista respecto a su conformismo con las tierras, predios, parcelas o indemnización que recibieron, sólo a una de ellas fue quien recibió mediante el proceso de restitución, su parcela de tierra de la que fue despojada con ocasión del conflicto armado, ella asegura:

“...Efectivamente la restitución como tal fue del mismo predio de la misma tierra que nosotros teníamos y por la cual desde inicio del proceso fue por la que luchamos. Entonces sí, hay satisfacción porque exactamente fue la misma cantidad de tierra que nosotros teníamos, todo conforme allí lo teníamos establecido...” (VER ANEXO ENTREVISTA. VICTIMA No. 5)

Mientras tanto que de las otras cuatro (4) víctimas del conflicto armado que solicitaron la restitución de su tierra, sólo a una de ellas fue indemnizada mediante ayuda humanitaria no superior a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, así lo aseguró al preguntársele si le están cumpliendo con las medidas de restitución y reparación integral:

“...Lo único que me dieron fue dos ayudas humanitarias de CIENTO OCHENTA MIL PESOS CADA UNA (\$ 180.000 C/U) en dos partidas, para un total de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS APROXIMADAMENTE (\$360.000) (...)

...Me llamaron de la oficina de víctimas a informarme que me iban a dar una ayuda humanitaria, que pasase en cierto día por allá. Luego de 4 meses me dieron la otra, y ya más nunca me dieron nada...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A VICTIMA No. 1).

Ante eso las otras tres (3) víctimas del conflicto Armado se mantienen atentos a la respuesta de su solicitud. En referencia a estos testimonios, hace falta atención por parte de las instituciones especializadas en Restitución de Tierras para analizar la manera en la que cómo el Estado colombiano restituye a las víctimas del conflicto Armado, puesto que las víctimas sienten esa ausencia de seguridad y garantías que debe brindar el ente ideal. Algunas otras ya se resignaron a vivir el presente y dejar en el pasado esa tierra que les perteneció, como es el caso de esta víctima a la que aseguró:

“...Desde mi desplazamiento, no me han dado la tierra de la que me despojaron. La verdad no quiero devuelta mi tierra, eso generaría problemas. Estoy mejor así. Sin embargo, no lo niego, estoy inconforme con eso...”. (VER ANEXO. ENTREVISTA A VICTIMA No. 2).

Ante ello, se encuentra cuestionándose la falta de credibilidad del Estado y su institucionalidad para brindar las garantías que establece la ley 1448 del 2011. Hasta el punto de llegar a resignarse una persona que fue despojada de sus bienes, a vivir en el olvido, pero sobreviniendo el rencor contra la ignorancia del Gobierno ante este hecho.

Cuando se les indagó a las víctimas por el conocimiento que tienen acerca de los formalismos y garantías que brinda la ley 1448 del 2011, la víctima a la que

efectivamente se le restituyó su tierra asegura que la asesoraron externamente por otro abogado diferente de la Unidad de Restitución de Tierras en el Municipio del Carmen de Bolívar, sin embargo, sólo del trámite sumarial que ello implica, textualizado de la siguiente manera:

“... Nosotros iniciamos un proceso (De restitución). Cuando ello si buscamos el apoyo de alguien particular, pues para que nos indicara como iniciar el proceso como todo esto, pero ya después el mismo proceso se dio solo...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A VÍCTIMA No. 5).

Lo que implica que la víctima recurrió a otras instancias profesionales particulares para asesorarse de una mejor manera en este proceso de restitución de tierras. También, al asegurar que el trámite del proceso se dio solo, infiere pensar que los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras si fueron diligentes en su misión de acuerdo con la ley 1448 del 2011.

Entre tanto, Otra de las víctimas a la cual hasta el momento no ha sido restituida ni indemnizada hasta la fecha, asegura que: *“...Sí, todo me lo han explicado allá en la oficina esa, de buena fe. Pero nunca me han dado nada...”* En cambio, esta misma víctima afirma que el papeleo es muy tedioso y por supuesto: *“...Siempre que voy me dicen que regrese dentro de un mes, dos meses etc. No me han resuelto nada...”* (VER ANEXO. VÍCTIMA No. 4).

Con esto, se logra evidenciar una falta de gestión enfocada en la atención a esas víctimas y a su seguimiento. Por cuanto el ente gubernamental tiene como principal obligación en sus funciones la de garantizar la seguridad a todos los habitantes del territorio. De esta manera se tiene en cuenta esta falla para la conclusión final del presente estudio de caso. El resultado de estas preguntas arrojó unas falencias de las que anteriormente se habló, sin embargo, la materialización de la ley no es algo que aún se encuentre consumado en este período del posto conflicto, del cual es importante atender a las víctimas del conflicto interno. A continuación, se estudiará la

posición del funcionario de la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras en el Municipio del Carmen de Bolívar

5.1.2. Perspectiva del funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras

En el presente acápite, se expondrá la posición del funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras en el Municipio del Carmen de Bolívar. Para ello se evaluaron las respuestas de manera objetiva y la posición subjetiva del sujeto frente a la realidad social que vive el gobierno frente a las víctimas y el proceso de Restitución de Tierras.

Tal como lo asegura Monclou Chaparro, es innegable el esfuerzo que se está realizando que la ley 1448 del 2011 cumpla de manera eficiente los objetivos que se ha propuesto, pero una política pública de tal magnitud no puede ser juzgada a priori en el lapso de vigencia inferior a 10 años, esto lo aseguran la mayoría de los funcionarios que sirven bajo el mandato legal y las pautas que ordena la ley de víctimas (Chaparro, 2012).

Al preguntarle al funcionario del trámite que debe realizar la víctima para lo pertinente a la restitución de su tierra, un segmento de su respuesta fue la siguiente:

“...Deben realizar una solicitud de restitución de Tierras ante las diferentes direcciones territoriales que se encuentran en todo el país. Los usuarios se acercan a la Unidad de Restitución de Tierras a manifestar a una persona de atención al ciudadano, cuáles fueron los hechos víctimizantes que generaron su desplazamiento y abandono de los predios. Es importante resaltar que quienes pueden presentar las solicitudes de restitución de tierras deben de tener una relación con el predio a través de tres figuras: -De la propiedad -De la posesión-O de la Ocupación (...) No existen unos requisitos de las solicitudes de presentación para iniciar el trámite administrativo de restitución de tierras o ningún tipo de documentación. Básicamente lo que pide la Unidad de Restitución de Tierras es que el Usuario o el Solicitante pueda indicar el predio con su

matrícula, Número Catastral, con el nombre del Predio y de su ubicación por Municipio, Corregimiento, Vereda, y Departamento que en este caso sería Bolívar.

Una vez se recibe la solicitud de Restitución, la unidad cuenta con un ingeniero catastral quien se especializa o Ubica el polígono aproximado del predio que la persona viene a reclamar en Restitución...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

A partir de esta petición, comienza el trámite administrativo de la entidad y la gestión para buscar Restituírle la tierra al solicitante. Cabe resaltar que este caso de solicitudes es asignado a un abogado, previo estudio para el acompañamiento jurídico tanto en la etapa administrativa que se adelanta en la entidad y la etapa judicial, de la que se hablará en el acápite de hallazgos.

Por otro lado, al preguntarle sobre las condiciones para que la víctima del conflicto armado sea restituida en su tierra, predio o equivalente; el funcionario encargado responde que la entidad de Restitución de Tierras no es como tal quien restituye las tierras, su parte administrativa en la gestión termina al registrar el predio, parcela o tierra en el Registro de Tierras que maneja la entidad. De allí, empieza la etapa judicial, entre la cual se toma la decisión si es restituido o no el derecho de propiedad sobre el bien por parte del solicitante. El funcionario asegura:

“...Somos un medio entre el Usuario, víctima- campesino con los Juzgados y los Tribunales Especializados, creados específicamente para este tipo de procesos...” (VER ANEXO ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

Es menester en este punto respecto a la eficiencia con que se realiza este procedimiento, asegura que se lleva con las formalidades establecidas en la ley 1448 del 2011 y el mínimo de trámites sumariales.

Referente al concepto material que tienen el funcionario sobre “restitución efectiva de la tierra”, afirmó lo siguiente:

“... Nosotros entendemos por Restitución Efectiva, no sólo hacer la entrega del Predio una vez que se profiere la Sentencia de entrega por parte del Tribunal, sino que ese beneficiario de restitución de esa sentencia goce de los beneficios como por ejemplo de un proyecto productivo que se administra a través de un dinero o un recurso que se le entrega al solicitante para que esa persona pueda levantar (EN PALABRAS TEXTUALES) ese predio que en algún momento tuvo que abandonar o salir de él...” (VER ANEXO ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

Sigue comentando lo siguiente:

“...Hay un acompañamiento técnico, por parte de los profesionales que implementan los proyectos productivos, de igual manera, se les brinda un apoyo que en este caso está encargado el MINISTERIO DE AGRICULTURA frente a una conclusión de vivienda rural que se hace en el predio que se entrega en restitución. Entonces existen una serie de beneficios como el acceso al SENA, ICETEX, educativos, que no solamente el solicitante sino el núcleo familiar pueda acceder, a cursos de capacitación sobre el campo o sobre el tema que ellos consideren importantes...La idea de esto es que las personas que fueron desplazadas de los predios, se sientan en total y plenamente satisfechos y puedan gozar de su tierra, levantarla de nuevo porque es el objetivo de todo esto, por parte del Estado Colombiano...”

Se infiere que la restitución de la tierra, implica la aplicación de otras medidas de asistencia que complementadas buscan reforzar la reparación integral para que las víctimas se sientan satisfechas del proceso y trámite del que fueron parte. Por ello, se requiere que, para gozar de su tierra, deben realizar proyectos productivos de los que habla el funcionario como medida de asistencia para compeler y coordinar todo este articulado de problemas que ocasionó el conflicto armado.

De esta manera, el funcionario concluye que la institucionalidad de la restitución de tierras está en constante avance para el cumplimiento de su deber como servidores públicos de la patria. Sin embargo, las víctimas deben participar activamente de la búsqueda de las soluciones y actuar de buena fe al recurrir a estas instancias a alegar el despojo de su tierra y la solicitud de restitución de la misma.

5.1.3. Perspectiva de la Procuraduría Delegada

En este apartado se dará conocer la posición de la funcionaria que concedió la entrevista en la Procuraduría delegada del Municipio del Carmen de Bolívar en la Región de los Montes de María. Previamente se asegura que la Procuraduría es un órgano de acompañamiento en la promoción del acceso a las víctimas del conflicto armado al reconocimiento de sus derechos y reconocimientos, existen en este ramo unos “Procuradores delegados para la restitución de tierras” los cuales se encargan de velar por los derechos de las víctimas y la dignidad de un proceso tanto en su etapa administrativa como judicial, bajo la connotación de *norma pro-víctima* y por supuesto, estudiar su alcance en un proceso de restitución de Tierras.

Las Procuradurías repartidas a lo largo del territorio tienen estas habilidades de sostenimiento del marco de la justicia transicional a lo largo del posconflicto. Por ello, el funcionario entrevistado en el presente Estudio de Caso es una Asesora de la procuraduría delegada para el seguimiento al acuerdo de Paz, la cual hace un acompañamiento preventivo y control de la Gestión sobre la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto y la implementación del Acuerdo Final, siendo así, se procederá a la socialización de la entrevista con esta funcionaria pública de la Procuraduría.

En este orden de ideas, para abrirse paso en el tema de la eficiencia de la ley 1448 del 2011, se le indagó sobre los planes que tuvo el gobierno con esta ley de víctimas en el marco de la reconciliación y la paz, ante esto su respuesta fue:

“... Buscaba más que todo generar estos procesos que fueron a causa del despojo de grandes empresas y poder restituir a campesinos, al marco del conflicto armado, de estos grupos guerrilleros o paramilitares... Para el caso de Montes de María, sabes que funcionó el bloque HEROES. Y Básicamente lo que se buscaba con el proceso de restitución era eso, restituir todos esos bienes de los que fueron despojados por ocasión del conflicto armado. Víctimas que tuvieron que desplazarse forzosamente y que habían abandonado sus territorios, ese era exactamente en un principio el objetivo que tenía el gobierno Nacional para poder garantizar el goce efectivo de derechos partiendo de que la tierra es un componente fundamental para poder restituir los derechos de las víctimas de la violencia...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A LA FUNCIONARIA DE LA PROCURADURÍA DELEGADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

Es clara la intención del gobierno y las entidades del Estado que buscaron con la ley 1448 del 2011, su implementación debe entenderse como un todo coherente entre cada una de sus instituciones para regular el tema del conflicto armado y las medidas de restitución de tierras que a esto conlleva. Aunado a ello, se le indagó a la entrevistada respecto de la efectividad de toda esta implementación de la ley de víctimas y restitución de Tierras, debido a que los procesos de Restitución se encuentran cuestionados y criticados negativamente por parte de los habitantes del Municipio, a lo que respondió:

“...Básicamente era porque se pensaba en un principio que la ley de restitución iba a poder generar fallos o sentencias en contra de estos victimarios o en contra de empresas que habían actuado a favor de ello para poder hacer digamos todo un proceso, pues de la restitución de la tierra. Pero, digamos que lo que ha sucedido son enfrentamientos entre campesinos víctimas del conflicto armado, que no ha sido grandes latifundios sino pequeñas parcelas de tierras donde se agruparon varios campesinos, de pequeños propietarios y eso ha ocasionado una conflictividad social (...)

Entonces pensaría probablemente que ha sido por estos enfrentamientos generados por víctimas que con mucho esfuerzo han creado, han hecho mejoras y han

intervenido en estas tierras...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A LA FUNCIONARIA DE LA PROCURADURÍA DELEGADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

La afirmación anterior, deja abierta la posibilidad de pensar que la ley de víctimas tuvo un efecto negativo en su ejecutoriedad y materialización, por cuanto no previó los enfrentamientos en los estrados judiciales que dos campesinos víctimas iban a tener. Bien se entiende que las parcelas y predios despojados los tenían los paramilitares y guerrilleros en su dominio, existieron otro grupo de campesinos y personas que no participaron en el despojo y que inocentemente ocuparon esos predios. Es decir, que la ley y el proceso de Restitución fueron dirigidos en primer momento a favor de una víctima contra un victimario que tenía su predio, sin embargo, al materializarse esta regulación encontraron variedad de resultados con sujetos denominados Ocupantes y Opositores de buena fe en el proceso de restitución de Tierras, tema que se hablará en el acápite de hallazgos.

Posteriormente, para profundizar un poco en la temática de las garantías y asistencia en los procesos de Restitución de tierras, se indagó respecto a las medidas que implica la restitución de tierras en la instancia judicial y su respuesta fue:

“... La restitución además de ser buscada para los predios también buscamos que sea por parte del trabajo, al tema de generación de ingresos. Más, sin embargo, lastimosamente en la política pública, existe un vacío en generación de ingresos, incluso a pesar de que se entregan proyectos de ganadería, proyectos productivos en agropecuaria, agrícola, en nuestro territorio hay una gran deficiencia en la reproducción de la tierra y también en los mecanismos de comercialización. Esto hace que una vez se implemente algún proyecto productivo, por el tema de las sequías, se vean afectados estos proyectos y no puedan tener la superación de la vulnerabilidad que es lo que fundamentalmente busca la intervención del Estado, poder acompañar en esta superación de la vulnerabilidad y restablecer los derechos que fueron afectados por el conflicto armado...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A LA FUNCIONARIA DE LA PROCURADURÍA DELEGADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

Por ello, inmediatamente que el juez o tribunal Especializado en Restitución de Tierras ordena la restitución del predio, junto a otras ordenes imparte cumplimiento por parte de las entidades estatales de brindarle proyectos de mejoramiento del predio, balance para unos mayores ingresos y recomendaciones en la productividad. Esto quiere decir que no solamente es la restitución del predio, bien o tierra lo que se busca, sino su implementación completa y asistencia para las condiciones dignas de subsistencia. Así no solo las víctimas s restituidas, recuperan su producción, sino que mejora la economía y actividad agrícola del Estado colombiano.

Además de esto, la funcionaria asegura que se necesita por parte del Estado una mejor intervención armónica de las instituciones para gestionar la implementación de la ley 1448 del 2011:

“... Entonces, si bien está contemplado como una medida de restitución, digamos que se requiere que entidades ayuden, tales como el ministerio del trabajo, promoción social, etc, puedan generar un proceso de articulación para que finalmente haya un acompañamiento y que las víctimas puedan acceder a un empleo o generar sus propios ingresos a partir de lo que uno sabe hacer, de su vocación productiva...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A LA FUNCIONARIA DE LA PROCURADURÍA DELEGADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

De esta manera se concluye la caterva de la entrevista a la funcionaria de la Procuraduría delegada en el tema de la eficiencia de los procesos de Restitución de Tierras en el Municipio del Carmen de Bolívar, afirmando que los procesos en cada una de sus particularidades deben ser estudiados e intervenidos para brindar a las víctimas del conflicto armado una reparación y restitución garantizando el mínimo de condiciones en el desarrollo de un Estado Social de Derecho. A continuación, se describirá la posición de la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar en relación en una entrevista realizada con el tema de la eficiencia en los procesos de restitución de tierras y lo que buscó el Gobierno Nacional con el mismo.

5.1.4. Perspectiva de la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar

Saber la posición de la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar es de vital importancia para el avance de la investigación, puesto que es la autoridad administrativa encargada de la vigilancia y cuidado de las necesidades de la población. Por ello, la entrevista que se menciona a continuación fue realizada a la Coordinadora del centro de convivencia y Atención a víctimas del conflicto Armado de la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar en la región de los Montes de María, órgano adscrito a la alcaldía del municipio encargado de los temas de justicia y paz, y por supuesto atención a las víctimas del conflicto Armado.

Al comenzar con la entrevista, se le realizó una pregunta a su criterio como servidora pública y opinión profesional, lo que esperó lograr el gobierno Nacional con la ley 1448 del 2011 en este marco de posconflicto y la realidad social que se refleja en esta región. A lo cual respondió que esta región fue uno de los lugares donde más despojos ocurrieron con ocasión del conflicto Armado según las cifras que arroja el Registro Único de Víctimas, recalca que el panorama de los derechos Humanos es muy grave en esta zona, sin embargo, que, a pesar de las dificultades, tienen sus avances. Además, se dirigió puntualmente respecto de los objetivos de la siguiente manera:

“... Entre los objetivos de la ley de restitución de tierras o ley 1448 del 2011, pues el gobierno buscaba básicamente generar un marco de Justicia Transicional y que en este marco de justicia Transicional, pues se diera en un proceso de Restitución garantías de Restitución a través de procesos de Reparación y en ese sentido se pueda generar todo el marco jurídico y administrativo para que las víctimas del conflicto Armado pudieran tener las garantías de procesos de Verdad, Justicia, de que se les pudiera reparar de manera Integral y en el Caso de las medidas de Restitución de tierras, pues, se busca un goce efectivo de los derechos humanos, básicamente la devolución de la tierra como un patrimonio de esa persona que fue desplazada o despojada en su momento en el marco del conflicto...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIA DE LA ALCALDÍA DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

Según ella, la administración Estatal no solo busca una mera restitución de la tierra despojada o indemnización a la víctima, sino que también pretende una subsistencia de la víctima y su familia en condiciones dignas y que sus ingresos mejoren con relación a la productividad de su predio. En base en esto, se logra destacar la importancia de la cosmovisión que comparten los funcionarios al implementar la ley 1448 del 2011 a favor de un posconflicto duradero y restaurativo, en el que se pueda apreciar la calidad de vida olvidando el rencor y dando paso a una sociedad donde exista el perdón y reconciliación.

Por otro lado, se le expuso que los procesos de restitución de tierras se han cuestionado a lo largo de todo el municipio por inconformidades ante los vacíos legales de la ley 1448 del 2011 y la insatisfacción por el manejo de los tiempos ante la restitución efectiva de la tierra, a lo que ella respondió:

“...Así como tiene muchos avances, también tiene muchas dificultades y retos. Pienso que las dificultades que se presentan son de distinta índole, una de tipo administrativo y otras jurídicas (...)

(..) Digamos que entre los administrativos podemos anotar que está el tema de relación, que existe exceso de procedimientos y trámites y que muchas veces las víctimas de todas las áreas rurales tienen desconocimiento de esos procedimientos, entonces falta mayor socialización de las rutas de los derechos y población de las víctimas, y todo lo que tiene que ver con el proceso de reparación en el marco de la misma ley, de igual manera, pues hay deficiencia en la financiación de la ley. ¿Que obstaculiza esto? Bueno, no permite que de manera gradual o progresiva se dé cumplimiento a las sentencias de restitución de tierras o a los fallos judiciales o a las órdenes que se emiten en esas sentencias. Entonces muchas veces las instituciones demoran para darle cumplimiento a los fallos de sentencias, uno de los principales fallos es que se le restituya a la víctima su tierra, que devuelvan en mejores condiciones para que la víctima pueda nuevamente generar su proceso de proyecto de vida, tener las garantías de un retorno digno...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIA DE LA ALCALDÍA DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

El principal problema que expone la entrevistada es que falta mayor coordinación entre las instituciones y la víctima para dar resultados mucho más eficientes. Resalta que la víctima debe también obrar de buena fe para acatar los fallos establecidos, sin embargo, al restituírsele su tierra a la víctima, se le debe previamente realizar un estudio de condiciones dignas y mejoras a su parcela de tierra o predio, un trámite que no siempre es ágil, pero tiene sus garantías.

Otro de los problemas que expone la funcionaria es la falta de recursos o retardo para el desembolso de estos proyectos, los cuales en el presupuesto se destinan a otros propósitos y dejan de lado el proceso de Restitución a las víctimas del conflicto armado.

“...como hay deficiencia en la financiación de la ley de víctimas entonces, los proyectos productivos, la misma compra de tierra, la construcción de vivienda digna y los planes complementarios para la víctima, para que tenga esa vida y calidad digna se ve obstaculizada porque muchas veces esos recursos no son destinados o no se generan a tiempo los procedimientos, entonces eso también genera desconfianza, falta de credibilidad de las víctimas a la institucionalidad y pierden también como que esa esperanza de que sean restituidas...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIA DE LA ALCALDÍA DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

Pasando al plano de la reparación integral, esta trae como una de sus medidas la restitución de Tierras, en el caso de que hubiese existido despojo de un predio injustificadamente. En este contexto se le preguntó a la funcionaria de la alcaldía sobre aquellas medidas que conlleva la Restitución efectiva de la Tierra a una víctima, a lo que respondió:

“... Sí, en el marco del post conflicto existen otras medidas como lo es el proceso de rehabilitación e indemnización, de garantías de no repetición, que tenga conocimiento la víctima de lo que es la verdad, lo que es la justicia. Entonces, este proceso de restitución efectivamente tiene también un proceso de acompañamiento desde el

Estado...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIA DE LA ALCALDÍA DEL CARMEN DE BOLÍVAR).

Además de ello, resalta que los abogados de las oficinas de Restitución de Tierras brindan un acompañamiento eficiente a las víctimas del conflicto armado, pero que ciertas veces, cuando existen opositores, tienen abogados especializados en el tema, y por ello, el proceso se vuelve cada vez más complejo y requiere una mayor atención por parte de la oficina de Restitución, tema que se hablará a continuación en los hallazgos.

5.1.5. Hallazgos

En el campo materia de la ley 1448 del 2011, la eficiencia va dirigida a los propósitos de dignidad, justicia y reconciliación de las víctimas del conflicto armado. Lo cual se infiere textualmente en el artículo 9 de la mencionada ley que afirma:

“ARTÍCULO 9. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS TRANSICIONALES. El estado reconoce que todo individuo que sea considerado víctima en los términos de la presente ley, tiene derecho a la verdad, justicia, reparación y a que las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente ley (Contempla el significado de víctima) no se vuelva a repetir, con independencia de quien sea responsable de los delitos.

*Las medidas de atención, asistencia y reparación adoptadas por el Estado, tendrán la **finalidad de contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y, en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les hayan sido vulnerados**. Estas medidas se entenderán como herramientas transicionales para responder y superar las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley...”.* (Resaltado fuera del texto).

Lo que quiere decir que las víctimas del conflicto armado deben ser necesariamente reparadas y resarcidas en sus prioridades, debido a que los organismos

internacionales se mantienen vigilando al Estado Colombiano para que asuma sus funciones como tal. Sin embargo, a pesar de obtener estos respaldos, la ley 1448 del 2011 no cumplió con los estándares de calidad que ameritaba la situación por dos razones:

La primera de ellas es la discriminación temporal que realiza la ley 1448 del 2011. Asumiendo que el conflicto armado inició en el año 1967, las víctimas son reconocidas por esta ley a partir del año 1985 y para pertenecer a un proceso de restitución de tierras, deben de ser a quienes a partir del 10 de enero de 1991 perdieron los terrenos que poseían o explotaban como consecuencia de hechos violentos del conflicto armado.

La segunda de ellas consiste en un hallazgo no regulado por la ley 1448 del 2011 de carácter espacial, el cual actualmente se encuentra regulado por la jurisprudencia Constitucional: Los segundos ocupantes. Estos son denominados como *buena o mala fe*, caracterizados además por ser víctimas indirectas del conflicto armado. Esto es un vacío normativo que dejó la ley de víctimas y que en virtud del artículo 230 de la constitución Política de Colombia, procedió a normar con las pautas generales. La sentencia de la Corte Constitucional C-330 del 2016 bajo las directrices de la Magistrada MARÍA VICTORIA CALLE CORREA realiza una evaluación sucinta respecto a estos segundos ocupantes y su caracterización de “opositores” en el proceso de restitución de tierras, en palabras textuales refiere el criterio de buena fe de la siguiente manera:

“...Criterio de buena fe “exenta de culpa” debe ser valorado por los jueces frente a segundos ocupantes de predios objeto de restitución que demuestren condición de vulnerabilidad y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo...”
(Resaltado fuera del texto).

La razón de este hallazgo es de mucha importancia debido a que en el proceso de restitución que se realiza a una víctima respecto de una parcela de tierra o un predio,

si esta contiene un opositor como tal, entra en contienda a decidir el tribunal especializado en los procesos de restitución de tierras del departamento, en el caso de esta investigación es el tribunal especializado en ello de la ciudad de Cartagena-Bolívar.

Es menester, antes de continuar con este análisis de resultados, realizar una breve explicación respecto a los procesos de restitución de tierras en su etapa administrativa y judicial.

El proceso de restitución de tierras: Función de la Unidad de Restitución de Tierras

Según los funcionarios de la Entidad de la Unidad de Restitución de Tierras, la focalización tiene dos momentos en virtud de los Decretos 4829 de 2011 y Decreto 599 del 2012. El primero de estos se llama Macrofocalización que hace referencia a aquellas grandes extensiones geográficas dentro del territorio Nacional (Departamentos), luego, el segundo se denomina Microfocalización, referida a extensiones menores como municipios, corregimientos, predios, parcelas y veredas. Por ello, se evidencia que la URT está organizada en 4 direcciones: La Dirección en el ámbito social, La Dirección en el Campo Jurídico de Restitución, La Dirección de Asuntos Étnicos, Dirección Catastral y del Análisis Territorial. Sus funciones se colaboran armónicamente en el Estudio minucioso ante el trámite administrativo a seguir en esta entidad. A continuación, se expone para que existe cada una de ellas;

La dirección en el ámbito Social está ocupada de obtener ese enlace entre las víctimas y las instancias que ha establecido el Gobierno Nacional para la atención y el proceso de ésta en virtud de la ley 1448 del 2011. Mientras Apoya la comunicación entre las víctimas, las organizaciones de víctimas que las representan y los diferentes sectores comunitarios, además de recolectar información en las zonas focalizadas para la determinación de derechos entre los afectados y las afectaciones causadas.

La Dirección en el Campo Jurídico de Restitución está encargada de ingresar, actualizar y elaborar el Registro de las tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente, además de realizar un seguimiento exhaustivo a los casos judiciales y a los fallos emitidos por los jueces. Su función principal es el acompañamiento y asesoramiento jurídico que realiza ésta en los procesos de restitución de tierras judiciales, mediante la cual, previamente la víctima declarada como tal, solicita la restitución de sus tierras, y obtenida mediante acto administrativo, se encarga de hacerlo ejecutarlo ante la figura judicial. Este es un organismo directivo de vital importancia en la presente investigación, por cuanto se evidenciaron falencias materiales en el acompañamiento en los procesos de restitución de tierras, datos que se reflejaron en las entrevistas obtenidas, las cuales se anexan al final de este trabajo de campo.

En el campo técnico, se encuentra la Dirección Catastral y de Análisis Territorial, encargada de apoyar a la construcción y mantenimiento del componente geográfico del sistema informático del Registro de Tierras Despojadas y forzadas al Abandono por parte de las víctimas del conflicto Armado. Se encarga del plano geográfico y topográfico de las Tierras, pero, su función primordial es la elaboración de los conceptos técnicos en los planos geográficos de las parcelas de tierras, predios, para garantizar la eficacia y la eficiencia proporcional de la restitución de las tierras a las víctimas que solicitan este derecho.

Por otro lado, y no siendo menos importante, se resalta la Dirección de Asuntos Étnicos. Siendo necesaria para el Plan integral de Reparación Administrativa a las comunidades Negras, Afrodescendientes, Palenqueras, Zambas, Mulatas, ETC. Se toma atenta nota de esta dirección en el acápite de resultados respecto a la Restitución Colectiva. Temática que se examinará más adelante.

Proceso de Restitución de Tierras: etapa administrativa

En esta etapa, la explicación que brindó el funcionario encargado del trámite jurídico de la entidad confirmó que este proceso de restitución se refiere a los despojados que formalmente buscan la restitución jurídica del predio, parcela o inmueble del cual fue obligado a abandonarlo por ocasión del conflicto armado. Sin embargo, también planteó como subsidiariedad a la restitución, un equivalente en su predio o en su lugar, una remuneración compensando el valor legalmente reconocido al mismo.

El trámite para acceder a la restitución de su tierra consiste en una solicitud que se adelanta por parte de la víctima ante la entidad, la cual debe cumplir con los requisitos expuestos en los artículos 3, 75 y 81 de la Ley 1448 del 2011, teniendo en cuenta la condición cualificada de que se reconoce como predio despojado aquel que fue luego del 1° de enero de 1985 hasta el año 2011, en la vigencia de esta ley. Luego de haberse tenido este reconocimiento, se puede aplicarse el proceso de restitución de tierras en dos etapas:

- Etapa Previa conocida como Focalización. Se analiza el predio respecto de la solicitud de la víctima, se define el área y espacio geográfico. En la que se requiere la seguridad de las víctimas que van a habitar el predio, por ello se realiza un estudio del mismo. Este es requisito previo para garantizar el éxito de la etapa administrativa.
- Etapa Administrativa, llevada a cabo por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, UAEGRTD. En la cual se presenta una solicitud ante la entidad, se procede a un análisis con el Estudio formal del caso y luego se decide mediante una Resolución la inclusión de esta en el registro de este terreno, denominada Resolución de Inscripción en el Registro de Tierras Despojadas, acompañada de otros documentos que legalmente se necesitan para adelantar el siguiente trámite judicial.

La etapa administrativa del proceso de restitución de tierras finaliza con la Resolución de Inclusión en el Registro, sin embargo, previo a esta decisión se practican las

pruebas pertinentes y se decide si se restituye o no materialmente al peticionario esta tierra.

Proceso de Restitución de Tierras: Etapa Judicial

De lo anterior, le sigue el trámite ante el juez especializado en la restitución de tierras. Este proceso se encuentra consignado desde el artículo 84 al 91 de la ley 1448 del 2011. En este período se tiene en cuenta cualquier objeción fundamentada a la restitución de esta tierra, la inscripción debe estar acompañada de otros documentos legales donde certifiquen la propiedad de la tierra en litigio, de lo contrario no dará lugar dicha objeción.

El juez revisa la solicitud, después de ello, decide si la admite o la rechaza. En caso de admitirla, se comunica con los propietarios, espera un tiempo máximo de 15 días, en caso de presentarse objeciones como es el caso de los segundos ocupantes, de este terreno, se pasa a la etapa de las pruebas para decidir sobre el predio y emitir un fallo.

Posterior a la decisión tomada favorablemente a restituir la tierra en litigio, se hace la entrega del predio. Esta etapa es denominada post Fallo, y puede practicarse además el desalojo por parte de los poseedores temporales del predio y el cumplimiento de las ordenes tomadas en el mismo, dirigido a las entidades públicas que colaboran armónicamente para forjar las garantías de las que habla la ley 1448 del 2011.

Por esta razón, mientras no exista opositor en el proceso de restitución de tierras, las solicitudes que se adelanten ante el juez de circuito especializado en restitución de tierras accederán si se cumplen los supuestos normativos. De lo contrario, si existen opositores, serán vinculados y se dará la oportunidad para que alegue su derecho de propiedad sobre el predio en litigio, luego entonces la decisión la tendrá el superior

Jerárquico del Juez, es decir, El Tribunal Superior del Distrito Judicial Especializado en los procesos de Restitución de Tierras en la localidad correspondiente. En el caso del Municipio del Carmen de Bolívar, en primera medida será el Juez del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, ahora bien, si se presenta opositor en este proceso, inmediatamente asumirá la competencia el Tribunal Del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena. Lo que implica, que la competencia se encuentra asegurada dependiendo de los opositores y segundos ocupantes, inmiscuidos en un predio del que no son propietarios pero que tuvieron durante un tiempo bajo su cuidado por un período de tiempo, ameritando por el mínimo de garantías una compensación a cambio de la manutención y cuidado que se brindó al predio servido.

Así, se encuentra garantizado con la sentencia C-330 del 2016, esta participación de los opositores de buena fe como víctimas indirectas del conflicto armado que deben ser compensadas en cierta medida en virtud de las normas legales civiles que regulan la materia. En cierta medida, la ley 1448 del 2011 se quedó en lagunas respecto a esta problemática, que entró a regular la jurisprudencia competente para ello cuando se trata de derechos fundamentales.

Si bien es cierto, no todas las pautas dictadas de la sentencia en mención deben ser acatadas con rigurosidad, estas deben seguirse a criterio valorativo del juez a tomar la decisión. Por cuanto la sintaxis del problema es perseguida por la figura judicial, del que depende la restitución de un derecho fundamental con base al acervo probatorio suministrado. Se deduce entonces que la gestión probatoria y el acompañamiento a la víctima en el proceso de restitución de tierras ante el juez en turno es la causa principal de la efectividad del derecho litigioso.

Regulado el tema de los segundos ocupantes en la Jurisprudencia Constitucional, se procedió a estudiar otra parte genérica del proyecto de investigación: la eficacia con que se tramitan los procesos de restitución, la composición y complementariedad de los funcionarios de la unidad de restitución de tierras frente al acompañamiento para

las garantías formales de la ley 1448 del 2011, relacionando también el carácter temporal del marco de la justicia transicional y evaluando el período de tiempo para la restitución de las garantías.

Se recuerda que la eficacia y la eficiencia se evaluaron en los términos textuales referidos de la entrevista en los objetivos como “Analizar cómo el Estado Colombiano restituye las tierras de las víctimas del conflicto armado en los Montes de María **en el menor tiempo posible**”, los interrogantes cuestionados de la eficacia serán expuestos a continuación.

5.2. Eficacia

La eficacia es la capacidad de alcanzar ese efecto deseado, tras la realización de una acción. Lo cual, se encuentra complementado a la eficiencia, debido a que una es el puente y la otra el resultado concluyente.

En esta parte de los interrogantes, se profundizó en la pregunta de si la ley 1448 del 2011 en los procesos de restitución de tierras resultó eficaz para la reparación de las mismas, es decir, si cumplió con las medidas instrumentalizadas para esta labor. A su vez, se pretendió evaluar el resultado del acompañamiento y de las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, haciendo énfasis en la restitución de tierras y en el período de tiempo con el que se obtuvo la restitución o compensación a la víctima. A continuación, se expondrá las posiciones de los sujetos entrevistados respecto a la eficacia de los procesos de restitución de Tierras reglamentados en la ley 1448 del 2011.

5.2.1. Perspectiva de la Víctima

En esta etapa, con las preguntas se buscó evaluar los resultados que realmente se hicieron notar en el proceso de Restitución a las víctimas del conflicto Armado, por esta razón las preguntas a las víctimas del conflicto armado fueron respondidas a potestad de los sujetos para que expresaran tanto sus aspectos positivos, como los negativos en la entrevista.

Al comenzar preguntándole respecto al tiempo que han estado buscando que el Gobierno Nacional les restituya la tierra; la respuesta común fue la resignación. Puesto que las víctimas consideran que el proceso de Restitución y las garantías que trae consigo son un papel más en formalidades y trámites sumariales que no arrojan resultados materiales. Este es el paradigma del que se habló en los marcos de Referencia para el Presente Estudio de caso.

Para mayor ilustración de lo anterior, se trae a colación la respuesta que dio una de las víctimas cuando se le realizó el interrogante del tiempo ha durado realizando los trámites para que el gobierno Nacional le asigne una nueva tierra o Restituya la solicitada, esto fue lo que respondió:

“Mucho tiempo, desde comienzos del año 2005. Pero ya yo no quiero tierra, estoy muy vieja y me gustaría quedarme con lo poco que tengo y donde estoy ahora...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A VÍCTIMA No. 2).

Ello teniendo en cuenta que la VÍCTIMA No. 2 y No. 3 fueron declaradas como “perjudicadas, despojadas y desplazadas” en la víspera de los años 90’. Debe reconocerse de esta manera que la política pública por parte del Estado y dirigida a las víctimas del conflicto armado que perduró 50 años, no es impotente ni equivalente ante la poca vigencia del único aparato transicional que se encuentra disponible para reclamar sus derechos, los cuales fueron menoscabados en esta guerra interna.

Sin embargo, en este registro de los resultados también se analizan las respuestas dadas por las víctimas No. 1 y No. 5, en las que se encontró un hallazgo respecto al tiempo límite para declararse como víctimas e iniciar un proceso de reparación integral como principal medida la restitución de sus bienes:

“... ¿Eso es de la resolución que me declaró víctima? Déjame recordar bien... 6 de junio de 2013. Fue cuando yo declaré y me dieron la calidad...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A VÍCTIMA No. 1).

Entre tanto, otra víctima afirma la pregunta en cuestión:

“... ¿El tiempo que duramos en ese proceso?... Bueno nosotros duramos alrededor de unos cuatro años. Cuando nosotros empezamos el proceso, la ley no la habían sancionado como tal y nuestro proceso tenía algunas particularidades, entonces íbamos de oficina en oficina aquí en el municipio, nos cerraban las puertas.

...En fin, luego de que ya supimos que se dio el tema de la ley, ya sentimos como un respiro porque obviamente nosotros sabíamos que teníamos todas las garantías o al menos todas las posibilidades de recuperarlo porque efectivamente había existido una vulneración grandísima de derechos...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A VÍCTIMA No. 5).

Se observa de esta manera que las víctimas a las que se les brindaron garantías en procesos de Restitución, participaron de manera activa y gestionaron sus derechos, es decir, se les brindó un asesoramiento debido a las diligencias exhaustivas que realizaron, como lo demuestran las entrevistas completas a las víctimas.

Por otro lado, al cuestionársele a las víctimas del conflicto armado los resultados materiales del proceso de Restitución de Tierras y las garantías de la ley de víctimas,

los sujetos entrevistados manifestaron una inconformidad *per se*, ante el acometido de esta justicia transicional:

“... Sé que muchas de las personas que estaban en este proceso también. Con la implementación de esas otras medidas. Por ejemplo, allí estaba establecido la constitución de una vivienda. Y efectivamente a nosotros nos construyeron una vivienda de 4X4. Osea, hay algunas cosas que están dentro de la implementación que yo creo que se tienen que mirar muy muy a fondo porque las condiciones de nosotros acá en la costa, no son las mismas de otros lugares. Entonces por ejemplo esa casa fue construida con una infraestructura que no es la adecuada para acá, con estas temperaturas que se dan a veces, y en el sector donde estamos; hay que tener en cuenta que esta es la ruralidad. Eso por un lado... Por otro lado, que no hubo un seguimiento puntual, a mí me tocó por ejemplo para la construcción de una vivienda rural en su momento, porque los materiales no eran los adecuados, porque no había un seguimiento efectivo. Es decir, contratan con una constructora y dejan que la constructora haga lo que ellos quieran. No hay un seguimiento efectivo. Pero, al momento de exigirle a la víctima como tal, entonces allí sí...”. (VER ANEXO. ENTREVISTA A VÍCTIMA No. 5).

Ante este hecho, la víctima asegura que la ley tiene sus falencias, pero es un aspecto positivo que ya exista implementación normativa para encargarse de esos agravios sufridos a las víctimas del conflicto Armado. Se reitera que los resultados de la ley 1448 del 2011 se encuentran garantizados, sin embargo, en la realidad social ello no se materializa por factores externos a la ley y su justicia transicional.

La eficacia en la presente investigación consistió indagar sobre los resultados de esos formalismos de palabras y entidades, es decir, la materialización de la ley 1448 del 2011 fue en un primer momento un punto de quiebre entre los mecanismos obsoletos para hacer valer los perjuicios sufridos por la magnitud del conflicto, pero, además, forjar una herramienta jurídica a las víctimas para ser escuchadas por el Gobierno Nacional. Al evaluar la eficacia de los procesos de restitución de tierras en el marco

del posconflicto, se obtiene una realidad muy distinta a la prevista en las normas procesales y, su siguiente cuestión a resolverse es indagar respecto a esta problemática de implementación y materialización de la ley 1448 del 2011 en esta zona estudiada, los hallazgos de esto se hablarán con mayor profundidad en otro acápite. A continuación, se estudiará la entrevista realizada al funcionario encargado de la Unidad de Restitución de Tierras para que arroje una mejor claridad sobre esta problemática.

5.2.2. Perspectiva del funcionario de la Unidad de Víctimas

Anteriormente se observaba una inconformidad frente a los resultados de la ley 1448 del 2011, por tanto, estos mecanismos y medidas no eran meramente “sumariales” como los designaba el valor probatorio porque también justifica la condición de participar activamente y en colaboración con la institucionalidad para alcanzar los resultados formales esperados.

La eficacia fue tomada por los funcionarios de la Unidad de Restitución de tierras desde un punto de vista totalmente distinto al de la víctima, justificado en las razones del trabajo y diligencias que se deben llevar a cabo con rigurosidad para que la restitución de las tierras sea en el menor tiempo posible y con los resultados esperados.

Cuando se le indagó el criterio del funcionario respecto a la eficacia con la que se manejan las diligencias del proceso de restitución de tierras, este respondió:

“...Este es un proceso bastante complejo, porque nosotros no trabajamos solos, sino que trabajamos armónicamente con todas las entidades que hacen parte del sistema de protección a víctimas, es decir, aquí se hace un procedimiento administrativo y se solicita información a la fiscalía, Justicia y Paz, a las Alcaldías. Entonces a veces hay demoras en las contestaciones de esas entidades porque nosotros debemos recaudar unas pruebas para tomar la decisión de si inscribimos o no la solicitud en el Registro

de Tierras, por esto a veces hay demoras, procesos mucho más complejos que otros, procesos que de manera probatoria están muy fuertes, donde el mismo solicitante trae mucha documentación, donde nos demuestran muchos hechos donde ellos manifiestan su solicitud y la idea de esto es no caer en la Arbitrariedad de Inscribir o no a las personas en el registro de Tierras, sino que la valoración probatoria sea buena y clara para que nosotros convenzamos al juez...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS).

Y concluye con su posición al respecto:

“...Para mí, desde mi punto de vista es un proceso rápido y eficiente, pero más que eficiente es un proceso muy completo que no deja abierta ninguna puerta de duda ante las decisiones que se toman en las diferentes entidades territoriales...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS).

Analizándose desde este punto de vista, el funcionario afirma que el proceso de Restitución es un complejo, y no deja espacio a la duda razonable del justo título adquirido en el proceso.

Al indagársele con relación a las diligencias del trámite de los procesos de restitución de tierras en la Zona del Carmen de Bolívar, su conclusión fue:

“...Pues nuestra unidad de restitución de tierras Dirección Bolívar si ha sido oportuna frente a las medidas otorgadas a cada uno de los beneficiarios del proceso de restitución, como te explicaba anteriormente, nosotros somos la representación judicial o jurídica frente a los juzgados de restitución de tierras, por tanto estamos obligados normativamente a acompañar a las víctimas no solamente en la presentación de la solicitud ante el juez sino en el cumplimiento de cada una de las medidas que disponen los jueces y los tribunales. (...) Entonces considero que, si

hemos sido oportunos, ahí de pronto algunas medidas que de pronto no se han podido cumplir, pero no es por arbitrariedad o por omisión de la Unidad sino como te explicaba que hay casos mucho más complejos, por ponerte un ejemplo, un juez ordena una compensación al solicitante o un predio de condiciones o similares características. Y de pronto le mostramos al solicitante dos o tres predios y el solicitante dice que no son de su agrado, entonces eso nos limita o nos retarda esa acción oportuna que en la mayoría de los casos siempre tenemos...” ...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS).

Se observa con esta respuesta que el trámite tiende a ser complejo en múltiples casos por la dependencia de la Institucionalidad de tierras ante otros organismos técnico-sociales que se encargan de diligencias propias de sus funciones, y que luego de esto es que se obtiene las formalidades para el cumplimiento de la normatividad. Ante esto, el trámite y eficacia de los procesos de restitución dependen en gran medida de soluciones alternativas, como es restituir otro predio en iguales o mejores condiciones para las víctimas del conflicto armado, sin embargo, asegura, que ello queda a disposición de la víctima.

Cuestionar la eficacia es importante en el marco de este estudio de caso, por ello, cuando se le preguntó al funcionario por la vigencia de la ley 1448 del 2011 o la posible decisión de una prórroga, su respuesta fue:

“...Como es claro, las promulgaciones y vigencia de las leyes son funciones del congreso, nosotros como unidad de Restitución tenemos una vigencia hasta junio del año 2021. Existe en conocimiento una demanda que allegó para prorrogar esta ley. En una opinión muy personal, considero que la ley no debía tener un término de vencimiento tan corto ya que Colombia es un país con mucha violencia histórica y más víctimas por el conflicto armado interno y el término de vigencia de la ley al 2021 parece imposible determinar que se logran atender o beneficiar a todos los solicitantes del proceso de restitución...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS).

Es menester concluir que los funcionarios de la Unidad de Restitución de tierras esperan una prórroga a largo plazo para cumplir a cabalidad con las asignaciones que establece la ley 1448 del 2011. En tanto, la ley tenga un instrumento procesal eficaz para el desarrollo del posconflicto a favor de las víctimas, se puede plantear una proyección favorable en el rendimiento de los procesos de Restitución, en cierta medida, el aspecto positivo que se debe tener en cuenta es que la ley 1448 del 2011, establece garantías eficaces para restablecer los derechos a las víctimas despojadas, lo que no es menos cierto, se necesita la cooperación de estas para finiquitar el proceso de manera favorable. A continuación, se expondrá la posición de la Procuraduría delegada del Municipio del Carmen de Bolívar en relación con esta temática de la eficacia en los procesos de restitución de Tierras en el marco del posconflicto.

5.2.3. Perspectiva de la Procuraduría Delegada

La procuraduría es un órgano garante de los derechos humanos y como tal, su explicación en la entrevista aportó valiosos hallazgos que se tendrán en cuenta en la conclusión final del presente estudio de caso. Los temas a los que globalmente se refirió fue a las partidas presupuestales que se destinan para la implementación de estos procesos, la función de los Servidores públicos en estos procesos y la finalidad con la que se persigue un proceso de Restitución en esta zona.

En el ámbito de la eficacia la procuraduría delegada del Municipio del Carmen de Bolívar se refirió a los procesos de Restitución de tierras adelantados en esta zona como algo común ante la poca vigencia con la que se apremió a esta ley 1448 del 2011. Al cuestionarle los resultados negativos en el avance de los procesos de restitución, la funcionaria de la Procuraduría se refirió al problema de su vigencia de la siguiente manera:

“... Lo que se está buscando desde la procuraduría delegada, es que el gobierno pueda prorrogar la ley por 10 años más y el presidente DUQUE lo anunció. Porque básicamente llevamos ya, prácticamente el cumplimiento del término de vigencia y no se ha logrado todo el tema de acompañamiento para lograr la atención y reparación efectiva de las víctimas entonces esto hace que se requiera su prórroga. Pero más allá de esto, se requiere analizar cuáles han sido los mecanismos utilizados por las entidades en materia de articulación, de coordinación para lograr la atención efectiva de las víctimas porque por más esfuerzo que ha demostrado el gobierno nacional.” (VER ANEXO. ENTREVISTA A LA PROCURADURÍA DELEGADA DEL MUNICIPIO).

En comentario se refirió a la actividad presupuestal que se debe destinar para estos procesos de posconflicto:

“...Es fundamental también, revisar el presupuesto destinado para las víctimas, en materia de indemnización, de lo que va la ley han sido aproximadamente un millón de víctimas de cerca de Ocho millones de víctimas según el registro único de víctimas que han sido indemnizadas, esto requiere también una revisión del presupuesto en el plan nacional de desarrollo...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A LA PROCURADURÍA DELEGADA DEL MUNICIPIO).

Lo que implica que para garantizar la reparación integral y cada una de sus medidas asistenciales, se debe indicar más valores al presupuesto del erario público. Y anteriormente se evidenció que la mayoría de las víctimas en esta zona prefieren una indemnización en vez de la restitución de su predio -si hubiere sido despojada del mismo- que amerita una mayor atención a esta problemática sobre la renta nacional.

Además, la funcionaria de la procuraduría propone nuevos estudios y estrategias para mejorar y enriquecer el proceso de restitución de tierras basándose en estrategias de colectivización para gestionar esos fallos respecto de las medidas que hasta la fecha se han cumplido y cuáles no, en aras de poder lograr una incidencia:

“...En el caso del Carmen de Bolívar, poder reunir cuales son todos esos fallos que hay, poder sistematizarlos e identificar de todos estos fallos que es lo que se ha logrado, que falta aún por implementar y frente a eso hacer el seguimiento correspondiente a las comunidades. Nos hemos dado cuenta que hay un gran rezago con las comunidades, a la respuesta que tiene que dar la agencia de tierras con relación a estos predios de segundos ocupantes por ejemplo que debe brindar y que a la fecha no se ha dado. Lo que se busca inicialmente es poder sistematizar toda esta información y posteriormente con las entidades que tiene responsabilidades directas y poder lograr toda esta incidencia desde el control preventivo y en el caso de que no lo cumplan, se harán sancionados en la función disciplinaria...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A LA PROCURADURÍA DELEGADA DEL MUNICIPIO).

Al referirse a la eficacia, se le indaga si la ley 1448 del 2011 ha servido a su propósito intrínseco, a lo que responde:

“...La ley 1448 del 2011 permitió que las víctimas fueran puestas en el centro de un dialogo social. Porque históricamente las víctimas han sido una población marginada siempre ha prevalecido la visión del victimario sobre una víctima vencida como los pobrecitos. Esta ley les da una misión a las víctimas como sujeto político transformadores, da una mayor fuerza a los espacios de participación como las mesas de víctimas municipales, departamentales y la nacional...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A LA PROCURADURÍA DELEGADA DEL MUNICIPIO).

De la entrevista realizada a la funcionaria de la procuraduría se puede concluir que el proceso de restitución de tierras va muy lento, pero ello no signifique que no sirva a su propósito principal, puesto que es la primera vez en la historia del conflicto y posconflicto que se tiene un proyecto de ley que abre paso a nuevos ritos procesales transitorios para darle paso a las víctimas del conflicto armado e incluirlas en el centro de la mesa en los diálogos para la prosperidad del Estado Social de Derecho. Se reitera que, así como existen avances, igual manera existen retrocesos y vacíos

normativos que esta ley no previó, por consiguiente, deben ser llenados por las fuentes auxiliares del derecho. Se pasará a estudiar brevemente el punto de vista de la Alcaldía Municipal de Barranquilla respecto a la eficacia de los procesos de Restitución de tierras en la zona aledaña.

5.2.4. Perspectiva de la Alcaldía Municipal

La funcionaria de la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar se encuentra de común acuerdo con lo expuesto por lo alegado por la Procuraduría del Municipio, en cuanto a la consideración de una vigencia prorrogada por parte del Gobierno Nacional para seguir implementando la política pública en pro de las víctimas del conflicto armado y su restauración al orden previo al conflicto armado interno que se libró durante décadas.

En cambio, para la realidad social de los procesos de restitución de tierras, expone que se presentan varios obstáculos para que se implemente adecuadamente la ley. El primero de ellos es:

“...La falta de implementación de las Microfocalizaciones, son mecanismos para priorizar casos de restitución de Tierras, sobre todo los casos con informe diferencial, casos de Mujeres, las cuales son violentadas sexualmente, son Mujeres cabeza de Familia. Entonces uno de los vacíos que tiene la ley 1448 del 2011, es que no se está implementando de manera integral, el proceso o el enfoque de género, entonces es importante que el proceso de la Microfocalización se dé porque permite identificar ese tipo de situaciones...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIA DE LA ALCALDIA DISTIRITAL DE BARRANQUILLA).

Prosigue con el otro obstáculo:

“...En Montes de María existe un fuerte liderazgo de un fuerte proceso de reclamación de tierras, referente a eso, este aumento se está presentando mucha situación de Amenazas, de temor, de miedos y que los líderes han tenido que bajar el perfil en los procesos de restitución de tierras porque de hecho en Montes de María han asesinado a reclamantes de Tierras...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIA DE LA ALCALDIA DISTIRITAL DE BARRANQUILLA).

Este enunciado expuesto puntualmente sobre la realidad social de la ley 1448 del 2011, manifiesta las amenazas a las que diariamente son sometidas las víctimas del conflicto armado como una estrategia para que desistan de toda garantía futura como es el caso de la restitución de la tierra. Estas amenazas benefician en cierta medida a los grandes terratenientes que manejan esa zona rural y ordena fundar el caos, todo ello con la finalidad de infundir terror y renunciar a las reclamaciones de garantías entre otras cosas. De esta manera, se le agrega una solución al problema jurídico que planteaba la Procuraduría delegada en el Municipio del Carmen de Bolívar, puesto que marca los factores y obstáculos que impiden el cumplimiento efectivo y oportuno de la ley 1448 del 2011.

Explicadas estas entrevistas y teniendo presente la posición de las víctimas, se logró demostrar la concordancia entre las respuestas a los interrogantes y desarrollando así dos problemáticas comunes en el proceso de restitución de tierras y las demás garantías: el primero de ellos fue la destinación en el rubro presupuestal para la implementación de la ley 1448 del 2011. Por otro lado, el segundo es un obstáculo de la colectivización y es dirigida a la seguridad pública y protección a las víctimas del conflicto armado. Estas fueron las dos realidades sociales que impidieron cumplir con la eficacia a la ley de restitución de Tierra. A continuación, se hablará de los hallazgos respecto a la eficacia del proceso de restitución de tierras y vacíos normativos que se estudiaron.

5.2.5. Hallazgos

En el registro de estos resultados se destaca la figura de la eficacia como una evolución simbólica e instrumental recurrente en el siglo anterior. Por ello, en el Estado

Liberal las leyes eran consideradas eficaces debido a los caracteres del mandato del interés general del pueblo, siendo creaciones con fines de limitación al poder, impidiendo que el mismo sea concentrado o absoluto en una persona u órgano.

Pero esta concepción cambia en la ideología de un Estado Social de Derecho, el cual busca la justicia sobre todo lo demás, incluyendo la seguridad de la población y normativa mediante la que “Ley pasa a ser un instrumento para la acción” que tendrá netamente ejecutores y no, simplemente gestores.

Por esta razón, la eficacia instrumentalizada en la ley no solo depende de normas, sino también de la realidad cotidiana y el devenir de la sociedad, la diversidad de intereses, y dejar atrás el absolutismo, debido a que solo es una historia de las grandes sociedades predecesoras. La eficacia solo responderá por causas especiales para las cuales fue creada, en el caso de la ley 1448 del 2011 para las víctimas específicas de que trata el artículo 3° excluyendo a las víctimas que realmente sufrieron los agravios y sujetos pasivos de conductas punibles con ocasión del conflicto armado, pero que no cualificaron temporalmente, sustancialmente y espacialmente para ser partícipes de las garantías que brinda esta ley en mención.

5.3. Medida de Restitución de Tierra “Individual” y “Colectiva”

Antes de entrar en el tema de estudio de la medida de restitución de tierra de manera individual y de manera colectiva, es necesario distinguir su alcance en el marco de la justicia transicional y las pautas de las que la norma procesal las ha dotado.

En primer lugar, la reparación de manera colectiva es un programa del Estado Colombiano que tiene como finalidad contribuir a la reparación de los daños causados a la colectividad, referida la colectividad como un conjunto o conglomerado de personas ya sea comunidad, barrio, sitio rural, entre otras cosas. En el presente caso, se encuentra referida esta medida de reparación integral a las comunidades étnicas,

comunidades campesinas y barriales y organizaciones y grupos, desde una perspectiva material, política y simbólica.

Lo anterior implica que el proceso de reparación colectiva tiene beneficios para las víctimas de los delitos de lesa humanidad que ocurrieron con ocasión del conflicto armado, uno de estos tipos de reparación colectiva es la contemplada como la restitución de manera colectiva que se les realiza a estas comunidades, teniendo presente circunstancias y metodologías para aplicar este carácter normativo específico, como lo son los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 del 2011, ello con la finalidad de dignificar y enaltecer los derechos que fueron menoscabados en la guerra interna.

En segundo lugar, la reparación individual que se realiza a la víctima como tal que sufre el agravio de la guerra, como una persona en específica y no indica el despojo que se le realizó a la comunidad donde habita. En cuanto a la restitución de tierras que el Estado realiza de manera individual, se presenta en el trámite normal que establece la ley 1448 del 2011.

Una vez esbozados los conceptos y alcances de las medidas de reparación de manera colectiva e individual, se aprecia que los límites y regulaciones de los procesos de restitución de tierras de manera colectiva se encuentran regulados por normas especiales dado su carácter complejo ante el asunto de este estudio de caso.

Respecto a esto, al indagársele al funcionario sobre las medidas de restitución de tierras de manera individual y colectiva, sostuvo ante la restitución de manera individual lo siguiente:

“...Se le denomina solicitud individual a las solicitudes de restitución que realiza el campesino de manera individual. Es como su nombre lo establece, no existe de pronto un conglomerado o un grupo de personas o una parcelación que solicite un predio en

restitución. Podemos tomar esa denominación...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS).

Lo cual no es contrario a lo propuesto anteriormente sobre el concepto y limitación de la restitución de manera individual a la víctima del conflicto armado. Su connotación se adquiere de manera “individual” cuando la víctima solicita la restitución de su tierra en propiedad o dominio particular, mas no de un conglomerado de personas.

Por otro lado, el funcionario se refirió a la restitución de tierras de manera colectiva realizando énfasis en lo siguiente:

“...La ley 1448 del 2011 tiene unos decretos reglamentarios, uno de ellos es el que reglamenta las solicitudes colectivas de restitución de tierras. Que van enfocadas más que todo a las etnias, a los Wayuu, a los consejos comunitarios, a las negritudes, a los AFROS, etc. Entonces las solicitudes colectivas de restitución tienen un decreto reglamentario y requisitos específicos para que esas personas en grupo tengan un representante del consenso, consejo o de cabildo, teniendo en cuenta cual sea la Etnia para colocarle un nombre y se tramita de una manera diferente o especial al proceso individual de la ley 1448 del 2011...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS).

La ley 1448 del 2011 implica que un conglomerado de personas pueda acceder a una restitución masiva de tierras, las cuales fueron despojadas con ocasión del conflicto armado, y por supuesto, con esta implementación buscó abrirles paso a las minorías sociales y atender las reparaciones que haya que realizar en este ámbito. Es por esta razón que el gobierno Nacional crea un dialogo político entre la institucionalidad y la sociedad, para que, mediante una coherencia armónica de la administración, se le brinden mejores condiciones de vida a la población desplazada por la violencia.

Por otro lado, al indagársele a las víctimas del conflicto armado respecto a la reparación colectiva a la comunidad en específica, se obtuvieron resultados

incongruentes debido a que, por amenazas o puestas en peligro de su dignidad, prefirieron no hablar de este punto en la entrevista. Como es el caso de la Víctima No. 1 que asegura:

“...Los vecinos prefieren guardar silencio y no pedir nada. Varias personas que fueron víctimas las han asesinado por esos motivos...” (VER ANEXO. ENTREVISTA A VÍCTIMA No. 1).

Concluidos los resultados de la entrevista realizada al funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras, se procede a exponer los hallazgos de esta problemática teniendo en cuenta que las víctimas del conflicto armado en su entrevista no arrojaron resultados concisos, se procede a evaluar y exponer un análisis jurisprudencial de la justicia especializada en la restitución de tierras en el siguiente acápite.

5.3.1. Hallazgos

Para interpretar los hallazgos y relacionar los conceptos, se realizó un análisis jurisprudencial respecto de la sentencia que mayor incidencia incluyó en el trámite de los procesos de restitución a una colectividad o conglomerado, puesto que se resaltó que el trámite normal de estos procesos contienen una etapa administrativa y judicial, en cambio, los procesos de restitución de tierras de manera colectiva poseen unas particularidades que se enunciarán en relación con el tramo judicial del fallo.

En el fallo proferido con Número de radicado 13-244-31-21-001-2013-063, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Carmen de Bolívar decidió sobre la solicitud de Restitución y Formalización de tierras Despojadas o abandonadas Forzadamente, presentada por el señor ANGEL MIGUEL LAMBRAÑO MENA Y OTROS, mediante la cual se solicita la restitución de un predio de mayor extensión conocido como LA ROMA, dentro del cual se encontraban varias parcelas

de tierra donde permanecían varios campesinos labrando la tierra y dedicándose a la actividad del campo.

Sin embargo, por esta zona existieron fuertes presencias de los grupos armados al margen de la ley, lo que ocasionó que el Gobierno Nacional declarara esa Tierra despojada y en vacante para adjudicársele a víctimas del conflicto armado. En razón de ello, se reiteró la presente solicitud que entró a conocer el operador judicial, acompañada de otras solicitudes que brindaron cobijo y efectividad en la reparación integral a las víctimas.

Luego de que en esta sentencia se les profiriera la restitución del predio LA ROMA en cada una de sus parcelas a los solicitantes, se cuestionó el cumplimiento de la eficiencia y eficacia del proceso de Restitución de Tierras, esto debido a falta de disponibilidad presupuestal para la ejecución de las ordenes de la sentencia. La siguiente tabla describe las falencias de las instituciones encargadas de ejecutar la restitución y las medidas de asistencia:

ENTIDAD	TEMA	CONCLUSIONES GENERALES
UAEGRTD	Entrega material	La mayoría de los predios no han sido entregados materialmente, los beneficiarios han retornado voluntariamente y tienen el goce efectivo.
ANT	Adjudicación	Errores en las sentencias y falta de recurso humano en la entidad. Existe errores en la identificación de los beneficiados. Se presentó el oficio para la

		modulación de la sentencia, muchas están pendientes de resolver.
ORIP	Tramites registrales	Bajo registro, en razón a que las sentencias no son remitidas con constancia de ejecutoria, además de contener errores
IGAC	Tramites catastrales y de formación	-NO ASISTIÓ-
ALCALDÍA MUNICIPAL	Saneamiento de pasivos	En la actualidad no se han adjudicado, ni registrado, ni actualizado la información alfa numérica por parte del IGAC
UARIV-	Asistencia, atención y reparación de cada grupo familiar beneficiario. Ejecución del Plan de Retorno y de Reparación Colectiva.	1. Los beneficiarios de las sentencias se encuentran incluidos en el RUV. No todas las sentencias ordenan las indemnizaciones administrativas, la UARIV estableció 2 criterios de priorización a los Núcleos familiares que tengan un integrante mayor de 74 años de edad o b. tengan

		<p>discapacidad mayor al 40%.</p> <p>Dificultad. La UARIV no tiene el recurso humano, patrimonial y técnico para indemnizar a todas las víctimas.</p> <p>2. El enlace de víctimas destacó que sólo una sentencia de las estudiadas ordena a la UARIV y a la alcaldía Municipal priorizar a la comunidad la vereda ROMA en los planes de Retorno y reubicación, pero no está incluida la zona baja de El Carmen De Bolívar.</p> <p>Dificultad. La alcaldía debe convocar el CJT para actualizar el Plan de Retorno y Reubicación del Municipio e incluir</p>
--	--	---

		<p>a las víctimas y veredas de la zona baja del Carmen de Bolívar incluyendo la Vereda ROMA.</p> <p>Reparación Colectiva. No son sujeto de Reparación Colectiva por vía judicial, se debe surtir el trámite administrativo correspondiente.</p> <p>Dificultad. El trámite administrativo de UARIV para reconocer sujeto de Reparación colectiva es lento.</p>
UAEGRTD	<p>1. Proyectos productivos</p> <p>2. Subsidio de Vivienda</p>	<p>1. La representante de la UAEGRTD manifestó que a la fecha existen 24 proyectos productivos finalizados, los beneficiarios están</p>

		<p>graduados. Los demás casos no presentan avances debido a que por parte de los juzgados y Tribunales no se han resuelto errores topológicos solicitados.</p> <p>2. 9 núcleos familiares priorizados, 4 Subsidios adjudicados y 17 viviendas construidas a través del banco Agrario.</p>
--	--	---

Informe de ejecución de sentencia de restitución de tierras. Procuraduría delegada en el Carmen de Bolívar.

De lo que se puede inferir que el cumplimiento de las sentencias depende en gran medida de los recursos financieros para la ejecución de estas. Lo que cuestiona en el orden jurídico, y consecuencialmente se plantea la tesis de que dichas órdenes no se cumplen a cabalidad por falta de presupuesto.

Una vez analizado este hallazgo, se observa que evidentemente las partidas presupuestales son necesarias para la ejecución de órdenes judiciales, implicando de esta manera la necesidad de plantear estrategias en un futuro cercano. En el siguiente acápite se realizará un marco jurídico construido que arroje datos estadísticos de las

sentencias y a su vez se realice un análisis conjunto de las entrevistas y lo que se aporta al presente estudio de caso.

- Marco jurídico y análisis conjunto de las entrevistas y relación con la investigación

Concluyendo con el estudio anterior, es posible identificar los siguientes problemas comunes en los retos de la ley 1448 del 2011:

-Por un lado, varias sentencias de procesos de Restitución de Tierras negaron el derecho fundamental a la restitución de tierras, dada las respectivas oposiciones presentadas en cada uno de los procesos registrados.

-Son pocos los escenarios donde se reconoce compensación alguna a favor de los opositores, referidos estos a poseedores de buena fe.

-En la mayoría de las sentencias donde se opta por restituir las tierras, estas se restituyen por equivalencia a un predio con similares características o de ser el caso, prefieren la indemnización.

-Una vez que se reconoce el derecho a la restitución de tierra del peticionario “Víctima”, inmediatamente se dictan una serie de medidas necesarias para satisfacer las pretensiones solicitadas en este mecanismo. Conjuntamente, todas proceden a ser de carácter económico, y se encuentran rodeadas de todas aquellas condiciones mediante las cuales se garantiza el retorno digno de las cosas a como se encontraban antes del conflicto armado.

Por esta razón, los grandes juristas Nacionales se refieren a la ley 1448 del 2011 como una norma que clarifica la nulidad del conflicto armado, y con las entrevistas realizadas se coloca de manifiesto la necesidad de modificar y extinguir algunos desajustes en la ley de víctimas, además de regular la materia de los segundos ocupantes, el cual fue un hallazgo en el vacío normativo de ésta que junto a la doctrina se supo llenar al calor de la Jurisprudencia Constitucional.

CAPITULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se realizará una discusión con respecto a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, teniendo como principales temáticas la restitución de las tierras en la justicia transicional en relación a la Justicia Ordinaria colombiana, los obstáculos que afronta la ley 1448 del 2011 y otras problemáticas que se hallaron con esta investigación.

6.1. Relación con la justicia ordinaria: la usucapión y los procesos de restitución de tierras de la ley 1448 del 2011

En este acápite se realizará una comparación entre los puntos de quiebre que tiene la justicia común ordinaria de los bienes inmuebles y la justicia transicional, en los procesos de restitución de tierras y por último se hará especial alusión a los mecanismos por mejorar en esta jurisdicción de Paz.

Anteriormente se había afirmado que, para darle trámite a una solicitud de Restitución de tierras, la víctima debe acreditar una prueba “sumarial” mínima de obtener el derecho de dominio a través de tres figuras de especial relevancia:

- El derecho de propiedad
- La posesión
- La ocupación

De las cuales mientras no se cumplan cualquiera de ellas, no se le podrá dar trámite a la solicitud de restitución de tierras. Lo que guarda especial relevancia con la justicia ordinaria al referirnos a la Prescripción ordinaria y extraordinaria (Artículo 2527 del Código Civil) en material civil y de bienes. De la definición legal se aprecian dos tipos de Prescripción, la adquisitiva que en algún tiempo fue llamada Usucapión por los

romanos; y la liberatoria o extintiva (Acuña, 2013). La primera de ellas produce la adquisición de la propiedad, y se encuentra en la Doctrina general como un modo de adquirir el dominio. Al respecto de esto, lo mencionan grandes juristas colombianos como Valencia Zea y Francisco Ternera. Mientras que la segunda produce la extinción de las acciones y derechos ajenos, y se incluyen los modos de adquirir las obligaciones en estricto rigor.

Por otro lado, Planiol y Ripert, afirman que esta regulación de obtención del derecho de dominio a través del tiempo es la *más necesaria en el orden social*, como que sin ella sería imposible obtener la prueba de la propiedad en la generalidad de los casos, y consecuentemente los pleitos serían innumerables (Bonilla, 2011). Lo que amerita que, en una declaración para obtener la propiedad con esta regulación, se necesita actuar con ánimo de señor y dueño sobre el bien inmueble y un justo título de adquisición, el cual debe ser legítimo para adquirirla en términos de la Usucapión.

La prescripción adquisitiva es la más asemejada a los procesos de restitución de tierras, en los términos del artículo 2518 del Código Civil consagra:

“Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales.

Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados”

Por esta razón, el derecho de dominio mediante la adquisición por el tiempo fue considerado en la jurisdicción especial para la paz para mermar de garantías a la víctima del conflicto armado. Una vez analizado la norma sustancial ordinaria, se procede a explicar el carácter procesal de ésta;

La norma procesal que consagra la Prescripción adquisitiva en un proceso se encuentra consagrada en el artículo 375 de la ley 1564 del 2012 (Código General del Proceso), teniendo como título el nombre de “Proceso de pertenencia”. Allí mismo,

estipulan las pautas legales y probatorias que se deben seguir para obtener la propiedad sobre un predio siempre que existan como requisitos previos los estudiados anteriormente en las normas sustanciales del código civil como es el caso del justo título, buena fe o posesión irregular con el *animus*.

En lo referente a la posesión como acreditación para obtener la restitución de Tierras o predios solicitada ante la Justicia Transicional que estipula la ley 1448 del 2011, esta posesión es regulada en base a las normas comunes. Lo cual basta acreditar la posesión de la tierra por un término prudente, antes de sobrevenir el despojo y desplazamiento con ocasión del conflicto armado. La posesión según el artículo 762 del Código civil es definida como:

“... La tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo...”

La posesión en la ley 1448 del 2011 aporta el valor probatorio y complementario en la prueba sumarial de aquella persona víctima del conflicto armado que solicite la restitución de su tierra. Es decir, cuando no exista oposición por un tercero (segundo ocupante) se entenderá que el solicitante es propietario de la tierra y debe serle restituida si cumplió con los requisitos estipulados en la ley de justicia y paz.

Por último, la Ocupación que es otro modo de adquirir el dominio de las cosas mediante su uso, aduciendo la característica de “no pertenecerle a nadie” mediante una aprehensión física que se hace de la misma, la cual es acompañada con la intención de adquirirlas. El artículo 685 del código civil se refiere la ocupación de la siguiente manera:

“Por ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya disposición no es prohibida por las leyes o el derecho internacional”

De manera que existen dos tipos de ocupación de la anterior definición, a los cuales habla Valencia Zea: De la ocupación real, si se da de forma que el individuo toma la

cosa como tal, o, de la ocupación presunta cuando se sobreentiende por los actos encaminados manifiesta serle de su aprehensión a pesar de no existir.

En este orden de ideas, se expuso en el acápite la relación que existe de los tres requisitos para obtener la restitución de las tierras (Propiedad, Posesión u ocupación) atendiendo a las pautas legales ordinarias de las normas civiles relacionadas a los bienes y derechos reales. Por esta razón, se expresó que el trámite en los procesos ordinarios de pertenencia de la ley 1564 del 2012 no presentan un flujo de formalismos, simplemente las pruebas para declarar y hacer efectivo el derecho de pertenencia (*propiedad*) sobre el bien, acreditando los requisitos formales que le competen. En cambio, en los procesos de restitución de tierras de la justicia transicional se observa un desgaste sugestivo de colocar una carga procesal tan compleja en manos de una víctima que ha sufrido el agravio injustificado del conflicto armado a través del despojo y desplazamiento de su tierra.

Sólo basta preguntarle al Estado o la institucionalización, respecto de la manera en la que se debe acreditar esa propiedad, posesión u ocupación sobre el predio a restituir. Puesto que la mayoría de los casos analizados de restitución fue el campesinado que desconoce los trámites pertinentes del derecho colombiano y la manera como puede acreditar este requisito, el cual, sin este, no se le da el trámite a la solicitud.

Se cuestiona la carga procesal “sumarial” del artículo 78 (Ley 1448 del 2011) que la víctima debe afrontar para solicitar la restitución de su tierra, justificándose en los vacíos normativos que deja la ley 1448 del 2011 y la falta de conocimiento de la víctima sobre el aspecto jurídico que la misma ley estipula. En concepto personal del investigador, sólo se debe solicitar el favorecimiento de los hechos de los que fue víctima el desplazamiento forzado y la descripción del bien o parcela de tierra a restituir, de aquí de oficio que se inicie la etapa administrativa para la restitución de la tierra. Queda por demostrado que existe una falencia ante la ley 1448 del 2011 y su principal propósito para servir a la comunidad basándose en los argumentos anteriores y los autores que se encuentran de acuerdo frente a esta postura. A continuación, se analizará otro factor que amerita una discusión de resultados frente a la gestión y reconocimiento del Estado como victimario ante el conflicto armado.

6.2. Responsabilidad del Estado colombiano

Históricamente el Estado colombiano ha ocasionado perjuicios a la población colombiana. Aquí en la discusión de resultados se comprobó que el Estado contiene una posición de garante frente al conflicto armado que perduró más de 50 años y actualmente atraviesa el posconflicto, donde debe hacerse el compromiso y reconocerse frente a las víctimas como victimario o actor en el conflicto armado.

El argumento anterior se encuentra justificado en numerosas masacres como es el caso de los *falsos positivos* (1978- 2008) ocasionada directamente a la población civil, por parte del ejército Nacional de Colombia. El cual consistió en el asesinato de civiles no beligerantes o ejecuciones fuera del orden legal para que luego, se hicieran pasar por bajas en un combate contra las guerrillas. Otro hecho que directamente afectó al Carmen de Bolívar fue la masacre ocasionada por Paramilitares en el corregimiento del municipio denominado El salado- Bolívar, donde un bloque de las Autodefensas asesinó a numerosos habitantes en este sector ocasionando una cifra muy elevada de muertos en este sector, aun en estos momentos se desconoce el motivo de ello y se considera como “ocasión del conflicto armado”. Ante este hecho, la Nación fue condenada a indemnizar patrimonialmente a todos las familiares víctimas del crimen de lesa humanidad, pago tasado en \$ 22.000.000. (Espectador, 2019). El fallo fue proferido por el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia, frente al asesinato de 33 personas por parte del grupo paramilitar de los Bloques NORTE y HEROES de Montes de María.

Ante esta realidad social e histórica, la ley 1448 del 2011 no contempla responsabilidad del Estado por el conflicto armado poco menos lo vinculan como victimario ante los hechos y antecedentes que han adelantado los investigadores. Por ello, se concuerda con Manuel Rincones Ascanio y Amalia Polo Henríquez, cuando afirma que debe realizarse una revisión de todo este andamiaje de la justicia transicional puesto que la finalidad de una jurisdicción como ésta es contribuir al reconocimiento expreso de que, por obra de los atropellos ocasionados, existen

numerosas víctimas en el conflicto armado, siendo así, el ejército nacional, los servidores públicos, los grupos guerrilleros y los Paramilitares deben ser sancionados por las mismas leyes sin preferencias basándose en este normativo complejo (ASCANIO, 2017). Un segmento del artículo 9° en la ley 1448 del 2011 exonera de responsabilidad al Estado afirmando:

“...Las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el Estado con el objetivo de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado derivada de un daño antijurídico imputable...”

Se observa en este acápite una falencia ante la responsabilidad del Estado, por cuanto no puede exonerarse de las cargas delictivas que lo incluyen en los delitos de lesa humanidad. Razón por la que considera el investigador suscrito que no puede prosperar en un futuro la ley 1448 del 2011 mientras no se comprometa y responsabilice por sus actos, justificando que históricamente el Estado fue absolutismo y perfección, sin embargo, a la fecha puede ser susceptible de derechos y obligaciones como cualquier persona natural.

Agotado el tema de la responsabilidad Estatal en los perjuicios y el conflicto armado, queda por discutir los problemas fácticos y formales que delimitan la ley 1448 del 2011 respecto a las víctimas para obtener sus derechos como es el caso de la restitución de tierras y respecto a la gestión que deben realizar los funcionarios encargados del trámite tanto administrativo como judicial.

6.3. Limitaciones a la ley 1448 del 2011

Anteriormente se discutió sobre la responsabilidad del Estado frente al conflicto armado y las numerosas masacres que acontecieron por su acción o comisión. Se

procederá a analizar las limitaciones que tiene la ley 1448 del 2011 en el tema de los procesos de restitución de tierras y las garantías que debe implementar a profundidad.

En un primer momento se observó que la ley de víctimas no contiene una normatividad absoluta, podría ser complementada en los alcances del derecho civil que suple algunos vacíos normativos que deben ser regulados por las fuentes auxiliares del derecho, entre ellas la jurisprudencia.

La jurisprudencia se encuentra consagrada en el artículo 230 de la constitución política de Colombia como una fuente auxiliar de la ley, cuando no exista norma expresa o sistemática que maneje la situación. Este fue el hecho que se describió en el tema de los segundos ocupantes y el vacío normativo de la ley 1448 en estos asuntos, el cual se encargó de detallar la jurisprudencia constitucional basándose en las teorías normativas del Estado Social de derecho.

Al momento de presenciar el trabajo de campo del presente estudio de investigación, se partió de la premisa hipotética de que el Estado colombiano restituye las tierras a las víctimas del conflicto armado en su totalidad de manera eficiente y eficaz. Sin embargo, se demostró que, en el mayor de los excesos, ello no sucede a cabalidad. A continuación, se justifica los argumentos basándose en la limitación a las víctimas del conflicto armado y las limitaciones de los funcionarios que adelantan el trámite ante la oficina de Unidad de Restitución de Tierras:

A las víctimas

Se estudió el proceso de restitución de tierras que contempla la ley de justicia y paz en comento. Sin embargo, se reitera la inconformidad de la población respecto a la delimitación para tomar la condición de víctima según los parámetros de la ley 1448 del 2011 en su artículo 3° en la delimitación temporal que acarrea el concepto de los hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985 hasta la proclamación de la ley 1448

del 2011. Esto basándonos en que existen víctimas que se desplazaron previamente a los años 80 al surgir el conflicto armado en el año de 1967, pese a ello, lo único en lo que les conceden es la garantía de No repetición, derecho a la verdad y la reparación simbólica. Lo cual se encuentra injustificado porque rompe armónicamente con la igualdad constitucional.

La cuestión de los segundos ocupantes, se considera que debe ser regulada por normas especiales debido a que en procesos futuros de restitución de tierras se van a presentar objeciones de terceros allegados al proceso, lo cual, no puede tomar desprevenido al operador de justicia. Sin embargo, puede optar por las pautas jurisprudenciales del test de razonabilidad y proporcionalidad, y aplicar los silogismos jurídicos para tomar la decisión más justa.

Por otro lado, se observa la falta de materialización en el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado a lo cual desde el artículo 35 de la ley en mención, se garantiza una asesoría jurídica y técnica en el tema de la justicia transicional a favor de las víctimas. Requiere parte del cumplimiento y apoyo por parte de los funcionarios y la institucionalización, además de brindarle protección a los derechos de propiedad legítimamente obtenidos.

A la Gestión de los funcionarios

En cuanto a la gestión de los funcionarios y la institucionalidad, se observó la actividad receptiva al solicitar información. Por cuanto desempeñan su labor a cabalidad y con motivo para propiciar el bien común. Este es el aspecto positivo a resaltar en el presente estudio de caso.

En cambio, existen falencias en las cargas procesales y en su actividad administrativa para el trámite de la restitución. Si bien es cierto, uno de los ejes focales de la investigación consistía en la eficacia de la materialización de la ley de víctimas, el resultado del trabajo de campo no arrojó resultados favorables a estas tendencias.

Se percibió la inconformidad de las víctimas del conflicto armado ante el trámite y apoyo que brindaron los funcionarios. Si bien es cierto, la labor administrativa de la Unidad de Tierras inicia con la solicitud formal, no finaliza meramente en la etapa judicial al concedérsele la tierra a la víctima, sino luego de que haya cesado el peligro y brindarle asesoramiento en la reinserción social. Es decir, brindarle no sólo la medida técnica de restitución sino, además, el acompañamiento y protección de toda la institucionalización, que se demuestre el interés de servir a la comunidad.

Quedando demostradas las falencias en los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo de campo, se recomienda a los funcionarios del trámite y a la institucionalización como tal que la reparación simbólica y los espacios de diálogos no son meramente eventos y encuentros de integración, más que un espacio de fiesta se necesita es un entorno de respeto para con las víctimas y encuentros de diálogo sobre las inconformidades. Concluyendo este capítulo se procederá a dar la conclusión del presente estudio de caso.

CONCLUSIONES

Una vez, culminados los estudios en la discusión de resultados, se demostró la relación que existe entre todas las institucionalidades para implementar las políticas públicas para la restitución de tierras despojadas y el seguimiento de los organismos de control de los derechos constitucionales. Por esta razón, se realizaron comparaciones entre los conceptos a los cuales puede implementar el gobierno nacional desde estrategias de reparación más eficaces y por supuesto, eficientes.

Teniendo en cuenta propuestas presentadas previamente para una mejor focalización de la ley de víctimas y restitución de tierras, el punto geográfico donde se ubica la región de los Montes de María y el nivel de marginalidad que establece ello. A continuación, se dará respuesta a la pregunta de la investigación:

¿De qué manera individual y colectiva se garantiza la eficiencia y eficacia en la restitución de las tierras a las víctimas del conflicto armado en los Montes de María?

Para resolver el interrogante final, se describieron cuatro catervas de la siguiente manera:

- Restitución individual o particular a las víctimas del conflicto Armado.

Las personas víctimas del conflicto Armado no solamente en el Carmen de Bolívar o en los Montes de María sino de manera general, deben realizar una solicitud de restitución de Tierras ante las diferentes direcciones territoriales que se encuentran en todo el país. Los solicitantes se acercan a la entidad “Unidad de Restitución de Tierras” a manifestar a un funcionario de atención al ciudadano, cuáles fueron los hechos constitutivos de violencia que generaron su desplazamiento y abandono de los predios. Una de los requisitos a resaltar para que quienes presentan las solicitudes de restitución de tierras deben constituir o de tener una relación con el predio a través de tres figuras:

- De la propiedad
- De la posesión
- O de la Ocupación

Además de ello, no existen otros trámites sumariales, básicamente lo que requiere la Unidad de Restitución de Tierras es que el usuario solicitante pueda indicar el predio con su matrícula, Número Catastral, con el nombre del Predio y de su ubicación en el Municipio, Corregimiento, Vereda, o Departamento. A partir de aquí se cuenta con funcionarios especializados para realizar el estudio previo.

Una vez se recibe la solicitud de Restitución, la unidad cuenta con un ingeniero catastral quien se especializa o Ubica el polígono aproximado del predio que la persona viene a reclamar en Restitución.

Esa solicitud de Restitución es asignada a un Abogado, quien hace un estudio previo a unos requisitos que establece la ley para iniciar o no iniciar el proceso de restitución. He allí donde decidimos si el proceso inicia o no inicia. Un proceso de estos se inicia cuando cuenta con los hechos del abandono o despojo, se cumple con un requisito establecido en la ley, que es que el hecho debió de haber ocurrido o acaecido después del 1° de ENERO de 1991.

.

En este acápite, se observó que a pesar de que la ley 1448 del 2011 exige al Estado que adopte medidas especiales para las víctimas personas, grupos o comunidades, no es preciso su materialización de manera individual. Ciertamente, de las cinco víctimas entrevistadas, sólo una cumplió con el requisito cualificado de la restitución de tierras; tres se encuentran en inciertos desesperados y una fue susceptible de una “ayuda humanitaria” de un valor inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Por lo que los formalismos que expresan la manera de restituir la tierra a las víctimas, no se están cumpliendo a cabalidad.

- Restitución colectiva a las víctimas del conflicto armado.

Los formalismos, en cambio, del proceso de restitución de tierras de manera colectiva se realiza con caracteres más complejos, como fue en el caso de estudio de la sentencia 13-244-31-21-001-2013-063. Esta sentencia dejó demarcadas pautas sobre la línea jurisprudencia para la especialización en restitución de tierras, puesto que, se realiza un recuento histórico y se evalúa los requisitos de cada uno de los solicitantes que desean ser restituidos en su porción de parcela.

La restitución de tierras de manera colectiva opera en las comunidades aledañas o población común, en situación de que una gran extensión de tierras se encontraba asentada varias familias o sujetos cualificados, los cuales, una vez se dieron los hechos del desplazamiento, fueron obligados a dejar su lugar sin justa causa.

En el caso del Municipio del Carmen de Bolívar en la región de los Montes de María, los habitantes fueron víctimas masivas del desplazamiento forzado y con ello aumentó el desempleo en el municipio, además de los asesinatos selectos y la disputa por la tenencia de la tierra, por lo que hasta la fecha siguen existiendo amenazas a las víctimas. La ley 1448 del 2011 frente al cúmulo de garantías, no establece una protección o indagación para que la víctima goce de su sano juicio, lo que coloca en una situación crítica a las autoridades y fuerza pública.

Frente al trámite procesal de la ley 1448 del 2011 en relación con la restitución colectiva, existen falencias con la protección a las comunidades. Fue evidente el vacío material ante el acompañamiento que se le debe realizar a las víctimas comunitarias, sobre todo brindarle protección especial debido a su sometimiento a estos trámites.

Respecto a este punto, se llegó a una conclusión negativa por la manera colectiva de restituir las tierras y brindar garantías. Evidentemente, la ley 1448 del 2011 marca un tipo de justicia rogada ante las víctimas del conflicto armado, que, con ocasión del

conflicto armado, fueron despojadas y desplazadas sin culpa o justificación. Sin embargo, se vulneraron las garantías de protección del Estado para con sus habitantes, y la seguridad jurídica sólo es un dogma que cobijan varias normas del propenso logro político del eje nacional, incluyendo la ley 1448. Considero que se deben implementar las medidas estrictas de protección a las víctimas mediante amparos policivos especiales inmiscuidos en medidas cautelares de extrema urgencia al iniciar este tipo de procesos de restitución.

- Eficiencia

Previamente se referenció a la eficiencia como aquella capacidad de disponer de algo para conseguir el cumplimiento adecuado de una acción, gestión o procedimiento. En este caso, se estudió la eficiencia de los procesos de restitución de tierras en la ley 1448 del 2011 en el contexto temporal y espacial relacionado. Posteriormente ejecutando el estudio de caso se evidenció que la capacidad de recursos tanto temporales como presupuestales no alcanzó a cobijar todo el andamiaje de las medidas que concibió la ley de víctimas y restitución de tierras.

En cambio, la brevedad del tiempo para lograr la restitución efectiva de los procesos no se dio a cabalidad, puesto que cuatro de las cinco víctimas aún se encuentran en espera de la restitución o indemnización compensatoria que recibirían en un futuro incierto. Mientras que los recursos del presupuesto Nacional que deben destinarse para esto, se encuentran en otros propósitos cuestionados en los registros del balance económico del país.

Por esta razón, concibiendo con la discusión de resultados, existen aspectos a mejorar y mecanismos que en la vigencia futura de la ley se deben fortalecer para garantizar un mejor rendimiento en los procesos de restitución de tierras. No es menos cierto que el gasto presupuestal influye de manera negativa en la implementación de estas medidas, pero mientras no exista una coherencia armónica y no se tengan claro los vacíos normativos que deben estar dispuestos a llenar, no podrán ejecutarse a

cabalidad los compromisos que suscitó el congreso de la República para dar garantías constitucionales a las víctimas del conflicto armado.

- Eficacia

La eficacia se consideró en el presente estudio, como aquella capacidad que tuvo o tiene la ley 1448 del 2011 para producir el efecto deseado en relación con el proceso de restitución a las víctimas del conflicto armado. En este acápite se evaluó el resultado deseado y lograr de esta manera la efectividad deseada con la creación de esta norma correspondiente a la justicia transicional.

Guardando relación con la eficiencia que se manifestó anteriormente, la delimitación temporal del alcance conceptual “víctima” con ocasión del conflicto armado es cuestionado al ser excluyente y , por tanto se considera contraria a derecho la definición que toma el artículo 3° de la ley 1448 del 2011 en cuanto a la delimitación temporal, puesto que la historia del conflicto armado empezó desde 1967 con el surgimiento de Guerrillas y grupos Paramilitares al margen de la ley, según registros históricos del Centro de Memoria Histórica del conflicto armado. Quedando con ello esta duda de la delimitación ilógica del conflicto armado y la condición de víctima para ser declarada y participar en un proceso de Restitución de Tierras.

La eficacia pese a encontrarse establecida y justificada en la reparación integral y restitución de tierras de la ley 1448 del 2011, se encuentra demasiado condicionada a factores tergiversados en la realidad social, ocasionando retrasos en la restitución efectiva. Si bien pudo evidenciarse, una ayuda humanitaria inferior al salario mínimo legal mensual vigente no es digno para una víctima, lo que tampoco es una espera infinita en la culminación de un proceso que busca la restitución de su tierra, parcela u hogar. Existen falencias y vacíos normativos que se desajustan en la realidad y deben ser saneados en la vigencia futura de esta ley y demás que complementan.

De todas las anteriores secciones, se recalca que no existe efectivamente la garantía efectiva de restitución de tierras en los procesos tanto en el trámite administrativo como el judicial. Puesto que las formas (individual y colectiva) como se manejan los trámites son estáticos frente a un paradigma que exige constante movimiento y evolución.

Concluyendo así, se reiteran las palabras de Aristóteles al calificar al Estado como “Una sociedad perfecta” la cual está compuesta por personas intelectuales capaces de dar soluciones a los obstáculos que debe afrontar una comunidad, de esta manera, cada vez que se realice un análisis de la ley de víctimas, se debe buscar el sentido teleológico de la norma y así expresar su espíritu en cada palabra que se encuentra suscrita por el umbral del derecho. Los objetivos de las leyes son el trasfondo en el sistema base de un Estado Social del derecho, es por ello, que el derecho, así como la humanidad debe transformarse constantemente.

BIBLIOGRAFÍA

Acuña, J. A. (2013). *La Prescripción*. S.F: PDF.

AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA, 025 (Corte Constitucional de Colombia 2004).

agraria, O. d. (2015). *Informe sobre el estado actual de impactos del proceso de restitución de tierras en Montes de María*. Montes de María: Gobierno Nacional.

Álvarez, E. F. (2016). *Dilema de los segundos ocupantes en la restitución transicional de tierras en Colombia*. Bogotá: ResearchGate.

ARCE, J. P. (2013). *ESTANDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL*. BOGOTÁ: Revista de ciencias humanas.

ASCANIO, M. L. (2017). *REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL POSCONFLICTO*. SANTA MARTA: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

Bonilla, E. R. (2011). *Derecho de pertenencia*. Consejo Superior de la Judicatura.

C-577, C-577 (CC 2014).

CABRA, M. (2010). *INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO*. BOGOTÁ: TEMIS SA.

Carrillo, D. S. (2013). *Reparación Integral y responsabilidad civil*. Bogotá: UDEX.

Chaparro, M. A. (2012). *¿El derecho para quien? titularidad de la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Chávez, A. C. (2014). *Conflicto Colombiano y ley de víctimas*. Bogotá: Universidad Militar de Nueva granada.

CICR. (2008). *Definición del conflicto armado interno según el DIH*. Marzo: CICR PFD, Conv. Ginebra 1949.

Cohen, R. (2012). *Que nos enseñó el desarrollo de los principios rectores de los desplazamientos internos*. Bogotá: Revista. Migraciones Forzadas.

Conciliation Resources. (2016). *Historia: El conflicto Colombiano; Del enfoque militar al diálogo*. Reino Unido, Londres: Burghley Yard C.R.

Corte, 280 (Corte Constitucional 15 de Mayo de 2013).

DANE. (2019). El desplazamiento forzado . *DANE*.

Diario verdad abierta. (25 de Mayo de 2019). *CIDH, primera parada a la ley de restitución de tierras*. Obtenido de <https://verdadabierta.com/cidh-primera-parada-del-debate-por-el-fin-de-la-ley-de-restitucion-de-tierras/>

Edwin Fabián Linares Parra, C. A. (2015). *Análisis del desplazamiento forzado y restitución de tierras en Jiguamiandó y Curvaradó a la luz de la ley 1448 del 2011*. Bogotá: Universidad Libre.

El espectador. (09 de Junio de 2016). *Periódico El Espectador*. Obtenido de El espectador: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/midiendo-eficiencia-de-restitucion-de-tierras-articulo-636904>

Escobar, C. (12 de Julio de 2019). *DEJUSTICIA*. Obtenido de DEJUSTICIA: <https://www.dejusticia.org/el-congreso-debe-fortalecer-la-ley-de-victimas-y-restitucion-de-tierras-antes-de-que-expire-en-2021/>

- Espectador, E. (2019). *Condenan a la Nación por Masacre Paramilitar de El Salado*. Bogotá: El Espectador.
- Flórez, A. M. (2016). *Incidencia de la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras en el minicipio de Abrego*. Norte de santander, Ocaña: Universidad de Francisco de Paula de Santander.
- Forero, C. M. (2012). *La restitución de tierras en Colombia: Expectativas y retos*. Bogotá: Universidad Militar nueva Granada.
- Franco, J. D. (16 de Noviembre de 2015). *La paz pendiente en Los Montes de María*. Obtenido de PACIFISTA: <https://pacifista.tv/notas/la-paz-pendiente-de-los-montes-de-maria-la-violencia-que-se-fue-y-la-que-llego-parte-2/>
- García, M. F. (2018). *Eficacia de la jurisdicción de la restitución de tierras en la ciudad de Santiago de Cali*. Cali: Pontificia Universidad Javeriana.
- García, M. F. (2018). *Eficacia de la jurisdicción de restitución de tierras en la ciudad de Santiago de Cali*. Cali: Pontificia Universidad Javeriana.
- General, S. (2004). *El estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren los conflictos*. Oxford: ONU. Obtenido de <https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Glosario.aspx>
- González, A. S. (2012). *¿La vulneración del principio de confianza legítima genera responsabilidad administrativa en Colombia?* Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.
- Guglielmucci, A. (2017). *El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia*. Bogotá: Revista de Estudios sociales.
- Henríquez, M. L. (2017). *Reparación de las víctimas en el posconflicto de cara al acuerdo de paz con las FARC*. Santa Marta: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Imbett, N. (2015). *Fortalezas y debilidades del procedimiento de restitución de tierras en la ley de víctimas*. Santa Marta: Revista Vis Iuris.
- Imbett, N. (2016). *Fortalezas y debilidades del procedimiento de restitución de tierras contemplado en la ley de víctimas*. Santa Marta: Revista Vis iuris.
- Jaime, A. B. (2016). *La restitución de tierras, un asunto*. Bogotá: DEJUSTICIA.
- Maritza Pérez Amaya, J. W. (2018). *Principios Pinheiro aplicados al tratamiento de los segundos ocupantes en los procesos de restitución de tierras en Colombia*. Cúcuta: Universidad Libre.
- Maussa, Y. M. (2015). *La justicia transicional en Colombia como mecanismo esencial de restablecimiento de derechos frente a los antecedentes de Camboya y Sudáfrica*. Cartagena: Universidad de Cartagena.
- Montes, M. A. (2017). *Nociones de reconciliación en el marco de los mecanismos de justicia transicional en Colombia*. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de nuestra señora del Rosario, facultad de ciencias políticas y gobierno.
- Mozos, J. L. (2003). *El principio de Buena Fe*. Barcelona: Universidad Javeriana.

- ONU. (2005). *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*. Washington, Estados Unidos: ONU. Obtenido de <https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Glosario.aspx>
- Organización de Naciones Unidas. (2005). *Resolución 60/ 147 Principios y directrices*. Washington: ONU.
- otro, C. N. (2019). *Radiografía de la restitución de tierras en Colombia*. CIDH: Juristas, org.
- Pava, G. A. (2016). *La ley de víctimas: Un debate en torno a la inclusión y exclusión social*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Pava, G. A. (2016). *Ley de víctimas; un debate en torno a la inclusión y exclusión social*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Paz, O. d. (2016). *Preguntas y respuestas sobre el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición*. Obtenido de <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/preguntas-respuestas-victimas.html>
- Peré, E. M. (2018). *La restitución de tierras en Colombia y la reparación transformadora en la construcción de la paz: la experiencia en Santander desde la aplicación y efectividad de los fallos judiciales*. Santander: Universidad Industrial de Santander.
- Periódico el Espectador. (14 de Junio de 2009). *El espectador*. Obtenido de El espectador: <https://www.elespectador.com/articulo145887-concepto-de-reparacion-integral>
- Polo, M. R. (2017). *Reparación de las víctimas en el post conflicto de cara al acuerdo de paz con las FARC*. Santamarta: Universidad Cooperativa de Colombia.
- PORTAFOLIO. (28 de Agosto de 2019). *PORTAFOLIO*. Obtenido de ¿Se está gestando un nuevo conflicto armado?: <https://www.portafolio.co/tendencias/los-peligros-de-un-nuevo-conflicto-armado-en-colombia-533018>
- Restitución de tierras, C-795-2014 (Corte Constitucional 30 de Octubre de 2014).
- Ross Leidy Troncoso Olaya, Y. C. (2017). *La restitución de tierras y los segundos ocupantes de buena fe*. Villavicencio: Universidad de Santo Tomás.
- Rozo, R. R. (2016). *La micro focalización en la restitución de tierras en Colombia*. Bogotá: Universidad Militar de Nueva Granada.
- Salazar, J. C. (2012). *Preguntas frecuentes sobre la restitución de tierras en la ley de víctimas*. Bogotá: unidad administrativa de gestión de restitución de tierras despojadas.
- Salazar, S. (06 de Marzo de 2019). *ColombiaCheck*. Obtenido de Colombia Check: <https://colombiacheck.com/investigaciones/explicador-que-es-un-conflicto-armado-interno>
- Salgado, A. M. (2011). *Análisis del impacto de las políticas públicas de la ley de víctimas y restitución de tierras; ley orgánica de ordenamiento territorial frente a la reparación y restitución de las víctimas de la región de los Montes de María*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

- Salgado, A. P. (2011). *víctimas y restitución de tierras; Ley orgánica de ordenamiento territorial frente a la reparación y restitución de las víctimas de la región de los Montes de María*. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Sanabria, C. M. (2018). *La reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco de justicia transicional*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Sanabria, C. M. (2018). *La reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco de la justicia transicional*. Madrid : Universidad Complutense de Madrid.
- Sebastián Gil Álvarez, L. O. (2011). *Análisis de la incidencia de la ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras en el desarrollo rural, a partir de la aplicabilidad jurídica y económica en los municipios de cáceres, Taraza y Caucasia perteneciente al bajo cauca antioqueño*. Bogotá.
- Sentencia C-250-2012, 250 (Corte Constitucional Marzo de 2012).
- Silva, A. A. (2016). *forzosamente, nstrumentos jurídicos para la protección y restitución de tierras despojadas o abandonadas*. USTA.
- T-281-2007, Corte Constitucional (2007).
- Tafur, E. F. (2014). *La restitución constitucional de tierras en contextos de conflicto: Experiencia de Colombia y Guatemala*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Tafur, E. F. (2016). *El dilema de los segundos ocupantes en la restitución transicional de tierras en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- TEDC, 028- 2014 (TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS 2014).
- Triana, E. A. (2017). *Análisis del enfoque de nueva ruralidad como modelo de desarrollo e instrumento para la construcción de paz en Colombia*. Bogotá: Universidad de LA SALLE.
- Tulia Moreno, J. L. (2016). *Restitución de tierras en Colombia: Análisis y estudio de casos*. Bogotá: GIZ y Cine/ PPP.
- Urrego, G. (2016). *LEY DE VÍCTIMAS: UN DEBATE EN TORNO A LA INCLUSIÓN Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL* . Bogotá: Universidad Católica.
- V., F. V. (2014). *Manual de dercho Penal*. Bogotá.
- Vergel, G. H. (2016). *La reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en la región del Catatumbo: Análisis en el marco de la ley 1448 del 2011*. Ocaña, norte de santander: Universidad Francisco de Paula de Santander.
- VERGEL, G. M. (2016). *La reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en la región del Catatumbo: análisis en el marco de la ley 1448 de 2011*. Norte de Santander, Ocaña: Universidad Francisco de paula de Santander.

ANEXOS

Los siguientes Anexos son aquellos documentos incorporados de carácter probatorio y eficaz. Los cuales permitieron al suscrito corroborar la información establecida en el Marco teórico y exaltarla en la parte social de esta investigación. De esta manera se presentarán como anexos todas las entrevistas realizadas a las víctimas del conflicto armado del Municipio del Carmen de Bolívar que sirvieron de base para el estudio de caso, los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras del Municipio del Carmen de Bolívar, la entrevista realizada a la procuraduría delegada en el Municipio descrito anteriormente y por supuesto, se entrevistó a un funcionario de la Alcaldía Municipal de Carmen de Bolívar para una mejor claridad en el tema.

De la misma manera se anexan los cuadros comparativos adyacentes a los antecedentes de la presente investigación, los cuales sirvieron de base para obtener una mayor claridad sobre el tema y la realidad social de las personas víctimas del conflicto armado.

ENTREVISTAS A LAS VÍCTIMAS

ENTREVISTA A VÍCTIMA No. 1

1. ¿Está conforme con la tierra que le dieron?

R/: A nosotros no nos restituyeron ninguna tierra. Esa tierra las dejó mi papá, nosotros la heredamos. Nadie se metió allí a robar. Nosotros nunca tuvimos problemas con nadie allí, hasta que un día “paracos” se metieron a pedir comida, de allí comenzamos a sentir miedo y nos fuimos de allí. Nada pasó. Sólo que los muchachos de la Restitución de tierras la inscribieron como tal.

2. ¿Está enterado de cómo puede obtener la restitución de las tierras despojados del conflicto armado? ¿Conoce del proceso de restitución?

R/: No estoy enterada e ignoro ese trámite.

3. Teniendo en cuenta su condición de víctima ¿El Estado además de la restitución de su tierra, que le garantiza formalmente?

R/: Nada. Yo nunca he ido en persona a las oficinas restitución de tierras. Una vez me citaron, pero yo estaba recién operada y no pude asistir, luego de allí mas nunca me llamaron a comunicar. Todo ese trámite lo realizaron terceros.

4. ¿Le están cumpliendo con las medidas de restitución?

R/: Lo único que me dieron fue dos ayudas humanitarias de CIENTO OCHENTA MIL PESOS CADA UNA (\$ 180.000 C/U) en dos partidas, para un total de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS APROXIMADAMENTE (\$360.000).

5. ¿Cómo fue esa Indemnización?

R/: Me llamaron de la oficina de víctimas a informarme que me iban a dar una ayuda humanitaria, que pasase en cierto día por allá. Luego de 4 meses me dieron la otra, y ya más nunca me dieron nada.

6. ¿Hace cuánto tiempo está buscando que el Gobierno nacional le asigne una nueva tierra para usted?

R/: No he buscado esa salida económica, solo la herencia que dejó mi padre y mi familia. Ya me resigné

7. ¿Hace cuánto adquirió su condición de víctima del conflicto armado colombiano?

R/: ¿Eso es de la resolución que me declaró víctima? Déjame recordar bien... 6 de junio de 2013. Fue cuando yo declaré y me dieron la calidad.

8. ¿Ya para ese entonces le habían asignado su parcela de tierra?

R/: La verdad No sé, nunca fui a eso. Siempre enviaba a terceros a gestionar eso.

9. ¿Nunca fue personalmente a gestionar su proceso de restitución de tierras luego de la declaración?

R/: No. Nunca fui. Iban mis hermanos "X" y "Y". Intermediarios.

10. ¿Ya le asignaron la tierra?

R/: Sí. Esas tierras están en propiedad de mi familia.

11. ¿Ha sido efectivo el proceso restitución de tierras que el conflicto armado arrebató de su dominio?

R/: Así como te digo. No ha sido efectivo como tal. No nos han tenido en cuenta en nada para mitigar ese dolor causado. Ni irnos a visitar para que haya un acuerdo de no violencia o algo así que garantice nuestra tranquilidad en esas tierras.

12. ¿Le han brindado garantías efectivas de reparación integral a la comunidad donde habita?

R/: No son temas de conversación que yo he tenido con los vecinos. Ignoramos todo acto de restitución que pretenda el gobierno.

13. ¿En qué consistió la medida de restitución a su comunidad?

R/: Los vecinos prefieren guardar silencio y no pedir nada. Varias personas que fueron víctimas las han asesinado por esos motivos.

14. ¿Ya le restituyeron las tierras a la comunidad de su sector?

R/: Alguno que otro, pero no a todos, los despojos ocurrieron individualmente.

ENTREVISTA A VÍCTIMAS

VÍCTIMA No. 2

1. ¿Está conforme con la tierra que le dieron?

R/: No. Desde mi desplazamiento, no me han dado la tierra de la que me despojaron. La verdad no quiero devuelta mi tierra, eso generaría problemas. Estoy mejor así. Sin embargo, no lo niego, estoy inconforme con eso.

2. ¿Está enterado de cómo puede obtener la restitución de las tierras despojados del conflicto armado? ¿Conoce del proceso de restitución?

R/: No estoy enterada. Nada. Han ido al terreno. Lo midieron, le tomaron fotografías y el estudio pertinente, colocaron unos papeles allí y *Adios te dijo Valentín*. No han hecho nada más.

3. Teniendo en cuenta su condición de víctima ¿El Estado además de la restitución de su tierra, que le garantiza formalmente?

R/: Pues la verdad es que no. Desde hace tiempo se puso eso en restitución de tierras y no han hecho nada, es decir, no estoy enterada de ese trámite formal de nada. Solo están listos para la foto y se van.

4. ¿Le están cumpliendo con las medidas de restitución?

R/: No están cumpliendo. Quedaron en ir a eso conceder ayuda y arreglarlo y nada.

5. ¿Hace cuánto tiempo está buscando que el Gobierno nacional le asigne una nueva tierra para usted?

R/: Mucho tiempo, desde comienzos del año 2005. Pero ya yo no quiero tierra, estoy muy vieja y me gustaría quedarme con lo poco que tengo y donde estoy ahora.

6. ¿Hace cuánto adquirió su condición de víctima del conflicto armado colombiano?

R/: Prácticamente cuando me desplazé. Desde el 27 de septiembre de 1999, de las Palmas Bolívar. A partir de allí materialmente adquirí mi condición de víctima del conflicto armado.

7. ¿Ya le asignaron su tierra?

R/: No y no quiero tierra.

8. ¿Ha sido efectivo el proceso restitución de tierras que el conflicto armado arrebató de su dominio?

R/: No precisamente el conflicto armado me arrebató esa tierra. Solo que la abandonamos a causa del mismo, pero sin despojo. Pero, en ello, no fue efectivo porque se han demorado demasiado al brindar tantas garantías.

9. ¿Le han brindado garantías efectivas de reparación integral a la comunidad donde habita?

R/: A la comunidad no. Sabemos lo que les pasa a los que hablan demasiado del tema.

10. ¿En qué consistió la medida de restitución a su comunidad?

R/: No es tema de conversación entre los vecinos.

ENTREVISTA A VÍCTIMA

VÍCTIMA No. 3

1. ¿Está conforme con la tierra que le dieron?

R/: No me han entregado tierra aún.

2. ¿Está enterado de cómo puede obtener la restitución de las tierras despojados del conflicto armado?

R/: No, no estoy enterado.

3. Teniendo en cuenta su condición de víctima ¿El Estado además de la restitución de su tierra, que le garantiza formalmente?

R/: Nunca he hablado de esos temas con los funcionarios.

4. ¿Le están cumpliendo con las medidas de restitución?

R/: Hasta el momento no me han brindado nada, a pesar de que acabo de iniciar ese proceso, no han declarado u ofrecido garantías.

5. ¿Hace cuánto tiempo está buscando que el Gobierno nacional le asigne una nueva tierra para usted?

R/: Desde el año 2013 estoy tramitando esa “solicitud” y nada. No he recibido respuesta hasta el momento.

6. ¿Hace cuánto adquirió su condición de víctima del conflicto armado colombiano?

R/: Desde el año 1999, en Las Palmas Bolívar.

7. ¿Ya le asignaron su tierra?

R/: No me la han asignado. Apenas estoy iniciando el proceso, espero contar con todas las pruebas.

8. ¿Espera una respuesta positiva de ese trámite de solicitud de restitución?

R/: Espero Obtener una respuesta positiva, por supuesto.

9. ¿Ha sido efectivo el proceso restitución de tierras que el conflicto armado arrebató de su dominio?

R/: Hasta el momento no me han restituido tierra. Apenas la solicitud se está iniciando. No puedo decir si es efectivo o no.

10. ¿Lo han llamado o le han brindado garantías al pendiente de usted? ¿Siente que ha sido escuchado por el Estado o no?

R/: No me he sentido escuchado como tal, puesto que no me han llamado de la oficina de restitución de tierras.

11. ¿Le han brindado garantías efectivas de reparación integral a la comunidad donde habita?

R/: No se habla de esos temas por temor a amenazas y todas esas cuestiones que suceden en todo el país de asesinatos y eso.

12. ¿Considera usted que se están brindando las garantías constitucionales y procesales pertinentes? O ¿Falta mayor cobertura de esta ley? ¿Se debe reformar?

R/: Ha sido muy lenta, es seguro. Considero que se debe prorrogar y deben de haber otras cuestiones que deben favorecer mucho más a la víctima en este trámite.

ENTREVISTA A VÍCTIMA No. 4

1. ¿Está conforme con la tierra que le dieron?

R/: No he recibido nada. Ni ayuda, ni dinero ni nada.

2. ¿Está enterado de cómo puede obtener la restitución de las tierras despojados del conflicto armado?

R/: Sí, todo me lo han explicado allá en la oficina esa, de buena fe. Pero nunca me han dado nada.

3. Teniendo en cuenta su condición de víctima ¿El Estado además de la restitución de su tierra, que le garantiza formalmente?

R/: No me han garantizado nada.

4. ¿Se ha acercado a las oficinas que gestionan esto?

R/: Siempre que voy me dicen que regrese dentro de un mes, dos meses etc. No me han resuelto nada.

5. ¿Le están cumpliendo con las medidas de restitución?

R/: No me están cumpliendo con nada.

6. ¿Hace cuánto tiempo está buscando que el Gobierno nacional le asigne una nueva tierra para usted?

R/: Desde el año 2011. Metí papeles y no me han resuelto.

7. ¿Hace cuánto adquirió su condición de víctima del conflicto armado colombiano?

R/: En el año 2011, en el mes de agosto. Siempre que voy me dicen que regrese.

8. ¿Ya le asignaron su tierra?

R/: Mi tierra, Mi casa, yo tenía un ranchito aquí en las afueras del municipio y me lo quemaron en las horas de la madrugada. Pero yo Gracias al Cielo, no me encontraba dentro. Me enteré después del incidente. No me han asignado tierra desde ese incidente.

9. ¿En que parte está ubicada esta casa que incendiaron grupos desconocidos?

R/: En el Carmen de Bolívar, en la carretera Troncal. El Barrio La victoria.

10. ¿Ha sido efectivo el proceso restitución de tierras que el conflicto armado arrebató de su dominio?

R/: Por supuesto que no. A mí no me han dado tierra, he sido despojada de mi *ranchito* pero no me han dado nada. Intento meter los papeles para ver si por lo menos me dan algo por ese incendio, pero nada.

11. ¿Lo han llamado o le han brindado garantías al pendiente de usted? ¿Siente que ha sido escuchado por el Estado o no?

R/: Sinceramente No. He llevado mucho papel a esa oficina de restitución y a la Unidad de víctimas, pero ninguna respuesta me da. Tengo 71 años, ya me siento vieja y no estoy para estos trotes.

12. ¿Le han brindado garantías efectivas de reparación integral a la comunidad donde habita?

R/: A todos les ha llegado ayuda humanitaria, no lo niego y a mi no me ha llegado nada. No me han llamado por teléfono o me han citado.

13. ¿En qué consistió la medida de restitución a su comunidad?

R/: A ellos no les restituyeron tierras del despojo, solo les dieron una indemnización al llamarlos y citarlos. La ayuda humanitaria de la que hablamos, se las da periódicamente.

14. ¿Ya le restituyeron las tierras a la comunidad donde habita?

R/: A la mayoría les están indemnizando. Una ayuda que consiste en millones. Recibieron dinero, pero no tierras.

15. ¿Qué piensa usted que puede mejorar el Gobierno Nacional con el tema de la reparación Integral y los procesos de restitución de tierras?

R/: Mejorar un poco en el trámite y papeleo. Porque siempre que voy, es un trámite sumarial más, dos veces me cambiaron de resolución por problemas gramaticales y eso.

ENTREVISTA A VÍCTIMA

VÍCTIMA No. 5

Descripción: *a esta víctima ya le restituyeron su tierra.*

1. ¿Está conforme con la tierra que le otorgaron?

R/: Sí, porque efectivamente la restitución como tal fue del mismo predio de la misma tierra que nosotros teníamos y por la cual desde inicio del proceso fue por la que luchamos. Entonces sí, hay satisfacción porque exactamente fue la misma cantidad de tierra que nosotros teníamos, todo conforme allí lo teníamos establecido.

2. Teniendo en cuenta su condición de víctima ¿El Estado además de la restitución de su tierra, que le garantiza formalmente?

R/: La ley como tal, la 1448 trae la ampliación de las medidas, no solamente era recibir la tierra como tal y ya. En mi caso particular, la recibimos y se nos socializó estas otras medidas. Pero te cuento, como todas las cosas que ocurren aquí en este país, se empieza con una buena implementación, socialización, hubo una cantidad de funcionarios que estuvieron al servicio y pendientes siempre al inicio del proceso.

Luego todo fue mitigándose, ya después nos dieron un acompañamiento psicosocial que empezó efectivamente pero no se materializó en realidad. Hubo otras medidas como que, en la parte de salud, seguridad. Nosotros nunca vimos, por ejemplo, los agentes del Estado en el Predio como tal brindando seguridad o preguntando si quiera como nos sentíamos, no. Y nosotros sabíamos que eso estaba establecido allí como una medida de la ley pero que se haya implementado o hecho efectivo no como tal, no.

Ese es uno de los factores que quedaron pendientes, porque nos entregaron la tierra, pero después de esto, lo demás quedó inconcluso.

3. ¿No le terminaron de cumplir esas medidas en ningún momento?

R/: No. Efectivamente no se dieron como se encuentra establecido en la ley. Nos devolvieron la tierra, eso sí, y hubo la implementación de una Unidad Productiva que también quedó inconclusa y hasta allí no más.

4. ¿Tuvo acompañamiento particular de un abogado externo a los funcionarios públicos de la Unidad de Tierras?

R/: No, nosotros iniciamos un proceso. Cuando ello si buscamos el apoyo de alguien particular, pues para que nos indicara como iniciar el proceso como todo esto, pero ya después el mismo proceso se dio solo.

5. ¿Hace Cuánto tiempo está buscando que el Gobierno Nacional le restituya su tierra o que le asignara una nueva para usted?

R/: ¿El tiempo que duramos en ese proceso?... Bueno nosotros duramos alrededor de unos cuatro años. Cuando nosotros empezamos el proceso, la ley no la habían sancionado como tal y nuestro proceso tenía algunas particularidades, entonces íbamos de oficina en oficina aquí en el municipio, nos cerraban las puertas.

En fin, luego de que ya supimos que se dio el tema de la ley, ya sentimos como un respiro porque obviamente nosotros sabíamos que teníamos todas las garantías o al menos todas las posibilidades de recuperarlo porque efectivamente había existido una vulneración grandísima de derechos.

6. ¿Ha sido efectivo ese proceso de restitución de tierras como tal que usted cursó?

R/: Pues, la restitución del predio se generó como tal efectivamente, y en ese sentido a nosotros no nos han ido a molestar más allá y todo eso.

7. ¿Con que no se siente satisfecha de este proceso de restitución de tierras?

R/: No solo yo, sé que muchas de las personas que estaban en este proceso también. Con la implementación de esas otras medidas. Por ejemplo, allí estaba establecido la constitución de una vivienda. Y efectivamente a nosotros nos construyeron una vivienda de 4X4. Osea, hay algunas cosas que están dentro de la implementación que yo creo que se tienen que mirar muy muy a fondo porque las condiciones de nosotros acá en la costa, no son las mismas de otros lugares. Entonces por ejemplo esa casa fue construida con una infraestructura que no es la adecuada para acá, con estas temperaturas que se dan a veces, y en el sector donde estamos; hay que tener en cuenta que esta es la ruralidad. Eso, por un lado.

Por otro lado, que no hubo un seguimiento puntual, a mí me tocó por ejemplo parar la construcción de una vivienda rural en su momento, porque los materiales no eran los adecuados, porque no había un seguimiento efectivo. Es decir, contratan con una constructora y dejan que la constructora haga lo que ellos quieran. No hay un seguimiento efectivo. Pero, al momento de exigirle a la víctima como tal, entonces allí sí.

Yo creo que hay muchas falencias en la implementación de la ley. Efectivamente entregan los predios y en un comienzo van y visitan. Allí los funcionarios que cumplen esta labor, con su trabajo, con todo esto, pero ya dentro del acompañamiento que se requiere a la víctima como tal, no lo hay. Personalmente me siento insatisfecha con esta implementación, así como se ha dado.

Sé también que la comunidad en general se siente insatisfecha con esta implementación de la ley porque en algún momento he conversado con muchas víctimas, así como yo, muchas personas restituidas y sé que hay ese tipo de insatisfacción.

ENTREVISTA AL DR. JOHN ORTIZ. OFICINA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL CARMEN DE BOLÍVAR. 2020.

Encargado del trámite administrativo y jurídico en la oficina de restitución de tierras en el municipio del Carmen de Bolívar. Quien atendió la presente entrevista.

1. ¿Qué proceso debe realizar la víctima para que el Estado le restituya la tierra?

R/: Bueno, Las personas víctimas del conflicto Armado no solamente en el Carmen de Bolívar ni en los Montes de María sino de manera general, deben realizar una solicitud de restitución de Tierras ante las diferentes direcciones territoriales que se encuentran en todo el país. Los usuarios se acercan a la Unidad de Restitución de Tierras a manifestar a una persona de atención al ciudadano, cuáles fueron los hechos victimizantes que generaron su desplazamiento y abandono de los predios. Es importante resaltar que quienes pueden presentar las solicitudes de restitución de tierras deben de tener una relación con el predio a través de tres figuras:

- De la propiedad
- De la posesión
- O de la Ocupación

No existen unos requisitos de las solicitudes de presentación para iniciar el trámite administrativo de restitución de tierras o ningún tipo de documentación. Básicamente lo que pide la Unidad de Restitución de Tierras es que el Usuario o el Solicitante pueda indicar el predio con su matrícula, Número Catastral, con el nombre del Predio y de su ubicación por Municipio, Corregimiento, Vereda, y Departamento que en este caso sería Bolívar.

Una vez se recibe la solicitud de Restitución, la unidad cuenta con un ingeniero catastral quien se especializa o Ubica el polígono aproximado del predio que la persona viene a reclamar en Restitución.

Esa solicitud de Restitución es asignada a un Abogado, quien hace un estudio previo a unos requisitos que establece la ley para iniciar o no iniciar el proceso de restitución. He allí donde decidimos si el proceso inicia o no inicia.

¿Cuándo se inicia un proceso de restitución? Un proceso de estos se inicia cuando cuenta con los hechos del abandono o despojo, se cumple con un requisito establecido en la ley, que es que el hecho debió de haber ocurrido o acaecido después del 1° de ENERO de 1991.

TERCERO. Que la persona sea Poseedora o propietaria u ocupante. Estos son los tres requisitos que tienen que tenerse en cuenta para eso.

¿Cuándo no se inicia el proceso de restitución de carácter administrativo? Cuando la persona incumple en alguno de estos tres requisitos que ya mencioné.

2. ¿Qué condiciones debe cumplir la víctima para que el Estado le restituya la tierra?

R/: Si bien la Unidad de Restitución de Tierras, tiene por creación la Unidad de Restitución de Tierras, nosotros no somos la entidad que restituye la tierra como tal. Somos un medio entre el Usuario, víctima- campesino con los Juzgados y los Tribunales Especializados, creados específicamente para este tipo de procesos. Porque aquí en la Unidad se lleva un proceso Administrativo, que culmina con la Inscripción en el Registro de Tierras que es el registro que administramos nosotros como entidad por creación Constitucional.

Pero posterior a ello, se presenta una demanda o “Solicitud” ante los juzgados especializados en restitución de tierras que les hacen mediante un trámite, que, si bien es ordinario, es considerado especial y a través de una Providencia del juzgado o Tribunal determinan si el predio se restituye o no se restituye.

No seríamos nosotros entonces la entidad que determina si se restituye o no se restituye un predio.

3. ¿En qué consiste la restitución efectiva que el Estado le hace a las víctimas?

R/: Bueno, la Unidad de Restitución de Tierras fue una entidad creada a través de la ley 1448 del 2011 por el Congreso, la cuál tenía como fin especial que nuestros campesinos que fueron despojados, obligados a abandonar los predios por motivos del conflicto Armado regresaran a sus tierras, pero además de que regresaran a sus tierras recibieran una serie de beneficios que como Estado puede otorgar.

Nosotros entendemos por Restitución Efectiva, no sólo hacer la entrega del Predio una vez que se profiere la Sentencia de entrega por parte del Tribunal, sino que ese beneficiario de restitución de esa sentencia goce de los beneficios como por ejemplo de un proyecto productivo que se administra a través de un dinero o un recurso que se le entrega al solicitante para que esa persona pueda levantar (EN PALABRAS TEXTUALES) ese predio que en algún momento tuvo que abandonar o salir de él.

Hay un acompañamiento técnico, por parte de los profesionales que implementan los proyectos productivos, de igual manera, se les brinda un apoyo que en este caso está encargado el MINISTERIO DE AGRICULTURA frente a una conclusión de vivienda rural que se hace en el predio que se entrega en restitución. Entonces existen una serie de beneficios como el acceso al SENA, ICETEX, educativos, que no solamente el solicitante sino el núcleo familiar pueda acceder, a cursos de capacitación sobre el campo o sobre el tema que ellos consideren importantes.

La idea de esto es que las personas que fueron desplazadas de los predios, se sientan en total y plenamente satisfechos y puedan gozar de su tierra, levantarla de nuevo porque es el objetivo de todo esto, por parte del Estado Colombiano.

4. ¿Piensa usted que este proceso es rápido y eficiente?

R/: Antes de responderte la pregunta. Puedo decirte que este es un proceso bastante complejo, porque nosotros no trabajamos solos, sino que trabajamos armónicamente con todas las entidades que hacen parte del sistema de protección a víctimas, es decir, aquí se hace un procedimiento administrativo y se solicita información a la fiscalía, Justicia y Paz, a las Alcaldías. Entonces a veces hay demoras en las contestaciones de esas entidades porque nosotros debemos recaudar unas pruebas para tomar la decisión de si inscribimos o no la solicitud en el Registro de Tierras, por esto a veces hay demoras, procesos mucho más complejos que otros, procesos que de manera probatoria están muy fuertes, donde el mismo solicitante trae mucha documentación, donde nos demuestran muchos hechos donde ellos manifiestan su solicitud y la idea de esto es no caer en la Arbitrariedad de Inscribir o no a las personas en el registro de Tierras, sino que la valoración probatoria sea buena y clara para que nosotros convenzamos al juez.

Para mí, desde mi punto de vista es un proceso rápido y eficiente, pero más que eficiente es un proceso muy completo que no deja abierta ninguna puerta de duda ante las decisiones que se toman en las diferentes entidades territoriales.

5. ¿Cuántas personas que han solicitado la restitución de tierras y a cuantas se le han otorgado?

R/: Acá en los Montes de María existen alrededor de 360 sentencias de restitución de tierras a favor de los solicitantes, algunas colectivas, otras individuales. No tengo la cifra en papel exacta de a quien se les dio, sino que se han hecho sentencias de

entrega de predios. Te puedo afirmar que, de esas 360 Sentencias de restitución, un aproximado del 80% se le ha hecho su entrega y su goce efectivo y se encuentran en desarrollo los cumplimientos de las órdenes judiciales que te manifesté previa entrevista.

6. ¿Ha sido oportuna la oficina de Restitución de tierras en el municipio a la hora de considerar las medidas previas?

R/: Pues nuestra unidad de restitución de tierras Dirección Bolívar si ha sido oportuna frente a las medidas otorgadas a cada uno de los beneficiarios del proceso de restitución, como te explicaba anteriormente, nosotros somos la representación judicial o jurídica frente a los juzgados de restitución de tierras, por tanto estamos obligados normativamente a acompañar a las víctimas no solamente en la presentación de la solicitud ante el juez sino en el cumplimiento de cada una de las medidas que disponen los jueces y los tribunales.

Entonces considero que, si hemos sido oportunos, ahí de pronto algunas medidas que de pronto no se han podido cumplir, pero no es por arbitrariedad o por omisión de la Unidad sino como te explicaba que hay casos mucho más complejos, por ponerte un ejemplo, un juez ordena una compensación al solicitante o un predio de condiciones o similares características. Y de pronto le mostramos al solicitante dos o tres predios y el solicitante dice que no son de su agrado, entonces eso nos limita o nos retarda esa acción oportuna que en la mayoría de los casos siempre tenemos.

7. ¿Considera que esta ley debe permanecer en mayor tiempo de vigencia que el que estipuló el congreso de la república?

R/: Como es claro, las promulgaciones y vigencia de las leyes son funciones del congreso, nosotros como unidad de Restitución tenemos una vigencia hasta junio del año 2021. Existe en conocimiento una demanda que allegó para prorrogar esta ley.

En una opinión muy personal, considero que la ley no debía tener un término de vencimiento tan corto ya que Colombia es un país con mucha violencia histórica y más víctimas por el conflicto armado interno y el término de vigencia de la ley al 2021 parece imposible determinar que se lograran atender o beneficiar a todos los solicitantes del proceso de restitución.

Entonces nosotros estamos a la espera de que el órgano principal o máximo encargado de prorrogar esto, prorrogue la ley para así darle cumplimiento a cada uno de los procesos que tenemos todavía en estrados judiciales y en etapa administrativa ante la unidad de Restitución de Tierras.

8. ¿Cómo el Estado restituye las tierras en el marco del derecho Sucesoral?

R/: Si bien es cierto, las unidades de Restitución de Tierras se tramitan a solicitud de los titulares o de las personas que estuvieron al frente de cada uno de los predios, también es cierto que el artículo 81 de la ley 14448 del 2011 establece que hay algunos legitimados para presentar la acción de restitución. Esta se da cuando la persona solicitante ocupante del predio fallece y sus hijos o su compañera pueden hacer la solicitud de restitución. Eso debe ser claro desde la solicitud de restitución de tierras porque cuando llegue a la parte judicial, la Unidad de Restitución debe explicar y debe colocar en una pretensión ante el juez de restitución que se trata de una masa sucesoral o que se trata de la compañera o cónyuge, el cual el titular se encuentra fallecido y que por ende están legitimados para reconocer esa porción hereditaria a esa persona.

En el caso de legitimados, cuando existen hijos, ellos entran a asumir la cuota parte hereditaria de todos ellos. Ahora bien, si quien hace la solicitud es la compañera o compañero o estuviese uno de los dos titulares fallecidos, debe existir una pretensión donde la Unidad solicita en la Defensoría, que, en el marco establecido en la Constitución, deben hacerle la sucesión y reconocimiento de manera gratuita. Es decir, el juzgado o el Tribunal Ordena a la defensoría del pueblo que haga la

sucesión al beneficiario de restitución y que a cada quien se le entregue su porción según corresponda en lo establecido en la ley sucesoral.

9. ¿Qué significa la restitución de las tierras de manera individual y colectiva?

R/: Se le denomina solicitud individual a las solicitudes de restitución que realiza el campesino de manera individual. Es como su nombre lo establece, no existe de pronto un conglomerado o un grupo de personas o una parcelación que solicite un predio en restitución. Podemos tomar esa denominación.

Ahora bien, la ley 1448 del 2011 tiene unos decretos reglamentarios, uno de ellos es el que reglamenta las solicitudes colectivas de restitución de tierras. Que van enfocadas más que todo a las etnias, a los Wayuu, a los consejos comunitarios, a las negritudes, a los AFROS, etc. Entonces las solicitudes colectivas de restitución tienen un decreto reglamentario y requisitos específicos para que esas personas en grupo tengan un representante del consenso, consejo o de cabildo, teniendo en cuenta cual sea la Etnia para colocarle un nombre y se tramita de una manera diferente o especial al proceso individual de la ley 1448 del 2011.

10. ¿Cuál es su posición respecto a los vacíos normativos de la ley 1448 del 2011 como lo son los segundos ocupantes?

R/: Inicialmente, la ley 1448 del 2011 dejó como tal un vacío normativo frente al tema de los segundos ocupantes. Posterior a ello, existen dos o tres sentencias que hablan del tema, una es la C-330 del 2016, que regularon ese tema de los segundos ocupantes porque lo que se pensó inicialmente con nuestro legislador fue que al promulgar una ley, íbamos encontrar en los predios a personas que pertenecieron a

un grupo militar o guerrillero al margen de la ley. Pero encontramos en la realidad que hay muchas personas campesinas que se encuentran enfrentados entre ellos mismos que son víctimas. Entonces lo que se reguló por la ley 1448, con esa ley jurisprudencial de la corte es el trato de dar a esas personas que se denominan “Segundos ocupantes”, las cuales son personas que no tuvieron directamente una afectación o influyeron en el desplazamiento o abandono del predio por parte del solicitante, que no eran de la zona, que son ajenos al desplazamiento, que realizaron un negocio jurídico claro, lícito, que no estuvo permedado ni viciado y para esas personas debe existir o existe a través del fondo de la Unidad de Restitución de Tierras una serie de compensaciones en dinero o en predios equivalentes al que estaban ocupando o compraron en el momento de la salida o el abandono de nuestros beneficiarios.

Pienso que está bastante regulado el tema de segundos ocupantes y opositores de buena y mala fe, que también nos falta, pero esas son regulaciones que debe hacer la Corte.

NOMBRE DE LA FUNCIONARIA: MARIA EUGENIA LORA

Asesora de la procuraduría delegada para el seguimiento al acuerdo de Paz. Hacen un acompañamiento preventivo y control de la Gestión sobre la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto y la implementación del Acuerdo Final.

1. A su criterio como servidor(a) público(a). ¿Que esperó lograr el Gobierno Nacional con la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras en el marco de la reconciliación y paz?

R/: Buscaba más que todo generar estos procesos que fueron a causa del despojo de grandes empresas y poder restituir a campesinos, al marco del conflicto armado, de estos grupos guerrilleros o paramilitares.

Para el caso de Montes de María, sabes que funcionó el bloque HEROES. Y Básicamente lo que se buscaba con el proceso de restitución era eso, restituir todos esos bienes de los que fueron despojados por ocasión del conflicto armado. Víctimas que tuvieron que desplazarse forzosamente y que habían abandonado sus territorios, ese era exactamente en un principio el objetivo que tenía el gobierno Nacional para poder garantizar el goce efectivo de derechos partiendo de que la tierra es un componente fundamental para poder restituir los derechos de las víctimas de la violencia.

2. La efectividad de la ley 1448 del 2011 y los procesos de restitución de las víctimas se están cuestionando por parte de los habitantes del municipio. ¿A qué se debe esto?

R/: Básicamente era porque se pensaba en un principio que la ley de restitución iba a poder generar fallos o sentencias en contra de estos victimarios o en contra de empresas que habían actuado a favor de ello para poder hacer digamos todo un proceso, pues de la restitución de la tierra. Pero, digamos que lo que ha sucedido son enfrentamientos entre campesinos víctimas del conflicto armado, que no ha sido grandes latifundios sino pequeñas parcelas de tierras donde se agruparon varios campesinos, de pequeños propietarios y eso ha ocasionado una conflictividad social.

Entonces pensaría probablemente que ha sido por estos enfrentamientos generados por víctimas que con mucho esfuerzo han creado, han hecho mejoras y han intervenido en estas tierras.

Eso es entonces lo que ha pasado en varios municipios como el Carmen de Bolívar.

3. Entre las medidas de Reparación se encuentra la restitución. ¿Esta medida implica además planes de capacitación y búsqueda de un empleo?

R/: La restitución además de ser buscada para los predios también buscamos que sea por parte del trabajo, al tema de generación de ingresos. Más sin embargo, lastimosamente en la política pública, existe un vacío en generación de ingresos, incluso a pesar de que se entregan proyectos de ganadería, proyectos productivos en agropecuaria, agrícola, en nuestro territorio hay una gran deficiencia en la reproducción de la tierra y también en los mecanismos de comercialización. Esto hace que una vez se implemente algún proyecto productivo, por el tema de las sequías, se vean afectados estos proyectos y no puedan tener la superación de la vulnerabilidad que es lo que fundamentalmente busca la intervención del Estado, poder acompañar en esta superación de la vulnerabilidad y restablecer los derechos que fueron afectados por el conflicto armado.

Entonces, si bien está contemplado como una medida de restitución, digamos que se requiere que entidades ayuden, tales como el ministerio del trabajo, promoción social, etc, puedan generar un proceso de articulación para que finalmente haya un acompañamiento y que las víctimas puedan acceder a un empleo o generar sus propios ingresos a partir de lo que uno sabe hacer, de su vocación productiva.

4. ¿Considera que esta ley debe permanecer en mayor tiempo de vigencia que el que estipuló el congreso de la república?

R/: Lo que se está buscando desde la procuraduría delegada, es que el gobierno pueda prorrogar la ley por 10 años más y el presidente DUQUE lo anunció. Porque básicamente llevamos ya, prácticamente el cumplimiento del término de vigencia y no se ha logrado todo el tema de acompañamiento para lograr la atención y reparación efectiva de las víctimas entonces esto hace que se requiera su prórroga. Pero más allá de esto, se requiere analizar cuáles han sido los mecanismos utilizados por las entidades en materia de articulación, de coordinación para lograr la atención efectiva de las víctimas porque por más esfuerzo que ha demostrado el gobierno nacional. Hay que buscar mecanismos donde las mismas entidades puedan revisar los procesos de las víctimas y no sea de manera aislada porque se están desperdiciando esfuerzos.

Por otro lado, es fundamental también, revisar el presupuesto destinado para las víctimas, en materia de indemnización, de lo que va la ley han sido aproximadamente un millón de víctimas de cerca de Ocho millones de víctimas según el registro único de víctimas que han sido indemnizadas, esto requiere también una revisión del presupuesto en el plan nacional de desarrollo.

5. Realidad social: Opinión personal sobre los obstáculos para el cumplimiento de la ley 1448 del 2011 y los procesos de restitución de tierras.

R/: Desde la parte preventiva se está haciendo un acompañamiento a las comunidades y a las víctimas que directamente tienen estos procesos para que puedan sistematizarse de manera colectiva. Lo que se está buscando es una estrategia de colectivización para gestionar en esos fallos cuales son las medidas que hasta la fecha se han cumplido y cuáles no, en aras de poder lograr una incidencia.

Por ejemplo, en el caso del Carmen de Bolívar, poder reunir cuales son todos esos fallos que hay, poder sistematizarlos e identificar de todos estos fallos que es lo que se ha logrado, que falta aún por implementar y frente a eso hacer el seguimiento correspondiente a las comunidades. Nos hemos dado cuenta que hay un gran rezago con las comunidades, a la respuesta que tiene que dar la agencia de tierras con relación a estos predios de segundos ocupantes por ejemplo que debe brindar y que a la fecha no se ha dado. Lo que se busca inicialmente es poder sistematizar toda esta información y posteriormente con las entidades que tiene responsabilidades directas y poder lograr toda esta incidencia desde el control preventivo y en el caso de que no lo cumplan, se harán sancionados en la función disciplinaria.

6. ¿Considera que la ley 1448 del 2011 si ha servido a su propósito y los principios que compete a esta ley?

R/: Yo puedo decirte que la ley 1448 del 2011 permitió que las víctimas fueran puestas en el centro de un dialogo social. Porque históricamente las víctimas han sido una población marginada siempre ha prevalecido la visión del victimario sobre una víctima vencida como los *pobrecitos*. Esta ley le da una misión las víctimas como sujeto político transformadores, da una mayor fuerza a los espacios de participación como las mesas de víctimas municipales, departamentales y la nacional, genera toda una serie también de generalidades como lo es la Unidad de Restitución de restitución de tierras, la Unidad de Víctimas que anteriormente era Acción Social. Y genera todo un proceso de transformación.

Desafortunadamente nos hemos quedado cortos en el tema de asignación presupuestal, el presupuesto es fundamental para poder desarrollar todas estas medidas de Acción que se pretendían para el programa de acción y reparación a las víctimas, como estos presupuestos no son suficientes. Como no hay otro tipo de recursos, distinto al departamental, distinto al del municipio, son los mismos recursos que deben focalizarse. Entonces aquí se requirió el tema del presupuesto, poder ser más ambiciosos con el tema de los aportes que se han dado por parte del gobierno para el apoyo de la implementación de la política pública.

Lo otro tiene que ver con la voluntad de los entes territoriales, vemos algunas alcaldías y gobernaciones desconectados de la realidad con las víctimas del conflicto armado, como una carga, molestia, cuando no debe ser vista de esta manera, porque estamos viendo una necesidad de cumplimiento de sus derechos, si bien es cierto se han realizado algunas gestiones que plantea la Sentencia T-025, que aún persisten, y que pues la mayoría de personas tienen una generación de ingresos de lo cual se han quedado corto. Es necesario una normatividad y estrategias más efectivas para el cumplimiento del acompañamiento a las víctimas para poder superar esa etapa existencialista. Aún está en mayor productividad para las víctimas.

En el tema también de viviendas, ha sido otro de los componentes que ha quedado inconcluso en proyectos que aún no se han logrado implementar para procesos de reparación integral, que incluyan restitución de tierras en procesos como MAPUJAK. Uno encuentra unas viviendas mal hechas y abandonadas que no responden a todo este proceso de dignificación, siempre está el tema de la corrupción, que corroe la implementación de los acuerdos y políticas públicas en los manejos de los dineros y demás.

En el tema de las tierras ha sido muy limitado a pesar de que en el acuerdo de paz se establece la constitución de un fondo de tierras, eso va muy lento, la ANT se encuentra sin recursos también. Entonces la ley de víctimas es algo favorable para las víctimas, sin embargo, requiere adoptar mecanismos que puedan hacer reales todo eso que

está en la ley y para poder hacerlo también se requiere un Estado Más moderno, que renueve a sus instituciones y demás. El reto es inmenso, pero yo pienso que todos los pasos que se han dado, ha sido necesario, y hay que continuar.

Anexo No. IV: Entrevista a funcionaria de la alcaldía respecto al tema de víctimas en los Montes de María, Carmen de Bolívar.

FUNCIONARIA: DRA. MARQUEZA GONZÁLEZ.

CARGO: *Coordinadora del centro de convivencia y Atención a víctimas del conflicto Armado de la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar en la región de los Montes de María.*

1. A su criterio como servidor(a) público(a). ¿Que esperó lograr el Gobierno Nacional con la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras en el marco de la reconciliación y paz?

R/: Primero te digo, como servidora pública que Montes de María es una de las regiones más afectadas por el conflicto Armado y de manera específica en el municipio del Carmen de Bolívar fue uno de los lugares donde más se expulsaron, fueron afectados alrededor de cinco mil trescientas víctimas (5.300) de acuerdo al Registro Único de víctimas, entonces el panorama de la situación de violación de derechos humanos en Montes de María es muy grave, fuerte y a raíz de eso, las situaciones frente al tema de restitución de tierras las medidas que se han podido desarrollar e implementar de igual manera muestran avance como también dificultades y obstáculos.

Entre los objetivos de la ley de restitución de tierras o ley 1448 del 2011, pues el gobierno buscaba básicamente generar un marco de Justicia Transicional y que en este marco de justicia Transicional, pues se diera en un proceso de Restitución garantías de Restitución a través de procesos de Reparación y en ese sentido se pueda generar todo el marco jurídico y administrativo para que las víctimas del conflicto Armado pudieran tener las garantías de procesos de Verdad, Justicia, de que se les pudiera reparar de manera Integral y en el Caso de las medidas de Restitución

de tierras, pues, se busca un goce efectivo de los derechos humanos, básicamente la devolución de la tierra como un patrimonio de esa persona que fue desplazada o despojada en su momento en el marco del conflicto.

2. La efectividad de la ley 1448 del 2011 y los procesos de restitución de las víctimas se están cuestionando por parte de los habitantes del municipio. ¿A qué se debe esto?

R/: Como te dije en un principio, así como tiene muchos avances, también tiene muchas dificultades y retos. Pienso que las dificultades que se presentan son de distinta índole, una de tipo administrativo y otras jurídicas.

Digamos que entre los administrativos podemos anotar que está el tema de relación, que existe exceso de procedimientos y trámites y que muchas veces las víctimas de todas las áreas rurales tienen desconocimiento de esos procedimientos, entonces falta mayor socialización de las rutas de los derechos y población de las víctimas, y todo lo que tiene que ver con el proceso de reparación en el marco de la misma ley, de igual manera, pues hay deficiencia en la financiación de la ley. ¿Que obstaculiza esto? Bueno, no permite que de manera gradual o progresiva se dé cumplimiento a las sentencias de restitución de tierras o a los fallos judiciales o a las órdenes que se emiten en esas sentencias. Entonces muchas veces las instituciones demoran para darle cumplimiento a los fallos de sentencias, uno de los principales fallos es que se le restituya a la víctima su tierra, que devuelvan en mejores condiciones para que la víctima pueda nuevamente generar su proceso de proyecto de vida, tener las garantías de un retorno digno.

Otra de las dificultades es que como hay deficiencia en la financiación de la ley de víctimas entonces, los proyectos productivos, la misma compra de tierra, la construcción de vivienda digna y los planes complementarios para la víctima, para que tenga esa vida y calidad digna se ve obstaculizada porque muchas veces esos recursos no son destinados o no se generan a tiempo los procedimientos, entonces

eso también genera desconfianza, falta de credibilidad de las víctimas a la institucionalidad y pierden también como que esa esperanza de que sean restituidas.

3. Entre las medidas de Reparación se encuentra la restitución. ¿Esta medida implica además planes de capacitación y búsqueda de un empleo?

R/: Sí, en el marco del post conflicto existen otras medidas como lo es el proceso de rehabilitación e indemnización, de garantías de no repetición, que tenga conocimiento la víctima de lo que es la verdad, lo que es la justicia. Entonces, este proceso de restitución efectivamente tiene también un proceso de acompañamiento desde el Estado.

Un acompañamiento por la vía jurídica, donde a la víctima se le facilita a través del Estado, jurídicos y abogados de la Unidad de Restitución de Tierras para que le hagan un proceso de acompañamiento, pero muchas veces pasa que las víctimas no dan toda la información o tienen desconfianza con los funcionarios o de igual manera los tiempos que se acompañan hacia esa población víctima. Y también porque los opositores en su gran mayoría que fueron los despojadores o los que compraron de manera masiva y parcial las tierras son poseedores de grandes dominios de poder económico, entonces ellos tienen también su contraparte de abogados y están también asesorados.

Entonces esta parte de la defensa de los derechos de las víctimas también se ve obstaculizado porque mientras el Estado también tiene un sin número de población víctima que acompañar, los opositores tienen sus abogados digamos que de tiempo completo, mientras que la Unidad de Restitución de Tierras y el gran número de procesos de restitución, también mucho de los funcionario también tiene carga laboral y eso también dificulta los tiempos y los acompañamientos en los que no se les brinda una calidad sin igual de asistencia técnica y jurídica a las víctimas.

Frente al tema de acompañamiento, de planes de formación, de los planes que tienen que ver con generación de empleo, pues, son medidas complementarias y en los procesos de acompañamiento para lo que tiene que ver con capacitación, se da y se

articula con el SENA, con corporaciones, para todo el tema de empleabilidad o poder garantizar también empresas productivas o proyectos de emprendimiento, entonces se trabaja en articulaciones y asistencia técnica de formación tecnológica con estas instituciones de empleo. Y con el ministerio del Trabajo, siempre que existe un proyecto productivo por el ministerio del trabajo se dan asistencias técnicas directamente al Ministerio del Trabajo, y se articula de manera coordinada con el SENA y con las alcaldías locales porque estas también juegan un papel importante desde las competencias institucionales que por ejemplo, en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras, para el tema de las medidas debemos mejorar esta garantía de calidad de vida, de devolverle a la víctima su tierra. Los municipios deben contribuir a la exoneración de impuestos, es decir, que cuando ya a la víctima se le entrega su tierra, los dos primeros años esa víctima no tiene por qué pagar los impuestos frente al municipio sino que el Municipio tiene que garantizar un paz y salvo donde le están diciendo que esa tierra está libre de Impuestos y eso es una obligatoriedad de los municipios y muchas veces no lo están cumpliendo, lo mismo que el acompañamiento frente al tema psicosocial, el tema de asistencias humanitarias o acciones complementarias.

Por ejemplo, si yo tengo una víctima que se está restituyendo, la Unidad de Restitución de Tierras tiene la obligación de devolverle la tierra, es decir, comprársela y entregársela, tal como ella la tenía o en mejores condiciones. De igual manera tiene el derecho de Construirle una vivienda rural y lo articula con el Banco Agrario y el Ministerio de Vivienda y, un proyecto productivo, de la mano con el SENA y con la Unidad de Asistencia Técnica para las Víctimas.

Entonces, la ley, así como tiene muchos avances y tiene un proceso de articulación institucional, tiene vacíos.

4. ¿Considera que esta ley debe permanecer en mayor tiempo de vigencia que el que estipuló el congreso de la república?

R/: Pues sí, la ley en su primer momento tenía sus 10 años, en donde se evidenció que el tiempo que se estipuló resultó ser insuficiente para el número de Fallos de Sentencias de Restitución de tierras, y por lo tanto se tenía que ampliar.

Y además, al ampliar la ley de víctimas va de la mano con la implementación de los acuerdos de Paz o con los planes de Desarrollo con Enfoque territorial y para el caso de Montes de María y para el Carmen de Bolívar, nosotros somos un municipio focalizado para planes de Desarrollo con enfoque territorial, en ese sentido, al ampliar la ley de víctimas, va a permitir que en esos planes, el desarrollo rural sea más completo, sea más amplio y que mayor número de víctimas sea restituidas, sean reparadas de esa manera.

5. Realidad social: Opinión personal sobre los obstáculos para el cumplimiento de la ley 1448 del 2011 y los procesos de restitución de tierras.

R/: Se presentan varios obstáculos para que se implemente adecuadamente la ley, uno de ellos son la falta de implementación de las Microfocalizaciones, son mecanismos para priorizar casos de restitución de Tierras, sobre todo los casos con informe diferencial, casos de Mujeres, las cuales son violentadas sexualmente, son Mujeres cabeza de Familia. Entonces uno de los vacíos que tiene la ley 1448 del 2011, es que no se está implementando de manera integral, el proceso o el enfoque de género, entonces es importante que el proceso de la Microfocalización se dé porque permite identificar ese tipo de situaciones.

Otro de los obstáculos que se da, es que en Montes de María existe un fuerte liderazgo de un fuerte proceso de reclamación de tierras, referente a eso, este aumento se está presentando mucha situación de Amenazas, de temor, de miedos y que los líderes

han tenido que bajar el perfil en los procesos de restitución de tierras porque de hecho en Montes de María han asesinado a reclamantes de Tierras.

Entonces las garantías de repetición hay que fortalecerlas porque el Estado en ese sentido tiene que brindar protección adecuada a los reclamantes de tierra que es la garantía de No repetición, entonces uno de los obstáculos que se están dando es que en muchos de los Municipios, los planes de Prevención y los conceptos de Seguridad que se deben dar no se están dando porque eso permite que la Policía, la Infantería de Marina hagan procesos de acompañamiento a la misma Unidad de Restitución de Tierras para que este proceso a nivel rural se pueda implementar.

En este orden de ideas, el tema de la seguridad juega un papel importante para que la ley de Restitución de Tierras se pueda dar. Y lo otro que también se presenta como obstáculo es que muchas de las víctimas en procesos de Restitución desconocen la ruta de garantías de la Restitución, desconocen sus derechos, en ese sentido se tiene que mejorar la formación y la difusión de las rutas de Restitución de tierras.

Anexo V: Relación de investigaciones sobre la eficacia y la eficiencia en los procesos de restitución de tierras, segundos ocupantes y ley 1448 del 2011

No.	1
Año	2011
Título	Análisis de la incidencia de la ley 1448 de junio de 2011 de víctimas y restitución de tierras en el desarrollo rural, a partir de la aplicabilidad jurídica y económica en los municipios de Cáceres, Taraza y Caucasia pertenecientes al bajo cauca antioqueño
Autor	Sebastián Gil Álvarez, Lucero Ocampo Henao y Gonzalo Antonio Ramírez Tapasco
Carácter	Teórico, analítico- estadístico
Sinopsis	<p>“La presente monografía analiza la incidencia en el desarrollo rural de la Ley 1448 de junio 10 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras, a partir de la aplicabilidad jurídica y económica en los municipios de Cáceres, Taraza y Caucasia pertenecientes al Bajo Cauca antioqueño.</p> <p>En este trabajo se asume el tema del despojo de tierras como un factor que debe ser estudiado dentro de los análisis del desarrollo rural. Para ello se considera el impacto que tiene en el desarrollo rural la tenencia de la tierra, el desplazamiento forzado y las consecuencias que estas situaciones generan en los campesinos y por consiguiente en el país”.</p>

No.	2
Año	2012
Título	La restitución de tierras en Colombia: Expectativas y retos
Autor	Claudia Margarita Martínez Sanabria y Andrea Carolina Pérez Forero
Carácter	Teórico
Sinopsis	<p>“Se pretende hacer un estudio de la obligación a cargo del Estado Colombiano de restituir las tierras que les han sido arrebatadas a los desplazados-víctimas del conflicto armado, como parte de la obligación de reparación integral.</p> <p>Dentro de este contexto se analizará el problema del desplazamiento forzado interno en Colombia a partir de sus antecedentes e identificación de los derechos de los desplazados</p>

	<p>y la regulación y jurisprudencia que se ha expedido en la materia. Así mismo, se analizará</p> <p>la normatividad que regula la reparación integral a las víctimas y específicamente la restitución de tierras, contenida en la Ley 1448 de 2011, con el fin de identificar sus principales componentes y las expectativas y retos que conlleva su aplicación práctica, para que no sea simplemente un derecho consagrado en la Ley como mera ilusión de las víctimas, sino una realidad que materialice la justicia.”.</p>
--	--

No.	3
Año	2012
Título	¿La vulneración del principio de la confianza legítima genera responsabilidad administrativa en Colombia?
Autor	Adriana Sofía Molina Leyva y Diana Fernanda Rivera González
Carácter	Teórico
Sinopsis	<p>“En este trabajo, el lector encontrara un recorrido por principios fundantes de la confianza legítima, tal es el caso, de la buena fe y la seguridad jurídica, seguidamente haremos una descripción de los elementos inescindibles para configurar la confianza legítima por parte del administrado y con base en esto, una diferenciación entre las expectativas legítimas y los derechos adquiridos.</p> <p>Lo que le permitirá al particular ampararse en la correcta protección de la confianza legítima, capítulo de total importancia, pues incidirá en el amparo o no del principio.</p> <p>Igualmente, se realiza una breve descripción de las situaciones que debe considerar la administración para evitar la vulneración del principio de la confianza legítima, describiendo la responsabilidad en la cual se podría ver inmersa, a la luz del artículo 90 de nuestra carta política, y su obligación resarcitoria por los daños que llegase a producir...”</p>

No.	4
Año	2012
Título	¿El derecho para quién? La titularidad de la acción de restitución en la ley 1448 de 2011 o la ley de restitución de tierras
Autor	Michael Alex Monclou Chaparro
Carácter	Teórico

Sinopsis	<p>“La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, es un mecanismo establecido con el fin de restituir las tierras a las víctimas del conflicto armado en Colombia que las perdieron como consecuencia de un despojo violento o un abandono forzado.</p> <p>El presente texto analiza si existe una restricción a la titularidad de la acción en cabeza de la víctima en la etapa administrativa del proceso creado por la ley, y si dicha restricción es justificada teniendo en cuenta los principios de gradualidad, progresividad y seguridad que se presentan como fundamentales para la garantía de restitución y retorno”.</p>
----------	---

No.	5
Año	2014
Título	La restitución constitucional de tierras en contextos de conflicto: Experiencia de Colombia y Guatemala
Autor	Edward Francisco Álvarez Tafur
Carácter	Teórico, Analítico
Sinopsis	<p>“Esta investigación estudia el fenómeno de la restitución de tierras en contextos de conflictos armados a partir de las categorías del constitucionalismo liberal y social, por lo cual plantea la necesidad de superar y complementar los enfoques desde los Derechos Humanos, la Justicia Transicional y el Desarrollo. Para ello acude a la Escuela Sociocultural y transnacional del derecho con el propósito de construir y sistematizar los valores del Constitucionalismo Social, para luego desde una metodología comparada identificar la pertinencia de estos valores en los procesos de restitución de tierras países con debilidades rurales estructurales como Colombia y Guatemala”.</p>

No.	6
Año	2016
Título	Fortalezas y debilidades del procedimiento de restitución de tierras contemplado en la ley de víctimas
Autor	Napoleón Imbett
Carácter	Teórico, Revisión jurídica

Sinopsis	<p>“Se enmarca este artículo de reflexión en torno a una revisión jurídica sobre las debilidades y fortalezas del procedimiento adoptado por la Ley de Víctimas (1448 de 2011) para la restitución de tierras en la coyuntura actual colombiana. La implementación y los resultados de la Ley han generado controversias en los últimos años, puesto que en su materialización surgen otros sujetos procesales, y en especial, posibles víctimas atribuidas a la misma legislación, como son los poseedores de buena fe o segundos ocupantes, que, en algunos casos, es factible evidenciar que se restringen y desconocen sus derechos”.</p>
----------	---

No.	7
Año	2015
Título	La justicia transicional en Colombia como mecanismo esencial de restablecimiento de derechos frente a los antecedentes en Camboya y Sudáfrica
Autor	Yuliana Monterrosa Rico y Víctor Raúl Castilla Maussa
Carácter	Teórico
Sinopsis	<p>“En la presente monografía se enfoca el estudio, en cómo ha sido la protección de los Derechos Humanos en Colombia en el marco de la justicia transicional que se aplica en la modificación de un Estado en conflicto a un Estado de protección de los Derechos Humanos.</p> <p>Partiendo desde la perspectiva internacional hacia un enfoque nacional y específico, el primer tema para determinar la eficacia de la justicia transicional que se ha aplicado en Colombia es el referente a los Derechos Humanos en la legislación internacional, en este capítulo se busca exponer cual ha sido el concepto de derechos humanos que se ha tenido en la historia y como ha entrado al hombre a proteger el principio de la dignidad humana, en la legislación internacional. También se hace un estudio del origen de los derechos humanos y de los criterios de interpretación. Partiendo entonces de estos derechos hacia la creación del derecho internacional humanitario, que entra a regular la protección y respeto de los derechos humanos en el marco de un conflicto.</p> <p>Siguiendo el estudio de protección y defensa de los derechos humanos, en el segundo capítulo pretendemos a analizar de forma general cómo se desarrolló el conflicto en Camboya, contexto histórico y la eventual violación de derechos humanos, conflicto en el que se configuraron los delitos de lesa humanidad y genocidio...”</p>

No.	8
Año	2016
Título	La micro focalización en la restitución de tierras en Colombia

Autor	Ronald Rodríguez Rozo
Carácter	Teórico, Revisión bibliográfica
Sinopsis	<p>“El conflicto armado interno en Colombia ha generado una variedad de problemáticas sociales que violan los derechos humanos de la población, entre ellas, el desplazamiento forzado ha sido un tema de constante preocupación por parte del Estado. En este sentido, este trabajo indaga por el proceso administrativo de restitución de tierras que está a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras –URT–desde su creación en el 2011, en la medida que la restitución se da en medio del conflicto armado y no en un estado de posconflicto. Para ello, se realizó una revisión de literatura que permitiera dar un balance de los resultados obtenidos en estos cuatro años de puesta en marcha la URT, así mismo se analizan casos que dan cuenta de los puntos álgidos del proceso.”</p>

No.	9
Año	2016
Título	Restitución de tierras en Colombia: análisis y estudios de caso
Autor	Tulia Moreno, Javier Lautaro Medina, Adriana Patricia Fuentes y Andrea Lopera Lombana
Carácter	Teórico, estadístico
Síntesis	<p>“La presente publicación recoge una serie de artículos producidos por el Observatorio de Restitución de Tierras de Cinep /PPP, “Tierra y Derechos”, que ha realizado un seguimiento detallado a la implementación de la política de restitución de tierras a partir de la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, conocida como «Ley de Víctimas y Restitución de Tierras» y los Decretos Ley 4633, y 4635 del mismo año, estos últimos referidos a la restitución de derechos territoriales de comunidades indígenas y negras. Este conjunto de normas ha buscado propiciar la implementación de medidas de reparación integral para las víctimas de masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, confinamiento, entre otras violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, que han provocado el desplazamiento forzado de más de seis millones de personas y el despojo y abandono forzado de considerables extensiones de tierras a lo largo de la geografía nacional.</p> <p>Aunque todavía no hay una cifra que cierre el debate sobre las dimensiones del despojo y abandono forzado de tierras, diversos estudios han indicado que oscila entre los cuatro y los seis millones de hectáreas. En el trabajo del Observatorio se han analizado diversas temáticas asociadas a la restitución, cuyos resultados se muestran en los textos que aquí se compilan y que corresponden a dos enfoques metodológicos. El primero, plantea el estudio de caso como forma de abordaje para revisar en detalle la implementación del proceso de restitución en una situación concreta y en un contexto regional particular y, a partir de allí, extraer conclusiones y recomendaciones, tanto para el caso como para otros de características similares. El segundo enfoque corresponde a temáticas generales que aplican para diversos casos en todo el país, y que son de importancia para la implementación de la restitución, en perspectiva de derechos humanos”.</p>

No.	10
Año	2016
Título	Ley de víctimas: un debate en torno a la inclusión y la exclusión social
Autor	Gloria Alcira Urrego Pava
Carácter	Teórico

Sinopsis	<p>“En este trabajo refleja que Colombia ha dado grandes pasos en la búsqueda de la paz, sin embargo, el esfuerzo va más allá de la culminación de complejos procesos de negociación con grupos armados, la construcción de paz también implica analizar, si el Estado está brindando los instrumentos adecuados a las víctimas del conflicto armado colombiano que les permita materializar los derechos constitucionales como lo establece la ley 1448 de 2011 y con ello lograr una real <i>inclusión social</i>, que les permita a las víctimas desarrollar la capacidad de acceder de manera paralela y sin obstáculos, a oportunidades en igualdad de condiciones, en las áreas de los mercados, servicios y espacios para así disminuir sus condiciones de vulnerabilidad y lograr una convivencia justa, pacífica y equitativa...”</p>
----------	--

No.	11
Año	2016
Título	Dilemas de los segundos ocupantes en la restitución transicional de tierras en Colombia
Autor	Edward Francisco Álvarez
Carácter	Teórico
Sinopsis	<p>“El libro terminara con el artículo de EDWARD FRANCISCO ALVAREZ TAFUR dedicado a Dilemas de los segundos ocupantes en la restitución transicional de tierras en Colombia. Este texto aborda desde el marco de la Justicia Transicional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la complejidad contextual y normativa de los ocupantes secundarios, esto es, las personas que se encuentran en los predios que deben ser restituidos a sus originales y legítimos titulares. La tesis del autor se remite entonces, a resaltar el papel integrador de la restitución transicional de tierras con el marco de vigencia y exigibilidad de los derechos sociales como garantía de dignidad humana para las personas que deben entregar los predios que no tuvieron relación con la pérdida de este y que se encuentran en condiciones particulares de vulnerabilidad.”.</p>

No.	12
Año	2017
Título	Análisis del enfoque de nueva ruralidad como modelo de desarrollo e instrumento para la construcción de paz en Colombia
Autor	Erika Alejandra carrillo y Daniela Useche Triana
Carácter	Teórico

Sinopsis	<p>“Dentro del proceso histórico, la ruralidad siempre ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad colombiana y a pesar de ello, el campo ha sido cuna de las principales problemáticas del país, generando una crisis continua en el sector rural, producto de factores políticos e ideológicos, la estructura de la propiedad, las relaciones de trabajo, el uso y tenencia de la tierra, la falta de intervención por parte del Estado y la economía del narcotráfico. Estas problemáticas están relacionadas con la implementación de modelos de desarrollo que no han redundado en la atención de las necesidades de la población. En este marco, surge la Nueva Ruralidad como una propuesta que pretende dar solución a las múltiples problemáticas y contribuir a la construcción de paz. Varios expertos la definen como un enfoque comprensivo de la ruralidad que busca superar la visión productivista y el dualismo rural urbano a través de un fortalecimiento institucional, con el fin de captar las múltiples dimensiones del desarrollo, fundamentado en el enfoque territorial. Por lo anterior, mediante un análisis histórico lógico se revisa el concepto de nueva ruralidad y su coherencia o no con la Reforma Rural Integral del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional.”.</p>
----------	--

No.	13
Año	2017
Título	Nociones de reconciliación en el marco de los mecanismos de justicia transicional en Colombia: ley de justicia y paz (ley 975 de 2005) y ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011)
Autor	María Alejandra Espinosa Montes
Carácter	Teórico
Sinopsis	<p>“El propósito de esta monografía es mostrar las nociones de reconciliación, sus diferencias y continuidades, en los mecanismos de justicia transicional existentes en Colombia: la ley de justicia y paz y la ley de víctimas y restitución de tierras. Como fundamento teórico se tomó la teoría de la justicia transicional y sus conceptos, incluyendo el debate teórico con respecto a la multiplicidad de significados de la reconciliación. También fue necesario saber el contexto histórico en el cual se crean las leyes de justicia y paz y de víctimas a fin de obtener mayor claridad acerca del discurso que se presentó en la elaboración de estas y las necesidades circunstanciales en el país en torno a la reconciliación. Esta investigación se puede considerar importante en el sentido que puede dar a conocer hacia qué y hacia quién ha estado orientadas dichas leyes en lo que respecta al tema de la Reconciliación.”.</p>

No.	14
Año	2018
Título	La reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco de la justicia transicional
Autor	Claudia Margarita Martínez Sanabria
Carácter	Teórico
Sinopsis	<p>“...El conflicto armado en Colombia ha afectado de forma considerable a la población civil, con más de 8`190.000 víctimas individualizadas a 2016, que corresponde aproximadamente al 17% de la población total del país. No obstante, la magnitud de este problema social, hasta antes de 2005 no se había incluido dentro de la agenda política la necesidad de abordar la reparación a las víctimas como una política de Estado. Las medidas existentes se enfocaban en la atención y asistencia humanitaria de las víctimas, principalmente desplazados, con un enfoque asistencialista y basado en el principio de solidaridad.</p> <p>Con la Ley 975 de 2005, en el marco del proceso de desarme y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, se implementaron medidas para la reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, desde un enfoque de justicia transicional. Este marco político ha marcado considerablemente la política pública en materia de reparación que actualmente se rige por la Ley 1448 de 2011.</p> <p>Dentro de este contexto, en el presente trabajo de investigación se analiza la política pública que se ha formulado en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia, teniendo en cuenta los estándares internacionales de reparación que han sido construidos por la doctrina y la jurisprudencia dentro del marco especial de la justicia transicional. Para ello se plantearon como objetivos específicos: i) identificar los estándares internacionales de los principales mecanismos de la justicia transicional, y de la reparación a las víctimas en particular, ii) identificar, de forma general, el origen y características del conflicto armado colombiano, con especial énfasis en su magnitud con respecto a las víctimas, iii) analizar los procesos de inclusión del problema en la agenda política, iv) describir los aspectos relevantes de la formulación de la política de reparación, y finalmente v) resaltar resultados parciales de la implementación de la política de reparación que se consideran significativos”.</p>

No.	15
Año	2018
Título	Eficacia de la Jurisdicción de la restitución de tierras en la ciudad de Santiago de Cali
Autor	María Fernanda Niño Cáceres y Josie Alejandra Angulo García
Carácter	Teórico
Sinopsis	<p>“Este trabajo de investigación data con la promulgación de la ley 1448 de 2011 donde el Estado reconoció la existencia del conflicto armado interno, lográndose la creación e implementación de una serie de medidas de protección y reivindicación para aquellos que vivieron los efectos de la violencia acontecidos en nuestro país. Hasta antes de la existencia de la enunciada ley, no existían procedimientos judiciales o trámites administrativos especiales que permitieran materializar y garantizar la restitución de tierras o cualquier otra medida resarcitoria que proteja los derechos de las víctimas del flagelo.</p> <p>No obstante, con la promulgación de la ley de víctimas y restitución de tierras se vislumbraba un cambio en beneficio de los agraviados, pero tras seis años de aplicación de la ley nos cuestionamos la efectividad en el cumplimiento de los objetivos planteados, así como los retos que se deben enfrentar para atender de manera adecuada cada caso en concreto desde la etapa administrativa hasta la etapa del pos-fallo.</p> <p>Por lo anterior, la investigación arrojó como problema jurídico determinar “la eficacia de la jurisdicción sobre restitución de tierras en la ciudad de Santiago de Cali, contenida en la ley 1448 de 2011”; Planteando como objetivo general establecer si lo resuelto en los fallos de los juzgados de restitución de tierras de la ciudad satisfacen las pretensiones de los solicitantes conforme a la ley...”</p>

Investigaciones de carácter empírico

No.	1
Año	2011
Título	Análisis del impacto de las políticas públicas de ley de víctimas y restitución de tierras; ley orgánica de ordenamiento territorial frente a la reparación y restitución de las víctimas de la región de los montes de María
Autor	Ana maría Patiño Salgado
Carácter	Empírico

Sinopsis	<p>“Basados en la situación actual que vive la Región de los Montes de María, donde la mayoría de su población se encuentra perjudicada por los impactos que ha dejado el conflicto armado; el desarrollo de este trabajo está inspirado en poder contemplar un análisis del posible impacto de los mecanismos que propone el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en manera de soluciones a la problemática social, política y económica que se pueden obtener de la formulación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la Ley de Ordenamiento Territorial frente al problema de la reparación y la restitución de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado en la Región de los Montes de María”.</p>
----------	---

No.	2
Año	2014
Título	Conflicto colombiano y ley de víctimas
Autor	Ana carolina Vargas Chávez
Carácter	Empírico, cualitativo
Sinopsis	<p>“El propósito fundamental de este ensayo es mostrar la situación que día a día viven miles de personas desplazadas por la violencia en el país, así mismo evidenciar la Gestión Pública que se realiza en los diferentes municipios a favor de la población en condición de desplazamiento, ahora reconocidos como población víctima del conflicto armado. Como ejemplo se tomará el caso de la población del Municipio de Cota.</p> <p>Entonces ¿qué ha hecho el Estado para resarcir al desplazado y devolverle el estatus que han perdido las personas víctimas del Conflicto? y ¿cuál es el papel de las entidades internacionales, nacionales y municipales en la atención que se brinda a esta población en condición de desplazamiento y en la protección de sus derechos?</p> <p>Para abordar este tema es importante primero conocer que se entiende por desplazamiento y quien es un desplazado, según la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, desplazado; son todas aquellas personas con un grado de vulnerabilidad alto en el mundo, se diferencian de los refugiados, ya que estos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, si no que permanecen dentro de su propio país. En determinadas circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el</p>

	<p>mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida. (ACNUR, 2007) Por razones humanitarias “el ACNUR asiste a 5.4 millones de desplazados internos en el mundo” (CINU, 2000).</p> <p>Colombia un país que ha sufrido el flagelo de la guerra durante décadas, a pesar de contar con recursos importantes que hacen de este un lugar digno para vivir en un clima de dignidad, paz y justicia social, constantemente esto se ve opacado por enfrentamientos, barbaries e impunidad; de una violencia que con el pasar de los tiempos parece no tener fin, y todo lo contrario pareciera que se avivara con cada segundo y se hiciera cada día más fuerte, una realidad de la que muchos han sobrevivido y otros no.</p> <p>Esta preocupante situación se ha presentado por diferentes causas, principalmente por los continuos enfrentamientos entre grupos de paramilitares, guerrillas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, los cuales han dejado incontables seres humanos muertos, discapacitados, desplazados, desaparecidos, aterrorizados y secuestrados, entre muchos otros casos y especialmente por la fragilidad del Estado para proteger a la población y garantizar sus derechos. Además de las secuelas físicas, la mayoría de estas violaciones a los derechos humanos también han dejado consecuencias negativas en la población en la parte psicológica, afectiva y emocional.”.</p>
--	---

No.	3
Año	2015
Título	Análisis del desplazamiento forzado y restitución de tierras en Jiguamiandò y Curvaradó a la luz de la ley 1448 de 2011
Autor	Edwin Fabián Linares Parra, Cesar Augusto Ramos Zabala, David Alcides Bajonero Contreras y Daniel Mauricio Miranda Moya
Carácter	Empírico, cualitativo
Sinopsis	“La investigación se basa en la problemática que se ha venido presentando hace más de 15 años en las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandò, y aunque el estado ha intervenido en esta situación incierta, con su proyecto de ley 1448 (ley de restitución de tierras) no se ha logrado un gran avance frente a esta problema, lo cual es preocupante ya que por más de 15 años no solo se le ha vulnerado el derecho a una propiedad a estas comunidades, sino también los derechos art.11 a la vida digna, art.7 el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, art.63 los bienes de uso público, los parques naturales, las

	tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
--	--

No.	4
Año	2016
Título	Incidencia de la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas Y restitución de tierras en el municipio de Abrego
Autor	Ana María Manosalva García y Diógenes Villegas Flórez
Carácter	Empírico
Sinopsis	<p>“La ley 1448 de 2011 tiene como objetivo principal hacer frente a una de las reivindicaciones de larga data de las víctimas del desplazamiento forzado en el último siglo en Colombia, a saber: la restitución de tierras. a pesar del gran avance de la mencionada ley en aspectos tan fundamentales como el reconocimiento por parte del estado de la existencia del conflicto armado, al igual que la aplicación del derecho internacional humanitario para las víctimas y, en especial, las medidas de protección para aquellos cuyas tierras son restituidas; no obstante, la restitución sigue siendo más un hito que una realidad debido a que la ley posee serios problemas, específicamente, en materia de acceso a la tierra, la protección a la población que retorna, así como a los líderes de los procesos de restitución”.</p> <p>.</p>

No.	5
Año	2016
Título	La reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en la región del Catatumbo: análisis en el marco de la ley 1448 de 2011
Autor	Ladis María Hernández Manzano y Gerson Yahir Vergel
Carácter	Empírico, Estadístico

Sinopsis	<p>“Este trabajo expone una situación en la que miles de víctimas en la región del Catatumbo han sufrido tragedias humanitarias lamentables por más de cinco décadas debido a los actores armados ilegales en complicidad con el estado, teniendo como consecuencias desplazamientos, desaparición forzada, violaciones a los derechos humanos, acceso carnal violento y despojo de tierras y muchos aspectos sociales, económicos, políticos, lo cual, cada ciudadano conocedor de la realidad en que se vive hay que buscar estrategias y alternativas para que encontremos una paz que es lo que en realidad todos los seres humanos anhelamos y ayudar a propender por esos grandes valores y el respeto por la dignidad humana”.</p>
----------	---

No.	6
Año	2017
Título	Reparación de las víctimas en el posconflicto de cara al acuerdo de paz con las FARC
Autor	Manuel Leandro Rincones Ascanio y Amalia Josefina Polo Henríquez
Carácter	Empírico
Sinopsis	<p>“El propósito de esta investigación fue analizar la política de reparación de las víctimas en el posconflicto del estado colombiano. La investigación está sustentada en autores como Howland (2015), Salazar y Galvis (2010), Girard (2006), entre otros y se enmarca metodológicamente como una monografía. El estudio se realiza dada la actualidad del acontecer político colombiano, encuadrado en un fin al conflicto armado que por décadas ha sostenido con la FARC. En el desarrollo del estudio se señala que en ese proceso debe observarse la capacidad del estado de brindar verdad y reparaciones a las víctimas por la vía judicial u otro mecanismo idóneo para ello, so pena de sufrir mayores lesiones de no atender al debido resarcimiento de los daños ocasionados. En tal sentido, ese fin del conflicto exige acuerdos claros y precisos buscando la paz, la justicia y la restauración del hilo democrático en tales relaciones, implicando proporcionar mecanismos de reparación a las víctimas en el posconflicto. De allí que, una vez desarrollado el estudio, se concluyó que existen deficiencias en el acuerdo realizado, por lo cual se hicieron propuestas de mejora de este, basado en políticas públicas coherentes que vayan en beneficio de las víctimas de este”.</p>

No.	7
Año	2017
Título	La restitución de tierras y los segundos ocupantes de buena fe
Autor	Ross Leidy Troncoso Olaya, Yenny Castañeda Rordíguez y Cindy Vanessa Bravo Hernández
Carácter	Empírico
Síntesis	<p>“El presente documento investigativo, busca proyectar la situación jurídica de los Opositores y Segundos Ocupantes, teniendo en cuenta el suceso actual en Colombia, ya que está siendo protegida mediante los acuerdos administrativos efectuados por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, garantizándoles así estándares mínimos como: vivienda, compensación en tierra o dinero, y la asignación de un proyecto productivo en el predio objeto de restitución u otro de propiedad de los segundos ocupantes, lo cual ha sido posible con la puesta en marcha de la normatividad vigente y correspondiente al tema, como lo es la (Ley 1448, 2011), y demás normatividad correspondiente que llena los vacíos existentes en la norma y hace que en la realidad el cumplimiento de la misma se real frente a las necesidades de las personas despojadas de sus tierras”.</p>

No.	8
Año	2018
Título	La restitución de tierras en Colombia y la reparación transformadora en la construcción de la paz: la experiencia en Santander desde la aplicación y efectividad de los fallos judiciales
Autor	Elisa María Martín Peré
Carácter	Empírico
Síntesis	<p>“Describe la restitución de tierras abandonadas o despojadas en el contexto de un conflicto armado, afirmando que es una medida de reparación prevista en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 1448/2011. En Santander, los jueces de tierras han dictado 55 sentencias hasta diciembre de 2016. Este artículo tiene como objeto analizar el estado de la cuestión de la restitución en el departamento, concretamente la aplicación y efectividad de la ley, a través de un análisis descriptivo e interpretativo de los fallos judiciales y la etapa post-fallo. Para ello, dada la complejidad del problema a investigar se han consultado diversidad de fuentes: normativa y jurisprudencia nacional e internacional, informes y estadísticas oficiales, bases de datos e investigaciones de organizaciones de derechos humanos, prensa y bibliografía de contexto. Asimismo, se han realizado entrevistas a diversos actores del proceso de restitución de tierras y visitas a predios restituidos. Si bien los jueces y magistrados de tierras aplican mayoritariamente lo establecido en la ley, hay algunas dificultades en la implementación de las órdenes dictadas que limitan una reparación efectiva y transformadora de las víctimas. La flexibilidad de la política pública de restitución de tierras permite que este proceso en construcción pueda superar los escollos señalados en el texto, por el mantenimiento de la competencia de los jueces en la etapa posterior al fallo hasta que se garantice la reparación efectiva o la tendencia a aplicar la medida subsidiaria de compensar con un bien equivalente, en lugar de ordenar la entrega material del bien reclamado”.</p>

No.	9
Año	2018
Título	Principios pinheiro aplicados al tratamiento de los segundos ocupantes en los procesos de restitución de tierras en Colombia
Autor	Maritza Pérez Amaya, Jhon Wilmer Barrera Estupiñán y Belkis Alejandra Forero Gelvez
Carácter	Teórico
Síntesis	<p>“El objetivo de este <i>paper</i> es analizar el alcance de los Principios Pinheiro en el tratamiento de los segundos ocupantes en los procesos de restitución de tierras en Colombia.</p> <p>Se trata de un estudio enmarcado en el Paradigma histórico- Interpretativo, el enfoque cualitativo y el tipo de investigación jurídica.</p> <p>Se aborda en primer lugar las características y naturaleza de los Principios Pinheiro en el terreno internacional y nacional, luego se analizan las normas internacionales y nacionales relacionadas con los derechos de los segundos ocupantes, y, por último, se describen algunos de los aportes de estos principios en el contexto de la restitución de tierras en Colombia. Los resultados muestran que los Principios Pinheiro pertenecen a la categoría <i>soft law</i>, pero con efectos jurídicos al servir de directriz en los adelantos legislativos y el diseño de políticas públicas. Hace parte del bloque de constitucionalidad y ello implica su observancia dentro de los casos de los segundos ocupantes”.</p>